

00423
10

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO



FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

HEGEMONIA Y LEGITIMIDAD DEL NEOLIBERALISMO,
EL CASO DE MEXICO

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN SOCIOLOGIA

P R E S E N T A :

MARIA LUISA ELIAS MORENO

ASESORA: MTRA. IRENE SANCHEZ RAMOS



MEXICO, D. F.

**TEJIS CON
FALLA DE ORIGEN**

2003

A



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos

Quiero aprovechar el presente espacio para expresar mi gratitud a las siguientes personas:

A Dios:

Porque siempre has creído en mí y has estado presente en todos los momentos de mi vida, dándome ánimos y motivos para seguir adelante.

A mis padres:

No hay palabras que puedan expresar todo el agradecimiento y el amor que les profeso. Quiero darles las gracias, en tanto la meta que hoy cumplo es producto de su esfuerzo, dedicación y ejemplo.

A Gilberto:

Tú eres aquella parte que completa mi vida y que le da luz a cada uno de mis días. Gracias por confiar y creer en mí, por tenerme paciencia y por darme todo el apoyo y motivación que necesité para culminar esta meta.

A Mary Jose, Irene y Héctor Vera:

Su guía resultó fundamental para obtener el sentido que se observa en mi trabajo. Gracias por el tiempo que me dedicaron y el interés que siempre me mostraron.

A mis sinodales Sergio Ortiz, Eduardo Ruiz y Adrián Sotelo:

Quiero agradecerles el tiempo que me dedicaron, la gentileza con la que me trataron, así como sus observaciones, las cuales en todo momento resultaron muy enriquecedoras.

la Dirección General de Bibliotecas
NAM a difundir en formato electrónico e impreso
contenido de mi trabajo recepcional
NOMBRE Maria Luisa Díaz
Noreno
FECHA: 27/ mayo / 2003
FIRMA: [Firma]

Índice

Introducción	1
1) Planteamiento general: Ideología, estructura política y estructura económica	9
<i>Las ideologías: expresión del "ser en el mundo"</i>	9
<i>Legitimidad y hegemonía: una cuestión de poder</i>	10
<i>El detonante</i>	17
2) El contexto internacional (décadas de 1960 y 1970)	22
<i>La crisis social y política del capitalismo</i>	23
<i>La crisis económica en los países centrales</i>	26
<i>Los años dorados</i>	26
<i>Un nuevo contexto mundial se perfila: el término del gran auge posbélico</i>	30
<i>El neoliberalismo: expresión del viraje internacional hacia la derecha</i>	33
<i>El proceso de reestructuración a escala mundial</i>	38
3) El régimen posrevolucionario (1917-1982)	45
<i>El régimen político-social mexicano</i>	45
<i>El creciente malestar social ante un sistema autoritario</i>	47
4) La crisis económica de 1982	59
<i>México y el patrón de acumulación basado en la sustitución de importaciones</i>	60

<i>La conformación del bloque de poder en el periodo posrevolucionario</i>	69
<i>La desestabilización del bloque de poder</i>	72
5) Los primeros pasos hacia la reestructuración neoliberal (1982-1988)	80
<i>El malestar social hacia el Estado se exagera</i>	91
<i>El desenvolvimiento general del sexenio de Miguel de la Madrid</i>	96
6) La consolidación del modelo neoliberal (1988-2000)	98
<i>La aplicación de las reformas neoliberales continúa</i>	98
<i>El gradual desplazamiento del grupo hegemónico en el bloque de poder</i>	107
<i>Un balance general del sexenio de Salinas de Gortari</i>	117
<i>Ernesto Zedillo: la consolidación del neoliberalismo y la caída del grupo hegemónico posrevolucionario</i>	120
Conclusiones	126
Bibliografía y hemerografía	137

Introducción

I

El eje del presente trabajo gira en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué factores propiciaron que el neoliberalismo lograra imponerse como la alternativa hegemónica de reestructuración capitalista a finales del siglo XX? Y ¿cómo logró legitimarse?

La ideología del neoliberalismo tuvo su origen en la década de 1940 con un texto titulado *Camino a la servidumbre*, de Friedrich Hayek. Economista y asiduo defensor de las premisas liberales, Hayek conformó en 1947 una asociación denominada la Sociedad de Mont Pelérin –Suiza- con la ayuda de personalidades como Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig von Mises, Walter Lippman, entre muchos otros. Todos ellos se identificaban en su oposición al tipo de organización social surgida después de la Segunda Guerra Mundial –basada en un Estado intervencionista/de bienestar- ya que, en su opinión, no sólo constituía una seria amenaza contra la libertad y los ideales liberales de progreso, sino también estaba arrastrando a los países capitalistas avanzados occidentales por el mismo rumbo que seguían Alemania, Italia y Rusia, es decir, por el camino del totalitarismo y de la servidumbre –por el camino del nazismo, del fascismo y del socialismo respectivamente- (Hayek, 1986).

Dicha sociedad se constituyó en un grupo sumamente organizado y dedicado a desarrollar una propuesta teórica y política contraria al socialismo y cualquier tipo de propuesta que pudiera aparecer como tal, incluyendo la del capitalismo mixto¹, para preparar las bases de un capitalismo liberal, duro y libre de regulaciones en un futuro. Durante aproximadamente tres décadas, las voces de los hoy denominados neoliberales no fueron escuchadas debido al auge económico que experimentó el capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial. Los avisos

¹ A grandes rasgos lo que aquí denomino capitalismo mixto fue el tipo de organización social que prevaleció aproximadamente de las décadas de 1940 hasta principios de 1980 –por supuesto en los países capitalistas- y que tuvo como ejes fundamentales de apoyo: 1) la intervención del Estado en la economía para garantizar el desarrollo de políticas económicas productivas y redistributivas; y 2) la generación de pactos sociales o frentes políticos de carácter populista como el factor articulador del conjunto de las actividades sociales.

neoliberales sobre el “peligro” que representaba la intervención del Estado para organizar y dirigir la vida económica y social de las naciones capitalistas, parecían poco verosímiles en contraste con la fase de crecimiento –sin precedentes hasta ese momento– que experimentó el capitalismo, en especial durante las décadas de 1950 y 1960.

No fue sino hasta la década de 1970, con la llegada de otra gran crisis y de un periodo de larga y profunda recesión –que por primera vez en los países centrales combinaba bajas tasas de crecimiento y altas tasas de inflación–, que las “predicciones” neoliberales fueron tomadas en cuenta como posibles explicaciones, y sus premisas, como posibles soluciones para superar la crisis que se manifestaba no sólo en un aspecto económico sino también en los ámbitos social y político². En general, las explicaciones siguieron dos vertientes, una representada por Hayek y otra por Friedman.

Para Hayek, por ejemplo, las raíces de la “desgracia” capitalista, se ubicaban “en el poder nefasto y excesivo de los sindicatos y, de manera más general, del movimiento obrero, que había corroido las bases de acumulación capitalista con sus presiones reivindicativas sobre los salarios y con su presión parasitaria para que el Estado aumentara cada vez más los gastos sociales” (Anderson, 1995: 8). Este hecho, en su opinión, había propiciado la destrucción de los niveles de beneficio y ganancia, necesarios para que las empresas pudieran seguir funcionando y compitiendo adecuadamente, provocando a largo plazo el desencadenamiento de serios procesos de inflación.

Para Milton Friedman, principal representante del neoliberalismo en el continente americano, la crisis capitalista había sido producto del fracaso del Estado en el área monetaria. Al igual que Hayek, ubicaba al Estado como el responsable de frenar el desarrollo económico de los países y de incurrir en desorganización y despilfarro ya que excedía su “naturaleza” al adjudicarle tareas que no le correspondían tales como: el control y fijación de impuestos –que resultaban excesivos–, de precios –poco competitivos–, el fomento de ciertos sectores

² Como veremos en el capítulo 2, a la par de una profunda crisis económica, el capitalismo se enfrentaba a una crisis social y política muy seria, que amenazaba con corroer eficaz y rápidamente los cimientos de su hegemonía y legitimidad. Al respecto, se observó, por ejemplo, el gradual fortalecimiento y avance del poderío soviético así como el surgimiento por todo el denominado Tercer Mundo de movimientos proclives a buscar nuevos proyectos de sociedad. A movimientos caracterizados por luchar por un orden diferente como el estudiantil, el feminista, el obrero, etcétera, se unieron otros de tipo antibélico, ecologista, pero especialmente de liberación nacional –sobre todo en África, como producto de su descolonización, y en Asia– los cuales buscaban redefinir las relaciones tradicionales entre los Estados imperialistas por un lado, y los coloniales, semicoloniales y dependientes por otro.

productivos en detrimento de otros –lo que introducía factores “destabilizadores” en el “perfecto” funcionamiento del mercado, “desvirtuando” el sistema de libre competencia- y la inversión de caudales públicos en actividades poco o nada productivas. El modelo económico seguido hasta ese momento, en la opinión de ambos, no había causado más que estancamiento económico al inducir el excesivo crecimiento del aparato estatal y, como consecuencia de ello, el aumento del gasto público y el número de funcionarios, a la vez que deudas externas, falta de competitividad ante la inminente apertura global, deformación de los “ciclos naturales” de la acumulación de capital y del mercado de trabajo –que por sí mismos pueden regularse-, sólo por mencionar algunos “males”.

En cuestión de “remedios”, recomendaban: romper con el poder excesivo de los sindicatos, reducir los gastos y las inversiones sociales, luchar a toda costa por una estabilidad monetaria, seguir una disciplina presupuestaria férrea, realizar reformas fiscales para incentivar a los agentes económicos –“en otras palabras, esto significa reducciones de impuestos sobre las ganancias más altas y sobre las rentas” (*idem*)-, así como restaurar la tasa “natural” de desempleo –es decir, aumentar el ejército de reserva-. Se debían abolir también, los controles sobre el comercio interior y exterior para garantizar y promover el bienestar de los ciudadanos de un país, sobre todo de aquellos que vivían en países subdesarrollados.

II

Los preceptos que retomó el neoliberalismo en general provinieron especialmente de Locke y Adam Smith, dos de los fundadores más importantes del liberalismo clásico. Para ellos el ser humano era por naturaleza un ser económico, que no necesitaba más que de una plena libertad y la garantía de que sus derechos naturales iban a ser respetados, para que fuera feliz y se desarrollara adecuadamente. Estos preceptos, ya anteriormente habían sido aplicados al capitalismo e igualmente habían sido criticados por grandes intelectuales, pensadores y científicos sociales –comenzando por Rousseau, pasando por Marx, hasta llegar a Keynes-, por resultar en la práctica ineficientes y tender hacia la polarización del ingreso y la riqueza, lo que se traduce a la larga en el enriquecimiento de unos pocos y en la miseria de las mayorías. Incluso su ineficiencia parecía haber sido comprobada una vez que las políticas keynesianas fueron implementadas arrojando resultados positivos –los denominados años dorados-.

A pesar de ello, como ya mencionamos anteriormente, en la década de 1970 resurgieron como parte de una nueva ideología que habría de guiar el proceso de reestructuración, a partir de los ochenta, tanto de los países capitalistas como de los exsocialistas.

La década de 1970 constituyó, en sí, un laboratorio muy rico en propuestas, donde lucharon proyectos como el socialismo, el comunismo, el capitalismo liberal, el mixto, y demás variantes. Todas ellas tenían verdaderas posibilidades de triunfar, a tal grado que era difícil en esos momentos pronosticar el rumbo que tomaría el mundo a finales del siglo. Sin embargo, ya para 1980 había un ganador: el capitalismo liberal. El neoliberalismo ya había vencido no sólo sobre el socialismo y el comunismo, sino sobre otras variantes de capitalismo. *¿Qué propició que fuera precisamente esta ideología la que saliera triunfante, la que lograra imponerse como la alternativa hegemónica?*

No pudo haber sido su eficacia o la veracidad de sus propuestas ya que a dos décadas de haber dejado en manos del "libre mercado" nuestro desarrollo, aún no hemos podido ver, en especial en los países periféricos, el regreso del crecimiento económico y ya no se diga del bienestar social. Aunque se ha logrado controlar variables como la inflación, las economías aún siguen una tendencia al estancamiento: los niveles de crecimiento —si es que ha habido alguno— han sido mínimos —cuando no regresivos—. Al mismo tiempo, las probabilidades de sufrir crisis constantes en un futuro son altas ya que la reestructuración neoliberal ha tendido a sentar bases sumamente volátiles y precarias. Volátiles al estar las economías sujetas a los caprichos del poderoso y cada vez más autónomo capital financiero; y precarias debido a la subordinación de las naciones a las condiciones que establecen las compañías transnacionales, las cuales tienen el poder real de decidir el rumbo que puede o no tomar un país determinado.

En cuanto a bienestar social, podemos decir que problemas como la pobreza, la exclusión y la desigualdad han experimentado un serio incremento. Entre los países ricos y los pobres, entre las clases altas por un lado, y las medias y bajas por otro, se ha ido abriendo un abismo cada vez más difícil de superar. El regreso a los preceptos liberales clásicos no ha causado más que la polarización del mundo entero en una pequeña porción que acapara la mayor parte de la riqueza, contra la mayoría de la humanidad que vive en la pobreza y en la pobreza extrema. En este sentido, según Carlos Vilas:

Los países que el Banco Mundial considera pobres —es decir, con ingreso medio por habitante de menos de un dólar al día—, que en conjunto representan más de la mitad de la población del mundo, captan 7% del producto mundial, mientras que los países ricos,

con 8% de la población mundial, concentran casi 70% del producto del mundo y 80% del comercio mundial –más de dos tercios del cual se transa entre los países desarrollados-, y recibe más de 80% de la inversión extranjera directa (1999; 79).

A partir de la reestructuración mundial de los ochenta es que percibimos cada día con mayor preocupación el avance de tendencias como: el ensanchamiento de las desigualdades entre centro y periferia, quedando ésta inserta de manera aún más subordinada a la dinámica internacional; el aumento del desempleo en gran parte debido a que el avance de la tecnología continúa expulsando trabajo humano sin que aún se encuentren mecanismos adecuados para ir asimilando a los desplazados y a los recién llegados; la caída de los salarios y la constante pérdida de los derechos sociales que se ganaron durante todo el siglo pasado; la eliminación de gran parte de los instrumentos que gestionaban el juego económico –de corte keynesiano- para tratar de contrarrestar la tendencia del capitalismo a crear desigualdad; así como la propagación de economías subterráneas e ilegales que al poco tiempo se han constituido en verdaderas fuentes de poder capaces de incidir directamente en la organización y funcionamiento del juego económico político internacional –de tal manera que puedan mantener sus beneficios-.

Podríamos decir sin temor a caer en una exageración, que en vez de un avance, ha habido un retroceso pues contrariamente a trabajar sobre los errores del pasado para tratar de superarlos y salvaguardar los logros, se ha continuado cometiendo tales errores tratando de dismantelar todos los avances.

Sin embargo, aún con todos los defectos y problemas que ha venido causando el modelo de acumulación inspirado en el neoliberalismo, y ante la presencia de signos tan preocupantes como el ensanchamiento de la pobreza, su aplicación sigue avanzando. Hasta el momento es la propuesta de organización social que goza de la hegemonía mundial. Su incapacidad de generar un crecimiento que se traduzca directamente en el aumento del bienestar social, su tendencia a la exclusión y la explotación no parecen ser signos que amenacen su posición. Antes bien, en el futuro, por lo menos en el inmediato, no se observan cambios de rumbo, sino una continuación.

III

Ahora bien, el que un proyecto de sociedad pueda ubicarse como el hegemónico y mantenga su lugar, es un proceso muy complejo en el cual intervienen múltiples factores. No es fácil explicarlo a partir de una, dos o tres variables ni a partir de la visión de un solo ámbito: el económico, el político, el social o el cultural. Es un proceso que debe entenderse a partir de una visión global, mediante la cual se recojan elementos de los diferentes ámbitos, con el objeto de integrarlos coherentemente en un análisis.

En el presente trabajo buscamos analizar las causas que permiten a una ideología –un proyecto de sociedad³– lograr ese lugar y alcanzar la legitimidad. Utilizamos como punto de referencia precisamente el ejemplo del neoliberalismo –en el capitalismo en general, y en México en particular–, de tal manera que las preguntas que articulan nuestro análisis son aquellas con las que iniciamos estas páginas, es decir:

¿Qué propició que el neoliberalismo lograra ubicarse como la opción hegemónica de sociedad que habría de guiar el proceso de reestructuración tanto de los países capitalistas como de los exsocialistas, a finales del siglo XX? y ¿Cómo fue legitimando ese lugar?

Con el objeto de responder estas interrogantes elaboramos una propuesta en la cual nos ubicamos en las esferas ideológica, política y económica, principalmente. En la ideológica, porque partimos del supuesto de que el neoliberalismo no es sólo un modelo económico, sino también una ideología, y como tal sirve para legitimar y guiar la acción de los actores sociales. En la política, porque consideramos que los procesos de legitimación y de hegemonía implican un constante conflicto que se determina por el factor poder. Y en la económica, ya que resulta de vital importancia para entender los motivos por los cuales el juego político se está encauzando por una determinada dirección y no por otra. Porque, en efecto, las ideologías y los intereses y actitudes políticas, no se mueven ni se dan de una manera independiente y volitiva; de hecho, en gran parte responden a una serie de determinantes “materiales” dadas por la estructura productiva en la que se desarrollan.

Para decirlo a grandes rasgos, elegimos el caso mexicano en cuanto ha constituido uno de los procesos de reestructuración más “acabados” en el mundo. Tal vez como en ningún otro país –no dictatorial– se llevó a cabo de una manera rápida y relativamente cabal –sólo se cedió en

³ Como dijera Saint-Simon, “las sociedades existen primero bajo la forma ideológica antes de concretarse en la historia” (Vachet, 1972; 25).

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

aquellos puntos que causaban un *verdadero* problema, como lo veremos en los capítulos 5 y 6. A tal grado que las expectativas extranjeras pronto se vieron superadas frente a la "eficiencia" de nuestros gobernantes. Como declarara Miguel Basáñez:

En agosto de 1983 México fue calificado por altos funcionarios de los gobiernos financieros internacionales como país con un programa de recuperación ejemplar que estaba siendo imitado por otros países con dificultades financieras. Esta percepción fue ampliamente argumentada y difundida por revistas y periódicos especializados con gran penetración internacional quienes señalaban que ningún país en tiempos modernos había aplicado un ajuste tan radical, rápido, decidido y exitoso como México. En junio de 1984, el director ejecutivo del FMI giró un comunicado en el que presenta a México como un ejemplo de ajuste para los países deudores y de negociación para los países acreedores, que fue respaldado por el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (1991: 82).

El trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera:

En el capítulo 1, titulado "Planteamiento general: ideología, estructura política y estructura económica", se desarrolla con detalle esa propuesta. En el capítulo 2, titulado "El contexto internacional (décadas de 1960 y 1970)", se aplica la propuesta al caso del capitalismo en general, ya que lo que sucede en México no puede entenderse al margen de los acontecimientos y movimientos de reestructuración internacionales. A partir de nuestro planteamiento general interpretamos los eventos ocurridos durante las décadas de 1960 y 1970 como los antecedentes inmediatos que dieron al neoliberalismo la llave de entrada tanto a los países centrales como a los periféricos.

En el 3, "El régimen posrevolucionario (1917-1982)", analizamos las condiciones bajo las cuales estuvo garantizada la reproducción del sistema político social mexicano hasta el advenimiento del neoliberalismo. Ello a pesar del surgimiento de varios movimientos y de un creciente malestar social. En el 4, "La crisis económica de 1982" analizamos las bases sobre las cuales se habían reproducido tanto el patrón de acumulación hasta ese momento vigente como las del bloque de poder. Aquí llamamos la atención sobre el surgimiento de un nuevo contexto desde finales de la década de 1960 —que va socavando las condiciones bajo las cuales el grupo hegemónico había ejercido su dominación— hasta llegar a la crisis económica de 1982, la cual impide al país definitivamente seguir trabajando como hasta ese momento y le impone un cambio.

En el 5, "Los primeros pasos hacia la reestructuración neoliberal (1982-1988)", vemos cómo el camino que se decidió seguir fue precisamente el neoliberal, debido a presiones tanto

externas –por el pago de la deuda- como internas. Vemos las diferentes fuerzas que se encontraban en la contienda política y las posibilidades que a cada una se le estaban dando. El contexto y su forma de gestionar, siguieron socavando las condiciones de dominación del grupo hegemónico y asentaron el empoderamiento de uno que potencialmente podía ocupar su lugar, apoyado por una alianza derechista.

Por último en el apartado 6, “La consolidación del modelo neoliberal (1988-2000)”, desarrollamos más específicamente las estrategias que los defensores del neoliberalismo, una vez en el poder, tuvieron que llevar a cabo para legitimar su proyecto, liberarse del antiguo grupo hegemónico y tomar ese lugar.

Capítulo 1

Planteamiento general: Ideología, estructura política y estructura económica.

Nuestro interés gira en torno al proceso mediante el cual el neoliberalismo logró ubicarse como la propuesta de reestructuración hegemónica de finales del siglo XX y cómo fue legitimando ese lugar. Con el objeto de obtener una visión integral del tema, elaboramos una propuesta en la que se conjugan lo ideológico, lo político y lo económico.

Las ideologías: expresión del "ser en el mundo"

Nos ubicamos en la esfera ideológica, porque partimos del supuesto de que *el neoliberalismo constituye una ideología*, es decir, un cuerpo de ideas, valores, creencias y significados que otorga sentido y validez al orden establecido o al que se pretende establecer. No sólo constituye una propuesta de carácter puramente económico, sino un conjunto de formulaciones simbólicas que legitima una concepción especial de lo que se considera la realidad y el orden social.

Al constituir una ideología cumple una doble función, al ser, por un lado, un producto -es una construcción social- y al ser al mismo tiempo, un productor ya que imprime en los sujetos una manera de interpretar su mundo, otorgándole un sentido y una dirección determinada a la formación social. En otras palabras, la visión de sociedad que una ideología representa, no se queda en el plano ideal o en la mente de las personas, de hecho tiene consecuencias *reales* como el crear y reproducir *en la realidad*, ese orden, ya que esas personas, al adoptar una concepción determinada de la organización de las cosas y de sí mismos, adoptan, a la vez, una serie de actitudes que se traducirán en acciones concretas. Estas acciones son las que al final dan una cierta direccionalidad al orden social, dándole forma y sentido.

En este sentido, antes que considerar a las ideologías como “mentiras”, una especie de conocimiento erróneo “de carácter imaginario por contraposición al real”, o bien una falsa conciencia, se consideran procesos sociales mediante los cuales los sujetos manifiestan un determinado “ser en el mundo” (Therborn, 1987; 2) tanto en el ámbito de las ideas como en el de las acciones concretas. Ese “ser en el mundo” representa la interpretación que los sujetos tienen de la realidad y los límites de lo que se debe o no hacer, de lo correcto o incorrecto socialmente hablando, e incluye “deliberadamente tanto las nociones y la ‘experiencia’ cotidianas como las elaboradas doctrinas intelectuales, tanto la ‘conciencia’ de los actores sociales como los sistemas de pensamiento y los discursos institucionalizados de una sociedad dada” (*Idem*)¹.

Aunado a lo anterior, también afirmamos que detrás de las ideologías tiene expresión una organización social determinada en la cual los actores sociales se ubican en una jerarquía de posiciones específica, y que dentro de esta jerarquía sólo uno o algunos grupos son los que detentan una posición dominante. La ideología para estos grupos, representaría el “instrumento” que legitima su posición –su dominación– y el orden establecido. Lo anterior, sin embargo, no excluye el hecho de que también puedan ser portadoras de nuevas formas de sociedad, y que contribuyan a un cambio. En efecto, así como pueden sujetar a los actores sociales a un orden determinado, también pueden “incitarlos” e “instruirlos” a cambiar ese orden.

Legitimidad y hegemonía: una cuestión de poder

Nos ubicamos en la esfera política, porque partimos de un segundo supuesto: *los procesos de legitimidad² y de hegemonía³ implican un constante conflicto, que se determina por el factor poder*. Peter Berger y Thomas Luckmann afirman, por ejemplo:

¹ A la cita anterior Therborn agrega: “Pero estudiar todo esto como ideología significa considerarlo desde una perspectiva particular: no como cuerpos de pensamiento o estructuras de discurso *per se*, sino como manifestaciones del particular ser en el mundo de unos [...] sujetos humanos. En otras palabras, concebir un texto de unas palabras como ideología equivale a considerar la manera en que interviene en la formación y transformación de la subjetividad humana” (*Idem*).

² Toda sociedad, si ha de buscar la permanencia y una estabilidad relativa, requiere de legitimidad, es decir, de la aceptación, de la confianza y de la creencia que sus miembros tengan en la validez del orden social establecido. Por lo regular, lo anterior se logra a partir de la capacidad que una sociedad tiene, por una parte, de satisfacer las necesidades materiales mínimas de sus integrantes, y por otra, de representar el

Dos sociedades que se enfrentan y cada una de las cuales posee universos [simbólicos] en conflicto desarrollarán mecanismos conceptuales destinados a mantener sus respectivos universos. Desde el punto de vista de la plausibilidad intrínseca, las dos formas de conceptualización parecen ofrecer escaso margen de opción al que observa desde fuera. Sin embargo, la cuestión de cuál de las dos prevalecerá dependerá más del poder que de la habilidad teórica de los legitimadores respectivos (2001; 140).

En efecto, en una misma sociedad, en un mismo espacio y en un mismo tiempo, pueden coexistir diferentes propuestas ideológicas –que se “superponen, compiten, chocan y se hunden o se refuerzan unas con otras” (Therborn, *op. cit.*; VII)-, de las cuales por lo regular, una se ubica como hegemónica y las demás como marginales. En todo momento la hegemónica tiene que saber mantener un grado adecuado de legitimidad, si es que quiere mantener su posición, especialmente en tiempos de crisis en los cuales las posiciones dominantes son más susceptibles de ser rebasadas por diferentes alternativas. La experiencia histórica parece indicarnos que el hecho de que mantenga o pierda su lugar, no depende tanto de la validez intrínseca o de la *veracidad y contundencia empírica* que muestren sus propuestas, sino del cómo sus “representantes” se logran mover y organizar en el campo de la política para convencer a, o imponerse sobre, los demás miembros de la sociedad. Lo falso o verdadero, lo justo o lo injusto, lo correcto o lo incorrecto, no parecen ser en última instancia los factores a partir de los cuales se define el rumbo que habrá de tomar la ideología, sino la fuerza, la habilidad y la destreza que muestren los actores sociales que la enarbolan en la lucha política.

estado y la organización de sus instituciones como válidas y/o justas. Cuando hablamos de legitimidad en este segundo término, nos referimos al acto de justificar y recrear las disposiciones sociales mediante los cuerpos de ideas y estructuras simbólicas –de diferentes magnitudes- que otorgan a los miembros de una sociedad, a la vez que sentido a su mundo -a su orden social y a su posición en ese orden-, un conjunto de elementos de carácter cognoscitivo que les permite –además de saber el por qué de su actuar y de la organización de su sociedad- conocer, recrear y reproducir el orden establecido. Vista de esta manera, se podría decir que es una situación de relativo consenso social, en el cual la coacción física juega un papel menor o menos abierto/explicito.

³ Por hegemonía entendemos: el dominio que ejerce un grupo determinado –el dominante- sobre las estructuras y prácticas políticas de la sociedad. Un grupo o propuesta va a ser hegemónico en tanto pueda representarse no como un elemento particular dentro del universo social, sino como el “representante” general de ese universo. En palabras de Nicos Poulantzas: “[...] la clase o fracción dominante que se mantiene o que tiende a conquistar el poder político deberá organizarse por una estructuración tal de sus *intereses económico-sociales específicos* que puedan representar un interés general real de las clases o fracciones dominantes, presentado y concebido como el interés general de la ‘nación’. En ese caso, el concepto de hegemonía –hegemonía-práctica política- designa el momento en que la estructuración política de las clases dominantes –función ideológica, organizacional, papel de dirección, etc.- reviste una importancia determinante en las relaciones de clase” (1986; 51-52).

Lo dicho anteriormente, parece aplicar al caso del neoliberalismo. En efecto, el hecho de haber logrado superar las diferentes propuestas de sociedad que en un determinado momento se enfrentaron, para ubicarse como la ideología que guiaría el proceso de reestructuración, primero del mundo capitalista, y después del exsocialista, no parece haber sido producto de la veracidad de sus propuestas o de su pertinencia como *la mejor alternativa* para superar los problemas a los cuales se estaba enfrentando el mundo entero —crisis sociales, económicas y políticas—. Antes bien, tuvo que ser el producto de una intensa lucha que incluyó mecanismos de todo tipo: desde los más coercitivos como las invasiones militares y la creación de cuerpos militares tendientes a mantener en orden a aquellos países que buscaban alternativas diferentes de sociedad —Chile y Nicaragua, por ejemplo—; pasando por aquellos en los cuales la coerción se encuentra implícita, aunque no expresada en el uso de la fuerza física, como el pago de las deudas externas; hasta los más “sublimes”, como la apropiación de ciertos discursos e ideales, tales como el de democracia y libertad, para utilizarlos como sinónimos y banderas de su causa⁴.

Con ello, sin embargo, no pretendemos dejar de lado la importancia del contenido de los postulados ideológicos en esta lucha por la supremacía. Los postulados, de hecho, deben hasta cierto punto reflejar una realidad y ofrecernos una alternativa viable, y en esta tarea, el contexto histórico va a jugar un papel de primera importancia, ya que éste va a ser el que dará viabilidad o no al proceso. Los postulados del neoliberalismo en sus inicios, por ejemplo, se encontraban completamente fuera de lugar; eran tanto histórica como políticamente irrelevantes, inviables e “irreales”. En palabras de Perry Anderson, por ejemplo,

Durante el gran auge del capitalismo en los años 50 y 60, parecía inconcebible a consenso burgués de aquel tiempo, crear desempleo a cerca de 40 millones de personas en los países ricos sin provocar trastornos sociales. Parecía impensable proclamar abiertamente la redistribución de los ingresos de los pobres a los ricos en nombre del valor de la desigualdad; parecía inimaginable privatizar no sólo el petróleo, sino también el agua, el correo, los hospitales, las escuelas, hasta las prisiones (1995-1996: 11).

⁴ En la lucha del capitalismo contra el socialismo, por ejemplo, se hizo uso de los términos democracia y libertad, como sinónimos directos del sistema capitalista; mientras que el totalitarismo y la represión fueron identificados como sinónimos inmediatos del socialismo. De esta manera, los valores positivos que traía consigo los términos de libertad y democracia, podían ser inmediatamente adjudicados al capitalismo, mientras que los de totalitarismo y represión eran inmediatamente identificados con la forma de vida del socialismo.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Efectivamente ¿Cómo imaginar que la intervención del Estado en la economía podría derivar en estancamiento o en crisis, si precisamente su intervención era la que no sólo estaba devolviendo crecimiento, sino imprimiendo un gran dinamismo al sistema capitalista en su conjunto? El neoliberalismo, por lo tanto, tuvo que esperar su “turno histórico”, tuvo que esperar el momento en el cual sus postulados parecieran viables y “verdaderos”, lo cual sucedió en el momento en el que el capitalismo una vez más cayó en recesión.

En este sentido, el neoliberalismo supo presentarse no como ideología, sino como una teoría económica, que más que apelar a una clase en particular o a valores específicos, presentaba hechos y pruebas de carácter científico. Y es que no podía ser de otra manera, como diría Samir Amin: “La ideología propia del capitalismo siempre es economista, y debido a ello atribuye un lugar predominante a lo que llega a ser –en su discurso- la teoría económica” (2001; 33). Sin embargo, detrás de los “hechos duros” que trata de presentar, se encuentra un discurso ideológico en cuanto intenta legitimar un orden determinado de sociedad. Porque, en efecto,

Demostrar que el capitalismo puede funcionar –funciona en efecto- no es la única preocupación de esta teoría [la teoría económica liberal] que constituye el núcleo duro inevitable del discurso del capitalismo. También hay que demostrar que este funcionamiento racional responde a las expectativas de los individuos, y por ello que el capitalismo es legítimo y hasta “eterno”. Es el “fin de la historia”. Esta demostración implica entonces necesariamente el restablecimiento de un vínculo entre la teoría económica y la filosofía social y política. El discurso se enriquece para llegar a ser en tal caso el discurso general del capitalismo, trascendiendo a la base económica de la demostración (2001; 35 y 36).

Hasta aquí tenemos, por lo tanto, que más que depender de la veracidad empírica o *de facto* de sus postulados, una ideología depende de, como habíamos dicho anteriormente, la fuerza y capacidad política de sus “defensores”, así como también de su relevancia y pertinencia histórico política, en cuanto “contribuye” a explicar una realidad determinada, de manera racional –científica-.

Ahora bien, la esfera política, como se entiende en el presente trabajo, se caracteriza por ser un espacio en el cual existe un conflicto permanente entre diferentes actores sociales que luchan por o coadyuvan a, mantener, destruir o construir el orden al cual pertenecen y/o representan –o, en su defecto, al cual pretenden pertenecer o representar- ya sea de manera consciente o inconsciente, activa o pasiva. Lo político no se reduce al plano institucional –encarnado en un Estado- en el cual la dinámica gira en torno a reglas bien establecidas y a una representación partidaria, sino

como el espacio público en el cual conviven y se enfrentan los diferentes proyectos de sociedad, representados por diversos actores sociales (Zemelman, 1973 y Bourdieu, 1990; 290).

Al mismo tiempo, los actores sociales no son vistos como entes independientes e individuales que, ubicados en un contexto de libre mercado, guían su acción a partir de supuestos racionales. Partimos, por el contrario, de una visión en la cual los actores se encuentran organizados a partir de grupos o sectores⁵, los cuales se ubican en una estructura de poder específica.

Por estructura de poder entendemos aquella organización social que posibilita ejercer y reproducir, de una manera jerárquica, las relaciones de dominación, tanto en su aspecto ideológico, como en su aspecto material. A grandes rasgos está conformada por tres elementos: el bloque de poder, sus bases y sus ejes. El bloque de poder, como su mismo nombre lo indica, lo conforman aquellos grupos y sectores que detentan el poder, es decir, que llevan el liderazgo tanto del proceso productivo como del proceso político, social y cultural de un determinado país. Está constituido por varios grupos y fracciones de grupo, heterogéneos en su constitución, origen, actividad, y a veces hasta en intereses, pero unidos por un fin común: preservar el orden existente. Entre ellos, por lo regular, uno es el dirigente y los demás se ubican como subordinados. La relación que se establece entre ellos al interior del bloque, cabe mencionarlo, es de unión pero también de conflicto.

Por otra parte, las bases se refieren a aquellos sectores que sin estar en el bloque de poder ayudan a mantener la estructura, ya sea de manera tácita o implícita. De la misma manera, sus procedencias, actividades y hasta intereses pueden ser diferentes, y hasta se pueden encontrar en conflicto, pero su interés común es el preservar el orden existente. Y los ejes, se refieren a los mecanismos a partir de los cuales se van a reproducir las relaciones y los significados que permiten legitimar el orden establecido. Como ejemplos de ejes tenemos: los aparatos

⁵ Lo que consideramos grupos o sectores sociales —conceptos que por el momento van a darnos pauta para referirnos a cualquier división específica que pudiera realizarse como: clase social, fracción, facción, élite, etcétera— se refiere a aquellos “conjuntos de agentes que ocupan posiciones semejantes y que, situados en condiciones semejantes y sometidos a condicionamientos semejantes, tienen todas las probabilidades de tener disposiciones e intereses semejantes y de producir, por lo tanto, prácticas y tomas de posición semejantes” (Bourdieu, *op. cit.*; 284). Un actor/grupo social, desde esta visión, no es un individuo, constituye un conjunto; un conjunto que se define por la actitud que toma hacia las cosas y el sentido que les otorga, lo cual va a estar dado, principalmente, por la posición que ocupe en una estructura. En el presente trabajo tomaremos como punto de referencia la estructura de poder y la estructura económica.

institucionales, los medios de comunicación, los intelectuales, el marco legal, las ideologías, los cuerpos represivos como el ejército y la policía, la religión, etcétera.

Si un determinado grupo social pretende ubicarse como el dominante y su visión del mundo como la hegemónica, por lo regular, tiene que entrar a, o simplemente –si es que ya era parte- cambiar de posición en el bloque de poder. Para lograr lo anterior, antes, los grupos que la enarbolan tienen que ser capaces, entre otras cosas, de: a) tener conciencia de sí como actores políticos y a partir de ello llevar a cabo acciones tendientes a disputar su lugar⁶; b) poseer la fuerza ideológica y política que atraiga adeptos a su causa; y c) enarbolan un proyecto de reestructuración viable en su contexto.

Si no son capaces de tener conciencia de sí mismos como actores políticos, de su posición e intereses, de sus problemas y del lugar que en su opinión deberían ocupar, difícilmente podrán entablar una lucha en la cual lleven “la batuta”. Simplemente se limitarán a seguir, a opinar, a resistir o a replicar, sin ir más allá. Por otra parte, si quieren implantar su pensamiento como el válido y/o mantenerlo así, o pretenden sustituir al antiguo, tienen que ser lo suficientemente capaces de convencer a los demás miembros de su sociedad de que sus proposiciones son justas, adecuadas o válidas. Tiene que darse un “proceso de universalización” en el cual, el interés del grupo deje de presentarse como tal, para presentarse como un interés común, un interés social –medidas como “adelgazar” al Estado a través de varias privatizaciones o abrir las economías (indiscriminadamente) al “libre comercio”, fueron presentadas como necesidades sociales ante un Estado corrupto, despilfarrador y mal empresario, antes que como medidas tendientes a beneficiar sólo a algunos grupos, por ejemplo-.

A la par, en esta “búsqueda de adeptos”, tienen que ser capaces de crear una correlación de fuerzas favorables a su causa; tienen que formar alianzas tanto dentro del mismo bloque de poder, como fuera de éste: con las bases y con los oponentes de aquellos a quienes quieren derribar o detener, según sea el caso. En palabras de José Velenzuela Feijóo:

⁶ Para autores como Hugo Zemelman, lo político constituye “la capacidad social de re-actuación sobre circunstancias determinadas para imponer una dirección al desenvolvimiento sociohistórico” (2001: 29). En este sentido, un actor se consideraría político, si precisamente a través de su actuación conciente, es capaz de buscar incidir en la dirección del desenvolvimiento sociohistórico.

diferentes cuerpos simbólicos de legitimación, no sólo se desata un conflicto en el ámbito ideológico, entre sus diferentes visiones del mundo, sino también entre los diferentes actores sociales que están detrás de ellos, ya que lo que se encuentra en "peligro" o en disputa no es sólo un conjunto de ideas y creencias, sino toda una organización social -y lo mismo se puede decir de lo contrario: cuando entran en disputa ciertos actores sociales, entran al mismo tiempo en disputa sus diferentes visiones del mundo-.

Las ideologías, en este sentido, funcionan como el elemento que le permite a los grupos justificar la organización social que consideran válida, justa o adecuada; funciona como elemento cohesionador y generador de solidaridad, al otorgarles una justificación y un sentido a sus intereses, al orden existente, o por el contrario, al que pretenden implantar. Pero además, funge como el eje a partir del cual se determina en gran parte, lo que es correcto o no, lo que es válido o justo y lo que no lo es, lo que se debe y no se debe hacer. Al retomar a Mannheim, podríamos decir que la ideología tiende a formar una definición de la realidad, a partir de la cual "los acontecimientos determinarán una situación en que la actividad y la contraactividad se podrán distinguir y en que la totalidad de los acontecimientos se organizarán en un proceso" (1993; 19). Las ideologías, en este sentido, forman un arma política de poder.

El detonante

Por otra parte, nos ubicamos en la esfera de la economía, porque resulta de vital importancia para entender los motivos por los cuales el juego político se está encauzando por una determinada dirección y no por otra. En efecto, *las ideologías y los intereses y actitudes políticas, no se mueven ni se dan de una manera independiente y volitiva, de hecho, en gran parte responden a una serie de determinantes "materiales" dadas por la estructura productiva en la que se desarrollan.* Siguiendo a Marx en su obra *La ideología alemana*:

La organización social y el Estado brotan constantemente del proceso de vida de determinados individuos; pero de estos individuos, no como puedan presentarse ante la imaginación propia o ajena, sino tal y como realmente son; es decir, tal y como actúan y como producen materialmente y, por tanto, tal y como desarrollan sus actividades bajo determinados límites, premisas y condiciones materiales, independientes de su voluntad. La producción de ideas y representaciones de la conciencia, aparece al principio directamente entrelazada con la actividad material y el comercio material de los hombres (1975: 19).

Como sabemos, para Marx la dinámica de toda la vida humana se sustenta en una base material, es decir, en su modo de producción. A partir de cómo producen o no producen, es cómo las diferentes clases sociales se organizan e interactúan; y a partir de la posición que ocupen en el proceso de producción, es que van a operar con una determinada lógica política e ideológica.

La base material a partir de la cual vamos a trabajar, va a estar dada por el patrón de acumulación. Un patrón de acumulación, a grandes rasgos, tiene como función el reproducir y/o preservar el funcionamiento del sistema económico; en otras palabras, representa la forma en la cual una sociedad en su conjunto –ya sea capitalista o de otro tipo-, se organiza para la producción y reproducción de su sistema económico, tanto en el ámbito interno –nacional- como en el ámbito externo –internacional-.

Son formas que se encuentran históricamente limitadas, debido a que la continua evolución del capitalismo supone la continua superación de las diferentes trabas que su mismo funcionamiento trae consigo –en efecto, la superación de las trabas expresadas en crisis, ya sean coyunturales o estructurales, suponen la aplicación de políticas específicas y diferentes que garanticen la reproducción del sistema-. Pero su estudio no se reduce, cabe mencionarlo, a la parte económica, ya que detrás de todo patrón de acumulación, podemos observar una articulación social muy específica, que por lo regular concuerda con aquella de la estructura de poder. Un cambio en el patrón de acumulación, significaría por lo tanto, la emergencia y consolidación de un nuevo tipo de articulación no sólo a nivel económico, sino también social y político entre los diferentes grupos y fracciones; significaría la alteración de los nexos y relaciones existentes entre los diferentes sectores que conforman la sociedad y/o la estructura de poder.

Para Valenzuela Feijóo, siguiendo la corriente marxista, los desajustes que surgen en esta estructura, por lo general, son los que provocan o presionan, en última instancia, por un cambio en el sistema en su conjunto:

Cabe esperar que la crisis económica deteriore primero la ideología dominante y ya vieja, empujando el desenvolvimiento de otra más nueva y progresiva. Para luego, dados los reacomodos previsibles en la correlación política de fuerzas, generar las mutaciones políticas y económicas del caso (1998; 39).

En efecto, para el autor, mientras el sistema capitalista pueda reproducirse más o menos adecuadamente –asegurando tasas de ganancia y ritmos de acumulación y de crecimiento relativamente altos, por ejemplo–, es poco probable que los desajustes y descontentos surgidos en las otras esferas –la política y la ideológica– puedan imponerse y operar como las variables determinantes de un proceso de ajuste o reestructuración más global. En otras palabras, en un contexto de bonanza económica, los desajustes surgidos entre la esfera económica por un lado y la político-ideológica por el otro, difícilmente darán lugar a un cambio en el patrón de acumulación, es decir, en la base sobre la cual se reproduce la sociedad en su conjunto.

Lo anterior, debido a que, por un lado: “con ganancias elevadas, altos ritmos de acumulación y altos ritmos de crecimiento, normalmente la clase capitalista no se divide. Más bien, se tiende a unificar” (*ibid.*, 38); mientras que por el otro, a que la fortaleza de la clase dirigente, es decir, la capitalista, gracias a su posición puede “inducir” la fragmentación de sus oponentes –ya sea vía la aplicación de la fuerza directa, la repartición y/o la inclusión–. Aunque ello también puede surgir como consecuencia de la misma debilidad de los actores que podrían fungir como oponentes. En casos como el descrito, según el autor, se espera que las esferas política e ideológica, se ajusten a la económica, aunque no descarta el caso en el que las primeras influyan decisivamente sobre la segunda: “no es imposible que la superestructura opere como variable determinante y obligue al ajuste por el lado de la economía, pero es muy poco probable que prevalezca esta ruta” (*idem*).

Las posibilidades de disputar el lugar hegemónico y de lograr un cambio estructural, entonces, devienen cuando el descontento también alcanza a la clase capitalista, es decir cuando “la estructura económica vigente –considerada como patrón de acumulación– se deslegitima incluso para el capital” (*ibid.*, 39). Es en estos casos cuando es más factible que se produzca una fragmentación al interior de la clase dirigente, y que comience un proceso de cuestionamiento tanto en el ámbito ideológico –en tanto la ideología dominante ya no es capaz de legitimar/sustentar el orden prevaleciente como el más efectivo– como en el ámbito político. Es en estos casos, cuando es más factible que los descontentos por parte de los dominados se conjuguen con los provenientes de los mismos dominantes y pueda “cuajar” una posibilidad de cambio en un sentido más extensivo.

En este sentido, el triunfo del neoliberalismo tuvo que darse en un contexto en el cual el descontento también alcanzó a las clases dominantes, que se conjugó con el descontento de las clases subordinadas, en tanto el sistema cayó en una severa crisis que al parecer ya no podía ser superada a partir de la aplicación de las mismas políticas –de corte keynesiano- que hasta ese momento habían funcionado.

La incapacidad que la socialdemocracia –el grupo hegemónico del modelo existente-, demostró ante el advenimiento de un nuevo contexto desde finales de la década de 1960 –ver capítulo 2- produjo un doble efecto: no pudo garantizar nuevas condiciones de revalorización del capital, ni tampoco sostener como lo había hecho hasta ese entonces, los relativamente altos niveles de bienestar social; ya no era funcional, ni para el capital, ni para la misma población, por lo tanto. Esta situación fue aprovechada por el movimiento de derecha –sumamente organizado y constituido a su vez por varios movimientos independientes- para buscar ubicarse como la nueva fracción hegemónica.

En este proceso el advenimiento de un nuevo contexto internacional jugó un papel decisivo al acentuar los límites del patrón de acumulación hasta ese momento existente. En efecto, tanto en la escena nacional como en la internacional comenzaron a mostrarse ciertos fenómenos y tendencias que no concordaban con las condiciones necesarias para su buen funcionamiento. Fenómenos como la presencia de una tercera ola científico-tecnológica, el surgimiento –o resurgimiento- de economías fuertes capaces de contender por la hegemonía hasta ese momento indiscutida de Estados Unidos, la industrialización de varios países del Tercer Mundo, la “financiarización” de las economías (Guillén, 2001), el debilitamiento de los Estados-nación, el fortalecimiento y cada vez mayor independencia de las compañías transnacionales, sólo por mencionar los más importantes, van trastocando los cimientos que habrían de darle estabilidad y fortaleza.

Ante un nuevo contexto, el patrón comienza a perder vigencia y sus “representantes” se muestran incapaces de sostenerse, por lo que es posible que las nuevas propuestas sean escuchadas. Al devenir una gran crisis, las luchas de descontento, tanto de las capas subordinadas como de las pertenecientes al bloque de poder, pueden conjugarse y así quitarle el poder al grupo hegemónico. El desenlace de la lucha se dará a partir de la conformación del juego político, a partir de cómo cada uno de los contendientes, jueguen sus cartas.

Lo dicho anteriormente nos dio pauta para esbozar la hipótesis que sirvió de guía a nuestro trabajo. En suma podemos decir que, en general, el que una ideología o proyecto de sociedad pueda ubicarse como la hegemónica y mantener ese poder, depende de factores como:

- 1) La conformación de un grupo lo suficientemente capaz de: a) tener conciencia de sí como actor político –es decir, ser conciente del papel que juega en el devenir histórico y a partir de ello llevar a cabo acciones acordes con sus intereses-; b) esgrimir un proyecto que responda a la necesidad histórica del momento, es decir, que tenga bases “materiales” aparentemente coherentes; y c) de convertir su interés particular en el interés de la sociedad. Al respecto, las ideologías tienen un papel primordial al ser el marco a partir del cual se dará sentido y legitimidad al proyecto en ciernes.
- 2) La capacidad política que ese grupo tenga para atraer aliados a su causa. El grupo o los grupos interesados deben “implementar alianzas clasistas que permitan configurar un vasto bloque histórico” (Valenzuela, *op. cit.*: 40), el cual le ayudará a afianzar la toma del lugar hegemónico en el bloque de poder.
- 3) El descrédito del grupo hegemónico en dos frentes: tanto en las bases, como al interior del bloque de poder. En este sentido, el grupo que pretenda ubicarse como el hegemónico, tiene que saber capitalizar ese descrédito y atraerlo a su causa.
- 4) Una lucha política intensa que incluye varios medios como: la coerción física, la presión por otros medios que no implican el uso directo de la fuerza –como el pago de las deudas-; el manejo de los principales medios de comunicación masivos; manipulaciones de carácter ideológico, etcétera
- 5) El agotamiento de las condiciones materiales del grupo hegemónico, en otras palabras, del patrón de acumulación, y su incapacidad de hacerle frente.

Capítulo 2

El contexto internacional (Décadas de 1960 y 1970)

Las décadas de 1960 y 1970, constituyeron un importante parteaguas para la historia mundial contemporánea al ser el escenario de una serie de acontecimientos, de la más diversa índole, que coadyuvaron a poner, en duda y en peligro el orden mundial que hasta ese momento, y desde el término de la Segunda Guerra Mundial había prevalecido.

En efecto, por un lado, se observó el gradual fortalecimiento y avance del poderío soviético —el comienzo de la llamada “segunda guerra fría”— así como la efervescencia por todo el denominado Tercer Mundo de movimientos sociales proclives a buscar nuevos proyectos de sociedad; y por otro, el advenimiento de una severa crisis económica que atacó por igual, aunque de manera diferente, tanto a países centrales como a periféricos. La conjugación de eventos como estos representó un serio peligro para la hegemonía y legitimidad del sistema capitalista, ya que puso en duda su capacidad de mantener e incrementar, como hasta ese momento, su hegemonía en especial a través de tasas de crecimiento económico y niveles de bienestar sociales altos. Los tiempos de bonanza económica y de relativa estabilidad social y política estaban dando paso a un periodo de tremenda inestabilidad y desconfianza, en los que la balanza parecía estar inclinándose hacia el lado del socialismo. El capitalismo parecía estar perdiendo la batalla.

Asimismo, el modelo de desarrollo seguido hasta ese momento —basado en una triple alianza: el fordismo, el taylorismo y el keynesianismo, los cuales habían impreso un importante dinamismo al capitalismo una vez terminada la Segunda Guerra Mundial—, estaba mostrando sus límites, se presentaba ineficiente ante tales situaciones. Si anteriormente ese modelo había contribuido a salvar al capitalismo y a crear un importante consenso social y político a su alrededor, ahora

estaba propiciando serias contradicciones y disidencias. Veamos, a grandes rasgos, el desenvolvimiento de dichos eventos.

La crisis social y política del capitalismo

Al iniciar la década de 1970 el mundo entero pareció retomar, por fin, el camino de la cordura, en cuanto las dos superpotencias, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, habían alcanzado un acuerdo mutuo en el cual cada una se comprometía a respetar los territorios de la otra; luego de un periodo de profunda tensión, ambas se comprometían tácitamente a no "asustarse mutuamente ni asustar al resto del mundo" (Hobsbawm, 1998; 247).

Sin embargo, esta situación tan aparentemente prometedora no duró mucho ya que dos acontecimientos habrían de propiciar una nueva situación de desequilibrio: la derrota de los Estados Unidos en Vietnam, y la derrota de Israel —el máximo aliado estadounidense en Medio Oriente— en la guerra del Yom Kippur en contra de las fuerzas armadas de Egipto y Siria —apoyadas por la Unión Soviética— (*Ibid*; 248). Las dos derrotas, además de poner en evidencia el aislamiento de los líderes estadounidenses tanto en el interior del país¹, como en el exterior², parecieron inclinar la balanza hacia el lado soviético, provocando la exacerbación de la paranoia estadounidense y la satisfacción de su oponente.

La situación empeoró, además, una vez que una nueva ola de movimientos revolucionarios —la tercera ronda de convulsiones del siglo XX (*Ibid*; 249)— apareció en escena entre 1974 y 1979. En efecto, a movimientos caracterizados por luchar a favor de un orden diferente como el estudiantil, el feminista, el obrero, etcétera, se unieron otros movimientos como los de liberación nacional —en su mayoría "pro socialistas" o "pro comunistas", simpatizantes de la URSS, de China o de Cuba—, que buscaban redefinir las relaciones tradicionales entre los Estados imperialistas y los coloniales, semicoloniales y dependientes. En Asia, por ejemplo, se desataron en lugares como Vietnam,

¹ La posición con respecto a la guerra de Vietnam —a favor o en contra— había desmoralizado y dividido a la nación estadounidense desatando por todo el país movimientos antibélicos, disturbios sociales y la destitución de un presidente.

² En efecto, en las dos guerras los aliados de Estados Unidos, Europa occidental, le dieron la espalda: en la primera, se negaron a mandar siquiera un contingente simbólico de tropas, y en la segunda no permitieron, a excepción de Portugal —"uno de los últimos bastiones del fascismo de antes de la guerra"—, que sus aviones emplearan sus bases aéreas conjuntas para tales fines (*Ibid*; 248).

Laos y Kampuchea; en África en países como Angola, Mozambique, Libia y Etiopía; en Medio Oriente, se llevó a cabo la revolución islámica de Jomeini, la cual produjo un severo golpe al dominio estadounidense en la región al destruir el poder del Sha en Irán; y en América Latina se observó el triunfo de movimientos como el sandinista en Nicaragua, las fuerzas progresistas de Maurice Bishop en Granada, y el de la Unidad Popular en Chile.

Al pasarse la gran mayoría de los movimientos al lado soviético –facilitando a la URSS bases militares, en especial navales- y al sufrir Estados Unidos dos derrotas tan importantes –sobre todo en cuestión de honor y reputación-, la URSS pudo recuperar la iniciativa en la guerra fría y una autoconfianza por momentos mermada. El miedo del lado capitalista cundió, derivando en un nuevo periodo de constante conflicto y tensión internacional en el cual cada una de las dos superpotencias vivió para demostrar su supremacía y fuerza militar, esta vez, teniendo como escenario principal el Tercer Mundo.

El capitalismo, sin embargo, no sólo tuvo reveses del lado de su oponente. En su seno comenzaron también a surgir voces que clamaban por una nueva división internacional del trabajo. Se dio una tendencia, por ejemplo, a formar alianzas de defensa entre países del Tercer Mundo en contra de los países centrales. Ejemplo de ello fue la formación de la “Línea del frente” en África –que con Zimbabwe a la cabeza se proclamó abiertamente antiimperialista-; la firma de la “Carta de los derechos económicos de los Estados” en la cual, y a través de la Organización de las Naciones Unidas, países provenientes de regiones como Asia, África, América Latina y del bloque socialista, se unieron para clamar por un nuevo orden económico internacional; la coordinación de los productores de materias primas por la UNCTAD; o la súbita elevación de los precios del petróleo decidida por los miembros de la OPEP –Organización de Países Exportadores de Petróleo-, como forma de impedir que se apoyara a Israel en la guerra antes mencionada.

El Tercer Mundo en sí, estaba cobrando una fuerza inusitada apoyada además por importantes avances en cuanto a materia económica se refiere. En el periodo que va de 1970 a 1978, por ejemplo, mientras que la producción industrial de los países centrales creció un 3.3% anual, la de los países del Tercer Mundo en su conjunto creció un 8.6% anual (ver gráfica 2.1³). De hecho, en ocho países de reciente industrialización el crecimiento fue del 15% anual (Cueva, 1994; 243).

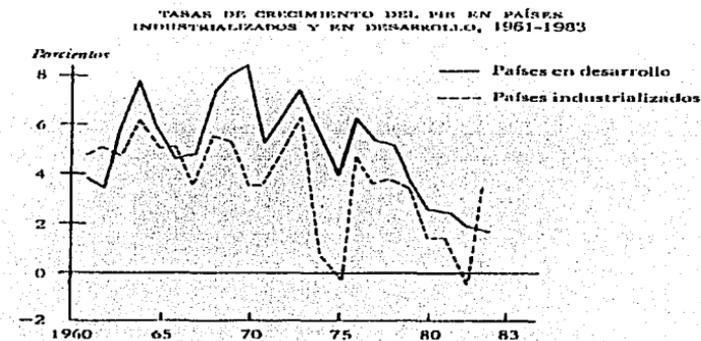
³ Esta gráfica proviene de: Rivera, 1986; 58.

TEJIS CON
FALLA DE ORIGEN

Pronto comenzaron a participar más activamente en el mercado internacional no sólo como proveedores de materias primas sino como proveedores de manufacturas, constituyendo una importante competencia para los países que hasta ese momento habían disfrutado de ese monopolio.

Y si estos datos representaban para países como los nuestros, “jalones en el camino de la esperanza” –en palabras de Cueva- para los países centrales representaron una verdadera amenaza, un serio peligro contra sus intereses y sus “espacios vitales”. De ser los “buenos salvajes musicales y pintorescos de los años cincuenta, héroes románticos de la década de los sesenta, henos aquí convertidos, a finales de los setenta, en la encarnación misma del mal y la barbarie” (*Idem*). Esta es a grandes rasgos la imagen que comenzaba a proliferar acerca del Tercer Mundo, percepción que fue acrecentándose conforme los países centrales iban entrando en una severa crisis económica.

Gráfica 2.1



La crisis económica en los países centrales

Desde finales de la década de 1960, el capitalismo en su conjunto comenzó a mostrar indicios de que el patrón de acumulación seguido hasta ese momento y desde el término de la Segunda Guerra Mundial, estaba llegando a sus límites. Ya para 1967, según Theotonio Dos Santos, se comenzaba a percibir un cambio en el comportamiento de la dinámica capitalista mundial, en el que se pasa de un comportamiento caracterizado por presentar ciclos de crecimiento continuo, acompañados de pequeños periodos de crisis, a uno de crisis constantes marcadas por recuperaciones cortas⁴ (1982; 21).

Sin embargo, estos pequeños "indicios" no fueron interpretados en un principio como síntomas que evidenciaran el posible término de una etapa y la necesidad de entrar a otra. Fueron interpretados como simples recesiones que podían ser superadas en el seno del patrón de acumulación existente, a través de la aplicación de los mismos mecanismos que hasta esa fecha habían dado resultado —proteccionismo, control de precios y salarios, mayor intervención del Estado en la economía, etcétera—. A continuación haremos un breve recuento del modelo de acumulación anterior con el objeto de entender mejor la magnitud de los cambios presenciados en estas décadas.

Los años dorados

La modalidad de acumulación que prevaleció en el mundo capitalista una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, a grandes rasgos se había apoyado, principalmente, en tres ejes: 1) la intervención del Estado en la economía para garantizar el desarrollo de políticas económicas productivas y redistributivas; 2) la organización de la producción a partir de dos modelos: el taylorismo y el fordismo; y 3) la generación de pactos sociales o frentes políticos de carácter populista como el factor articulador del conjunto de las actividades sociales.

⁴ En el periodo que va de 1967 a 1982 se presentaron cuatro periodos de "pequeñas crisis". Un primer periodo depresivo va de 1967 a 1971, pasando por una ligera y artificial recuperación en 1968; un segundo va de 1972 a 1973, que se caracteriza por una fuerte, corta y especulativa recuperación; un tercero de 1974 a 1975, caracterizado por una fuerte, generalizada, continua y larga depresión que alcanza una leve recuperación en 1976; y un cuarto en 1978 "que terminaría convirtiéndose en un curso sinuoso y lleno de asincronías —entre países— hasta 1982" (Cueva, 1994; 239).

La idea, planteada como un proyecto viable y no como una simple utopía humanista, de asignarle al Estado un papel de interventor y redistribuidor, pudo verse concretada especialmente a partir de la publicación de un libro titulado *La teoría general* (1936), de John M. Keynes⁵. Keynes en esta obra, planteaba una hipótesis que en su tiempo habría de revolucionar la teoría económica clásica. Planteaba que los dos grandes problemas del capitalismo de libre mercado eran: 1) el desempleo y 2) la concentración de la riqueza y del ingreso, problemas que no se iban a resolver con simples ajustes al mercado como la teoría liberal clásica proponía. Para el autor, el superar la crisis que estaba azotando en ese entonces al capitalismo –crisis de los años treinta-, implicaba crear empleos así como reactivar y aumentar la producción, hechos que sólo podían tener lugar si el Estado intervenía ya que en la economía real no existía tendencia alguna, inherente al capitalismo, que resolviera tales problemas.

Keynes abogaba, a grandes rasgos, por la planeación social y la “socialización” de la inversión a partir de una participación más amplia y profunda del Estado en la economía ya que sólo así se podría atacar el talón de Aquiles del capitalismo. Sus ideas fueron revolucionarias en su tiempo debido no sólo a que ofreció una explicación al advenimiento de la Gran Depresión de los años 30 –que rebasó en mucho las propuestas liberales-, sino que construyó toda una alternativa para superarla, dando paso a una nueva experiencia en el capitalismo: la teoría y la práctica de la economía mixta, en donde el Estado se convertía en el administrador de la demanda –para procurar el pleno empleo-, y en benefactor de la sociedad para distribuir el ingreso.

Este tipo de planteamiento –que Hobsbawm considera una especie de matrimonio entre liberalismo económico y socialdemocracia (1998; 273)- desde un principio, como lo veremos, provocó fuertes y apasionadas reacciones por parte de los “teólogos del libre mercado”, debido especialmente a que en mucho obtuvo grandes aportaciones de la URSS, pionera en cuestiones de planificación económica. En su opinión, seguir por ese camino llevaría al camino del totalitarismo y de la servidumbre, llevaría inevitablemente al capitalismo a su fin, lo cual de hecho no sucedió.

⁵ La idea de un Estado interventor en sí ya había surgido tiempo atrás con autores como Kelsen y Bentham, y con el mismo socialismo de Estado. El atributo de Keynes fue el de haberle impreso una nueva dirección al plantarla no como una filosofía social humanitaria, “no como un llamado a la conmiseración o a la sublevación” (Cervantes, 1986; 146) que es el sentido que hasta ese momento se le había dado, sino como una teoría científica que presentaba argumentos y opciones acordes con las exigencias de su momento histórico.

El keynesianismo, asimismo, pudo conjugarse con dos modelos de producción que ya se venían perfilando desde antes de la Primera Guerra Mundial: el taylorismo y el fordismo. El taylorismo, a grandes rasgos, planteaba la organización científica del trabajo a partir de: a) el análisis y la medición de los tiempos y movimientos –tratando de eliminar los tiempos muertos al máximo y de incrementar la intensidad del trabajo durante la jornada laboral-; y de b) la separación de las funciones de la planeación y la ejecución –en virtud de la cual, la primera quedaba en manos de los dueños de los medios de producción o de sus representantes y la segunda en manos de los obreros: éstos quedaban integrados como meros realizadores de un trabajo mecanizado-. El trabajo era concebido como el producto de la conjugación de una serie de operaciones simples y de un sistema de métodos que establecía claramente las operaciones a realizar, su secuencia, el tiempo de las mismas y la forma de efectuarlas. El fordismo, por su parte, vendría a complementar y a profundizar el modelo anterior, rescatando –y explotando- las mismas premisas de la separación entre el diseño y la ejecución, la subdivisión del trabajo en tareas simples y el ahorro de tiempo, pero implementando la producción en cadena –de montaje- así como la producción a gran escala y a bajos costos con el objeto de lograr ventas masivas⁶.

La articulación de estas dos formas de organización del trabajo tuvo un importante impacto en la forma de operar tradicional del capitalismo, al permitir el advenimiento de la producción en serie estandarizada, basada en la mecanización/maquinización, y al abrir la brecha para la producción en masa.

Tuvo un importante impulso y pudo expandir su influencia más allá de los Estados Unidos –donde desde la Primera Guerra Mundial se venía aplicando-, una vez que se dio luz verde al

⁶ La idea surgió precisamente de Henry Ford, un fabricante de autos que a diferencia de sus competidores, quienes sólo fabricaban autos caros y de manera artesanal para un mercado selecto, se enfocó en producir de forma impersonal, mecanizada, en serie y estandarizada para un mercado popular. Su idea era producir vehículos de modelo único, de alto consumo y baratos, cuya producción no requería grandes conocimientos ni calificación. Para lograrlo, en 1913, implementó una cinta transportadora que llevaba las diferentes partes a cada uno de los trabajadores para que éstos las ensamblaran: de los radiadores eran llevadas a los montadores y de ahí a los soldadores que eran los que terminaban el producto. Con esta cinta, totalmente cinética y en constante movimiento sincrónico, los trabajadores no tenían necesidad de agacharse a juntar las piezas o trasladarse a recipientes fijos, ya que llegaban a cada operario, y conforme la cinta iba avanzando en su camino, el producto se veía cada vez más terminado, hasta quedar completamente armado. Este procedimiento, tan simple a primera vista, permitió, además de facilitar la vigilancia y supervisión estricta de los trabajadores, elevar los niveles de productividad y disminuir los costos de producción de manera impresionante.

keynesianismo y sus políticas comenzaron a ser aplicadas. Ya que, en efecto, la aplicación de políticas como el aumento efectivo de los salarios reales, el fomento al pleno empleo, el desarrollo del crédito al consumo y la instauración de diversas formas de salario indirecto por medio de los programas públicos de seguridad social, así como la continua expansión del dinero bancario, con el apoyo de los bancos centrales y de los gobiernos, le fueron imprimiendo un importante dinamismo, entre otras cosas, al posibilitar la creación de un mercado interno masivo, indispensable para la consolidación de la producción en masa taylorista-fordista. Asimismo, con la implementación de políticas de gasto público directamente inflacionistas en grandes obras de infraestructura y en el fomento a las actividades productivas –de industrialización especialmente– se hizo posible reestructurar el sistema productivo.

La aplicación de la fórmula taylorismo-fordismo-keynesianismo a países como Estados Unidos, provocó durante el periodo que va desde fines de la Segunda Guerra Mundial, hasta aproximadamente la primera mitad de la década de los 60, una dinámica expansión de la acumulación del capital que más tarde se caracterizaría por una fuerte internacionalización, la afirmación de la hegemonía estadounidense –basada, a grandes rasgos, en su superioridad productiva y económica, tanto relativa como absoluta⁷, y por el advenimiento de un periodo de auge económico caracterizado por fases largas de crecimiento y suaves y breves recesiones.

En este contexto se creó, en teoría, una triple alianza entre el capital, el trabajo y el Estado, en la cual cada uno se comprometía a “poner de su parte” a cambio de ciertas concesiones. Se logró constituir así, una especie de círculo virtuoso en el cual el aumento de la productividad, que afectaba directamente las tasas de ganancia capitalistas de manera positiva, lo cual a su vez retroalimentaba el aumento de las tasas de inversión, derivaba en nuevos empleos y en salarios reales altos –sin debilitar la rentabilidad del capital–, que a su vez actuaban como demandantes en un mercado de artículos de consumo masivo, fabricados, por supuesto, bajo las normas tayloristas-fordistas de homogeneidad y gran escala. Este círculo virtuoso además se veía protegido, garantizado e impulsado por el Estado benefactor.

⁷ “Hay que tener siempre presente que en 1950 los Estados Unidos poseían por sí solos alrededor del 60 por 100 de las existencias de capital de todos los países capitalistas avanzados, generaban alrededor del 60 por 100 de toda la producción de los mismos, e incluso en el momento culminante de la edad de oro -1970- seguían teniendo más del 50 por 100 de las existencias de capital de todos esos países y casi la mitad de su producto total” (Hobsbawn, *op. cit.*; 278).

En esta etapa, por lo tanto, podemos palpar un ambiente en el cual el otorgar concesiones a los trabajadores se convirtió en una estrategia muy funcional para el capital⁸. Lo anterior, sin embargo, no fue fortuito. Los responsables de tomar las decisiones sabían de la necesidad de implementar este tipo de políticas en cuanto el escenario internacional planteaba al capitalismo serias amenazas, y el regresar a una economía de libre mercado no parecía ser la solución más adecuada. Hobsbawm lo plantea de la siguiente manera:

Y por si la memoria económica de los años treinta no hubiera bastado para incitarles a reformar el capitalismo, los riesgos mortales en caso de no hacerlo eran evidentes para todos los que acababan de luchar contra la Alemania de Hitler, hija de la Gran Depresión, y se enfrentaban a la perspectiva del comunismo y del poderío soviético avanzando hacia el oeste a través de las ruinas de unas economías capitalistas que no habían funcionado (*Ibid*; 274)

Se tenía que evitar entonces, tanto por cuestiones económicas como políticas y sociales, el regreso del desempleo masivo, la disrupción y la anarquía del sistema comercial y financiero internacional al mismo tiempo que la consiguiente fragmentación del mundo en economías nacionales o imperios con vacación autárquica y el avance del comunismo. El camino más adecuado parecía ser el capitalismo mixto.

Un nuevo contexto mundial se perfila: el término del gran auge posbélico

Este crecimiento, sin embargo, tocó fin en la década de 1970. La mayoría de los países centrales, en especial Estados Unidos y la Europa occidental, experimentaron en forma simultánea una serie de problemas como: reducción en las tasas de crecimiento del PIB –mientras que en el periodo que va de 1960 a 1970 registraron un crecimiento del 5%, durante la década de los 70 bajó a 3.1%-; aumento en la tasa de inflación –que alcanzó dos dígitos en comparación con la década anterior de 4.2%- y de desempleo –que se elevó de 3.5% en el periodo de 1962-1972 a 5.7% en el lapso de 1973-1979-; estancamiento, alta volatilidad financiera, así como desequilibrio interno y externo, hasta entonces particulares de los países periféricos. De ser economías superavitarias

⁸ En efecto, varios funcionarios y empresarios pronto comenzaron a ver “las ventajas” que representaba este tipo de alianza. Sólo por poner un ejemplo, tenemos el discurso de Emilio Portes Gil, pronunciado el 30 de noviembre de 1928 al rendir su protesta como presidente interino: “... ahora ya sabemos que los esfuerzos realizados en beneficio de los obreros no sólo no perjudican al industrial progresista y bien intencionado, sino que mejoran las condiciones generales de la producción y aseguran el desarrollo industrial del país, y al progreso intelectual y económico de los laborantes y de los gremios obreros” (Córdova, 1974; 35).

comenzaron a presentar serios problemas en sus balanzas de pagos durante la segunda mitad de la década, en especial debido a los cuantiosos pagos al exterior por concepto del súbito aumento del petróleo así como por la pérdida de competitividad y baja productividad (datos de Villareal, 1986; 31).

Los países centrales se encontraban, así, en serios problemas: estaban perdiendo hegemonía y control sobre la dinámica internacional, y ante esta situación las premisas del modelo que hasta ese momento había predominado con éxito, se veían rebasadas. Las políticas tradicionales de ajuste, tanto a nivel teórico como práctico, resultaban cada vez más inadecuadas para explicar esta situación tan alarmante, a la vez que impotentes para darle una salida. ¿Qué estaba sucediendo?

Como todos los paradigmas útiles, el constituido por la alianza taylorismo-fordismo-keynesianismo, comenzó a mostrar sus límites una vez que nuevos fenómenos comenzaron a presentarse con insistencia, y al no concordar con él, fueron socavando sus cimientos fundamentales (Boltvinik, 1996; 113). En efecto, ya desde finales de la década de 1960 el capitalismo parecía estar tomando un nuevo rumbo en cuya base se encontraban cambios provocados, en su mayoría, por los avances del mismo paradigma; en el horizonte empezaban a perfilarse nuevas tendencias que habrían de imprimirle una nueva dinámica, y ante las cuales las antiguas premisas que darían al capitalismo una inusitada expansión, se verían obsoletas.

En primer lugar, por ejemplo, el vínculo capital-trabajo se vio roto, proceso propiciado en gran parte por el advenimiento de una nueva revolución científico-tecnológica⁹. En segundo lugar, la

⁹ En el horizonte comenzaron a perfilarse innovaciones —como la informática, la robótica, la microelectrónica, la ingeniería genética, la biotecnología y los nuevos materiales— que revolucionaron la forma de producir tradicional y permitieron eliminar en mucho la actividad del ser humano en la producción directa para trasladarla a otras etapas como: la preparación tecnológica, la investigación, la ciencia, etcétera. Esta revolución, por supuesto, tuvo y sigue teniendo consecuencias evidentes al implicar cambios sustanciales en los modos de organización y gestión del capital y de la fuerza de trabajo, de manera tal que las máquinas y las grandes fábricas de producción en serie, que requirieron de una importante cantidad de mano de obra, procesos mecanizados, monótonos, estandarizados y repetitivos, se tornaron innecesarias, de hecho ante tales cambios, se volvieron estorbosas y obsoletas, para dar paso a una producción modular, que se podía hacer en pequeñas series, automatizada, individualizada, flexible, de alta productividad y capaz de realizarse en pequeñas unidades. Las nuevas tecnologías así, iban constantemente eliminando/sustituyendo mano de obra, a excepción de los científicos y técnicos sumamente calificados. Con ello la producción y por tanto la generación de ganancias pudo gradualmente “liberarse” de la generación constante de empleo, eje fundamental del crecimiento del patrón de acumulación existente. El crecimiento ya no tenía por qué venir de la mano del constante aumento del empleo.

TEJES CON
FALLA DE ORIGEN

recuperación de las economías europea y japonesa, propició una pugna intercapitalista muy fuerte por la competencia de los mercados internacionales, pugna que se exacerbó con la entrada de otras economías provenientes del Tercer Mundo. Pronto esta fuerte competencia fue socavando las reglas sobre las cuales había funcionado hasta ese entonces el mercado internacional, escapando a todo control o rumbo fijo.

En tercer lugar, la figura estatal-nacional fue debilitada y rebasada, propiciando una pérdida en cuanto a su capacidad de control y dirección tanto al interior de su territorio como al exterior. Y en cuarto, el contraste tradicional centro industrializado/periferia no industrializada se vio rebasado debido a que en ciertos países de la periferia –como Brasil, México, India, Hong Kong, Singapur, India, Corea del Sur, entre otros- se comenzó a vivir un proceso de crecimiento, en gran parte como producto de la adopción *sui generis* de la modalidad taylorismo-fordismo-keynesianismo, que a largo plazo hizo de varios países tercermundistas una competencia real para los países que antes gozaban del control de los mercados internacionales (Hobsbawm, *op. cit.*; 304-305).

Como vemos, desde finales de 1960, el sistema capitalista en su conjunto comenzó a sufrir una serie de reveses muy importantes tanto en su frente político-social como económico. Comenzó así a mostrar indicios de un gradual pero constante deterioro en cuanto a sus mecanismos generadores de legitimidad y de hegemonía –frente a su contraparte: el socialismo-, reflejado especialmente, en el advenimiento de una nueva ola revolucionaria y de conflictos sociales diversos, en su mayoría pro-socialistas, pro-comunistas o “pro-cualquier otro tipo de modelo de sociedad diferente al establecido”, por un lado, y por otro, en la incapacidad de mantener los niveles de crecimiento y bienestar –relativamente altos- que hasta ese momento había sido capaz de garantizar.

Los mecanismos que hasta ese momento habían funcionado encontraron serias trabas ante un nuevo contexto. Las premisas que habrían de darle un sentido y dirección al antiguo patrón de acumulación se tornaron obsoletas, estorbaban a la revalorización del capital. Ante tal situación, los grupos sociales que antes gozaban de la hegemonía y dirección del proceso –la socialdemocracia- fueron perdiendo terreno, un terreno que no pudieron ni supieron recuperar. De hecho, a distancia puede observarse que la década de los setenta, fue la historia “[...] de unos

gobiernos que compraban tiempo —y en el caso de los países del Tercer Mundo y de los estados socialistas, a costa de sobrecargarse con lo que esperaban que fuese una deuda a corto plazo— al aplicar las viejas recetas de la economía keynesiana, y negarse a cambiar conforme la situación lo hacía (*Ibid*, 408).

Su impotencia y fracaso, en un contexto que demandaba acciones eficaces y rápidas, constituyó un importante caldo de cultivo para el fortalecimiento de una nueva derecha, para la conformación de una alianza conservadora que clamaba en los países centrales, por recuperar los espacios perdidos y poner en orden “sus patios traseros”. Es entre las propuestas de esta nueva derecha que podemos encontrar al neoliberalismo, asiduo enemigo del socialismo y del movimiento obrero, que prometía devolverle al capitalismo su vitalidad siempre y cuando regresara a sus bases y a lo que considera su “naturaleza”.

El neoliberalismo: expresión del viraje internacional hacia la derecha

La crítica situación vivida desde la década de los sesenta y la incapacidad de los gobiernos de garantizar el regreso de los añorados tiempos de bonanza tanto económica como política y social, produjo desde los últimos años de la década de los setenta, el fortalecimiento y el regreso de una nueva derecha sumamente conservadora y radical. En los principales países avanzados: Inglaterra, Estado Unidos o Francia por ejemplo, la atención comenzó a centrarse en aquellos grupos que clamaban por poner orden y “retomar el rumbo”, una vez que la misma historia parecía estar otorgando la razón a aquellos que algún día pronosticaron que la adopción de las premisas keynesianas —inspiradas en el socialismo— terminarían con el capitalismo.

Lo que llamaremos la nueva derecha, se refiere a un conjunto sumamente heterogéneo de grupos que surgieron a la par de los movimientos radicales de los años sesenta —estudiantiles, feministas, socialistas, etcétera—, que buscaban diferentes objetivos y utilizaban diferentes banderas, pero que se caracterizaron entre otras cosas por tener un objetivo común: el deseo de volver a lo que consideraban el “orden natural de las cosas”, ante lo que para ellos era una verdadera anarquía social.

La constituyeron grupos que defienden el mantenimiento de la familia patriarcal frente a sus alternativas; a una América –Estados Unidos- libre frente a sus enemigos internos y externos; la libre empresa capitalista frente al modelo socialista; la libertad del individuo frente al totalitarismo estatal; el trabajo arduo y la virtud frente a la lasitud moral y la libertad sexual; los blancos frente a los negros –o cualquier otro color-; los hombres frente a las mujeres. En suma, la constituyeron aquellos grupos que de alguna u otra forma se sintieron “agredidos” por los cambios registrados durante las últimas tres décadas¹⁰.

A partir de este viraje hacia la derecha, dentro de estos grupos que se declaraban abiertamente antifeministas, antiaborto, nacionalistas, fundamentalistas y racistas es que vamos a ubicar al neoliberalismo¹¹. Los grupos proncoliberalismo en particular, y los de derecha en general, aprovechándose de la debilidad del grupo dominante del momento –que llamaremos muy genéricamente la socialdemocracia-, y sus evidentes contradicciones, buscaron construir un consenso propio a partir del mismo malestar social.

Enfrentaron este malestar social como un problema real, como experiencias verídicas y vividas, interpretándolo y dándole un sentido desde su punto de vista, desde su muy particular visión de las cosas. Con respecto al Estado, por ejemplo, explotaron el hecho de que cada día representara menos una institución de bienestar social y más un aparato insensible a las necesidades sociales, ante lo cual comenzó a clamar por el restablecimiento de la competencia y la responsabilidad personal por los esfuerzos y las recompensas; apeló a la imagen del individuo agobiado por los

¹⁰ Para más información sobre las organizaciones que incluyen la nueva derecha, ver Hall (1981) y Hunter (1981).

¹¹ El neoliberalismo no tiene que ver precisamente con temas como el aborto, la pureza racial o la religión. Como venimos mencionando, la derecha constituye un movimiento formado por una cantidad increíble de grupos que defienden diferentes temas, algunos relacionados, algunos no necesariamente. Si se ubican en el mismo “recipiente” es porque la conjunción de sus luchas fue lo que les dio fuerza. En palabras de Allen Hunter: “Sin embargo, la existencia de la nueva derecha se hizo realmente posible con el surgimiento de grupos independientes y circunscritos a la defensa de asuntos particulares [como los antiaborto, fundamentalistas religiosos, antifeministas, “antinegros”, etcétera]. Sin estos grupos la nueva derecha habría sido incapaz de promoverse como eje de un dinámico movimiento” (*op. cit.*: 1749). En este sentido, se podría decir que cada uno obtiene apoyos de los demás ya sea directa o indirectamente: “Las cuestiones relativas a la vida familiar, la sexualidad, el lugar de la mujer en la sociedad, la raza, la calidad de los servicios públicos no son asuntos efímeros; los cuadros privilegiados de la nueva derecha de clara tendencia pro empresarial, obtienen su legitimidad de [estos] grupos de interés social. Y viceversa: el moralismo tradicional gana su legitimidad en su alianza con el mercado libre como símbolo de la libertad y el individualismo americanos” (*Ibid.*: 1759).

impuestos, debilitado por el proteccionismo de la seguridad social y con su iniciativa socavada a través de las limosnas del Estado.

Y es que esa imagen no era un invento, de hecho, las clases dominadas cada día representaban más una especie de receptores pasivos de un ente, el Estado, sobre el cual no ejercían ningún control real ni de importancia: "este Estado se 'vivía' cada vez más como un poder arbitrario y profundamente antidemocrático: independientemente de quien lo tuviera a su cargo, se utilizaba de modo creciente para disciplinar a las clases que afirmaba representar" (Hall, 1981; 1741).

Al mismo tiempo supieron rescatar valores ya arraigados en la sociedad y adaptarlos a su propio discurso. En efecto, desde diferentes palcos comenzaron a dedicar sus esfuerzos a llevar a cabo una labor ideológica de construcción de sentido común populista, apelando a un sin fin de valores, tradiciones y sentires positivos ya existentes, tales como el de la libertad, el individuo, la democracia, la familia, la nación, el orden, la autoridad de la ley, las normas, o la confianza en sí mismo. Supieron elegir un sin fin de elementos provenientes de diferentes ideologías tradicionales, insertándolas y entretejiéndolas "para conjurar una serie de discursos que se unen a las prácticas de la derecha radical y a las fuerzas de clase que ahora aspiran a representar" (*Ibid*, 1730).

Hicieron especial uso de aquellos valores que específicamente no parecerían tener relación alguna con cualquier clase social, y que en sí podían constituirse como elementos de discursos muy diferentes y articularse de diversas formas. Con ello pudieron realizar una labor de "neutralización", disfrazando su discurso como un llamado *a la sociedad en general y no a una clase en particular*. Con respecto al Estado, por ejemplo, se apegaron a la típica interpretación liberal que le asigna un papel neutral y benevolente, que lo presenta como la encarnación del interés social por encima de la lucha de clases —en contra del Estado opresor clasista de la socialdemocracia—.

Cabe mencionar que por lo regular este uso de los valores y tradiciones, en especial los relacionados con el de la legalidad y el orden, vinieron cargados de moralismos que explotaron el conservadurismo y el miedo de las clases subordinadas. En cuestión de derecho, por ejemplo, apeló —y apelan— a amedrentar a la gente evocando de manera concreta "las experiencias de crímenes y robos, de pérdidas de propiedades escasas y temores de ataques inesperados dentro de

zonas y vecindarios de la clase obrera" (*Ibid*; 1735) –aunque también de la clase media, espacio en el cual ha encontrado más adeptos- para pedir por una mayor vigilancia policiaca, por la imposición de sentencias más duras, una disciplina familiar más severa, etcétera. Como diría el autor antes citado: "ata a la gente a esa 'necesidad de autoridad' que ha resultado tan significativa para la derecha en la obtención del consentimiento para su programa autoritario" (*Idem*).

En este sentido fueron muy efectivos al explotar y al mismo tiempo crear una mentalidad de "crisis" que difundió un sentimiento de desaliento y la impresión de que las cosas podían empeorar antes que mejorar. Frente a esta situación pudieron mostrarse como una verdadera alternativa, *capaz y segura de sí misma* –por ejemplo, con respecto al partido inglés liderado por Thatcher, Hall menciona: "Constituye la única fuerza política parlamentaria que sostiene resultadamente el punto de vista de que 'las cosas no pueden seguir como antaño'. Sabe que debe destruir para reconstruir de una manera fundamental" (*Ibid*; 1738)-.

Por el contrario, su principal adversario: la socialdemocracia, no supo articular una estrategia alternativa que fuera más allá de las mismas recomendaciones que ya no daban resultado. No supo, así, sostener su legitimidad ni ante sus bases tradicionales: los trabajadores y clases populares, ni ante los grandes capitales, que como vimos, vivían otras necesidades.

En cambio, al utilizar la desilusión de la población ante el estatismo socialdemócrata, la nueva derecha y los neoliberales supieron ubicarse "del lado del pueblo", en oposición a los "de arriba", a aquellos que estaban en el gobierno, a los culpables de manejar un Estado tan opresor. Se presentaron así como una forma de atacar la figura burocrática opresora –ahora el principal enemigo de la sociedad- con lo cual pudieron granjearse la simpatía de gran parte de las bases que antes habían sostenido a la socialdemocracia, jalando de paso a las demás ya de hecho inconformes y, con su propuesta monetarista, a los grandes capitales.

Sin embargo, este giro hacia la derecha –como ya mencionamos- no fue el resultado de una "reacción improvisada y epidémica" frente a la crisis de los setenta, aunque ésta haya sido su principal detonante, sino que constituyó –y constituye- todo un movimiento cuya formación venía gestándose de manera paulatina y meditada, a la par que las otras alternativas que lograron imponerse como las hegemónicas:

La derecha radical no surge de la nada. Debe entenderse en relación con formaciones políticas alternativas que intentan ocupar y dirigir el mismo espacio. Se encuentra comprometida en la lucha por la hegemonía dentro del bloque dominante en contra, tanto de la social democracia como del ala moderada de su propio partido (*Ibid*, 1728).

Desde un principio sus principales seguidores y líderes establecieron una red compuesta por varios núcleos que incluye numerosas organizaciones económicas y sociales y que se halla vinculada a una fuerte derecha religiosa. Tuvieron en ese aspecto, el acierto de irse ubicando en varios –si no en todos- los puestos clave de la sociedad. En este sentido, se crearon organizaciones de cuadros destinadas fundamentalmente al cabildco, la defensa jurídica y la propaganda –en especial entre aquellos movimientos sociales inconformes-; se ubicaron en posiciones importantes tanto en el gobierno como en empresas; se unieron a movimientos religiosos¹².

Buscaron espacios en los principales medios de comunicación –pronto comenzaron a editar sus propias revistas y periódicos; a escribir sus propios libros y a transmitir sus ideas a través de sus voceros televisivos y radiofónicos-; y crearon sus propias escuelas –especialmente los empresarios que quisieron formar cuadros acordes con sus necesidades-, desde las cuales respetados y prestigiados intelectuales dictaban sus ideas.

Realmente constituyó –y constituye- un movimiento que desde sus comienzos tomó muy en serio sus ideas así como su papel y se dedicó a luchar por él. En palabras de un importante empresario ultraderechista estadounidense:

Los viejos derechistas no pasaban de ser charlatanes y panfletarios. Su fogosidad se apagaba con cualquier logro. La nueva derecha en cambio ha avanzado hacia un objetivo más pragmático: hacer realidad sus planteamientos (Viguerie, 1980; 79)¹³

Operando sobre una base de contradicciones genuinas fue hilvanando un proyecto que al mismo tiempo parecía poseer un fondo racional y material, de tal manera que llegado el momento oportuno pudieran dar pelea: su lucha y organización ya venían de tiempo atrás.

¹² Al respecto Hunter nos dice: “Las estrategias neoderechistas contaban con amplias razones para buscar esta unión. Intentando ganar permanentemente nuevos grupos interesados en asuntos específicos, comprendieron que los fundamentalistas no sólo coincidían con la nueva derecha en ciertos temas sino que compartían con ella una visión general conservadora” (*op. cit.*: 1762)

¹³ El libro precisamente se llama: *The New Right: We Are Ready To Lead*, editado por *The Viguerie Company*.

El proceso de reestructuración a escala internacional

La crisis de la década de los setenta, habría de ser el laboratorio donde se sentaron las bases para una reestructuración integral del capitalismo a escala mundial. Cabe mencionar que en gran medida correspondió a una respuesta defensiva y ofensiva por parte de los países centrales, especialmente *Estados Unidos*, para hacer frente a los cambios objetivos registrados hasta ese momento –buscando recuperar su papel de liderazgo-, superar el descenso tendencial de la rentabilidad y abrir un nuevo ciclo de expansión a largo plazo (Rivera, 1992; 45).

Con el objeto de recuperar “los espacios perdidos”, pusieron en práctica una serie de tácticas de la más diversa índole y en las más diversas esferas de la vida social en general: desde aquellas que actúan a nivel de la vida cotidiana, hasta las que actúan en el plano macroeconómico. Por ejemplo, con el objetivo de detener el avance ruso y de poner control sobre aquellos países que se estaban saliendo de línea –aquellos que habían llevado a cabo revoluciones sociales de carácter nacionalista/antiimperialista-, Estados Unidos implementó diferentes políticas entre las cuales destaca la doctrina de seguridad nacional, basada en tácticas de contrainsurgencia.

Esta doctrina a grandes rasgos tuvo como eje central la idea de que la derrota del socialismo tenía que pasar forzosamente por una pelea no sólo externa, de Estado a Estado, sino también interna, sobre todo en aquellos países donde la “amenaza del imperio del mal” era inminente –donde el socialismo ya estaba implantado o existía una tendencia hacia ello-.

La nueva política de defensa que habría de adoptar consistió en entrenar e instruir a los ejércitos nacionales de los mismos países en donde consideraba conveniente intervenir, en diferentes tácticas, especialmente de tipo ideológico y psicológico. El objetivo era eliminar al enemigo, pero ya no por medio de enfrentamientos directos, físicos –la derrota de Vietnam y la gran pérdida de efectivos habían dejado una importante huella-¹⁴, sino a partir de “campañas” de deslegitimación, de aislamiento y de sofocación.

Al enemigo había que desprestigiarlo y cansarlo, de tal manera que los insurgentes y los gobiernos revolucionarios dejaran de considerarse una alternativa política posible o estable. Los instrumentos ya no iban a ser tanto las armas de fuego, como las armas de la política y la

¹⁴ Aunque ello no quiere decir que no hayan hecho uso de las armas directamente.

ideología, ya que la victoria se buscaba en la alteración de las variables políticas, hasta que el enemigo se volviera ineficaz y “cayera por su propio peso”. Se trababa en pocas palabras de “neutralizar a los rebeldes del Tercer Mundo llevándolos a los límites del desangramiento y la depauperación” (Cueva, *op. cit.*; 258).

Esta política la llevó a cabo en países como Nicaragua –para derrocar al gobierno sandinista-, en El Salvador –para derrocar al movimiento popular representado principalmente por la alianza del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el Frente Democrático Revolucionario- y Guatemala –donde el proceso insurgente fue mutilado aun antes de que alcanzara una magnitud comparable a los dos movimientos mencionados- (*Ibid*; 259-260).

Basándose en la idea de que los países del sur estaban en rebelión abierta en contra del norte, Estados Unidos buscó al mismo tiempo una alianza estratégica con sus principales socios. Esta alianza se expresó en la formación de la Comisión Trilateral, que tenía por objeto: 1) unir al norte –Estados Unidos, Europa occidental y Japón-; 2) dividir al Segundo Mundo –incitando el conflicto entre China y la Unión Soviética-; 3) evitar una posible alianza entre el Segundo y el Tercer Mundo; y, por último, 4) dividir al Tercer Mundo, ello a través ya fuera de políticas de presión y/o de ofrecimientos de ayuda y préstamos económicos –aprovechando el excedente de capitales financieros-¹⁵.

En cuanto a las ayudas económicas se refiere, se siguieron creando programas como la Agencia Internacional de Desarrollo y la Alianza para el Progreso, mediante las cuales varios países periféricos recibieron importantes cantidades de dinero para “auspiciar su desarrollo”.

En otros países apoyó, a conveniencia, a aquellos grupos que estaban a su favor, otorgándoles apoyo para derrocar a sus contrincantes –que por lo regular eran antiestadounidenses-. Así, por ejemplo, mientras que en Japón y en otros países como Corea del Sur y Taiwán, apoyó la reforma agraria y otras medidas antimonopolistas y antioligárquicas, ello con el objeto de detener la expansión china, vietnamita, coreana o soviética en la región; en América Latina, apoyó a las grandes oligarquías locales extractoras o agroexportadoras, enemigas de cualquier reforma social. Ello tal vez porque en esta región Estados Unidos se enfrentaba a grandes movimientos de

¹⁵ Para mayor información sobre este tema ver Dos Santos, 1999; 38.

carácter popular “antiestadounidenses” y nacionalistas. Su opción por tanto, estaba en las grandes oligarquías retrógradas. Apoyó también, sin mayor recato o pena, la implantación de gobiernos dictatoriales tales como el chileno –donde se derrocó al gobierno socialista democráticamente elegido de Salvador Allende–; argentino, boliviano, o brasileño.

Cuando las tendencias mundiales cambiaron, las políticas estadounidenses cambiaron también. Para finales de la década de 1980, la carta con la que empezó a jugar Estados Unidos fue con la de la democracia y los derechos humanos. En efecto, paradójicamente este país inició una política de apoyo a los movimientos democráticos en contra de las dictaduras militares que él mismo había ayudado a crear y había apoyado anteriormente. El resultado fue el surgimiento de varias “democracias”, lideradas por partidos liberales y conservadores nacionales, que tendieron a preservar en mucho prácticas autoritarias, aunque de manera disfrazada –en especial, en una constitución–. Tal vez una de las razones de este “cambio de rumbo”, más bien de estrategia, se debe a que con el tiempo los propios regímenes militares tendieron hacia el nacionalismo y una oposición hacia los cambios que los países centrales querían llevar a cabo (Dos Santos, 1999; 39).

En los diferentes países donde hubo una intromisión ya fuera directa o indirecta, por lo general, hubo una presión o “incitación” para adoptar las medidas neoliberales con el fin de cambiar su rumbo de desarrollo económico, buscando adaptarlos a la reestructuración de los países centrales y mantenerlos como su periferia. El caso más paradigmático es el de Chile, por ejemplo, que con el golpe de Estado en 1973 habría de convertirse en el primer país neoliberal como tal.

En la esfera económica, esta campaña por recuperar espacios comenzó igualmente por Estados Unidos, quien –tomando ventaja de su poder gracias a su supremacía militar y al papel del dólar en las transacciones internacionales– llevó a cabo una política de ajuste proteccionista, ello ante su incapacidad de competencia real contra dos categorías de adversarios en la arena internacional: por un lado Japón y –en menor medida– Alemania, y por otro los países recientemente industrializados –los también llamados “*late comers*” que pudieron beneficiarse “simultáneamente de la incorporación de tecnología moderna con mínimos costos de desarrollo y salarios comparativamente bajos” (Rivera, 1992; 46)-.

A nivel internacional comenzó a celebrar diferentes acuerdos en los cuales “recomendaba” –aunque más bien con sus medidas unilaterales obligaba– a sus diferentes socios, a adoptar

diversas medidas como: incrementar las tasas de interés, controlar severamente la emisión monetaria, bajar los índices de producción y exportación —como fue el caso de Japón quien tuvo que aceptar tal medida como un “acuerdo voluntario”-, y no realizar ningún esfuerzo por amortiguar el segundo “*shock*” energético —1979- por medio del gasto público.

Las medidas recomendadas correspondían no ya a los preceptos tradicionales de la política económica, sino a los preceptos emanados de la “teoría” neoliberal —a grandes rasgos enunciados en la introducción-, especialmente de la corriente friedmaniana según la cual el comportamiento de las economías —y por lo tanto el control de la inflación- venía determinada por factores predominantemente monetarios, lejos de las políticas fiscales o la acción estatal.

En los países centrales la adopción de tales medidas comenzó por Inglaterra bajo el gobierno de Margaret Thatcher, en 1979. Después siguió Estados Unidos, en 1980¹⁶ y, en el continente Europeo occidental, comenzó a aplicarse desde 1982, con Helmut Kohl en Alemania. La adopción de las políticas neoliberales, en cierta medida funcionó: en el conjunto de los países de la OCDE se pudo detener la inflación. Ésta tasa cayó de 8.8% a 2.5% entre 1970 y 1980, y la tasa de ganancia se recuperó: si para 1970 había caído cerca de 4.2%, para la década de 1980 había aumentado 4.7% (*Idem*). Aunque cabe mencionar, ello tuvo que apoyarse en gran medida en el desempleo —que tendió a duplicarse-, en las partidas provenientes de los recortes del gasto público y de las privatizaciones, y en la flexibilización del trabajo.

Con respecto a este último punto, la ofensiva contra los sindicatos y los contratos colectivos permitió en diferentes grados, romper con las ataduras que impedían a los patrones eliminar “trabajo redundante”, y reducir los salarios y derechos de un gran contingente de trabajadores. En realidad se tendió a garantizar las mejores condiciones para la revalorización del capital.

El tipo de reestructuración que se estaba llevando a cabo en los principales países capitalistas, en los más importantes debido a su peso económico y político, tendió a definir el rumbo y la

¹⁶ En Estados Unidos las cosas fueron un poco diferentes. Bajo el gobierno de Ronald Reagan, se redujeron los impuestos a favor de los ricos, se elevaron las tasas de interés y se aplastó la única huelga seria de su gestión, pero no se respetó la disciplina presupuestaria ya que se encontraba enfrascado en una fuerte batalla contra la URSS, por lo que, al contrario, se lanzó en una carrera armamentista sin precedentes que habría de repercutir en el incremento de su déficit público —de hecho dejando una deuda pública mucho mayor que la creada por cualquier otro presidente hasta ese momento- (Anderson, 1995: 8).

orientación general de las transformaciones que tuvieron lugar en las demás regiones del mundo. Y esa orientación estuvo dirigida a mantener las diferencias entre el centro y la periferia; a favorecer al primero —especialmente a Estados Unidos, Japón y la Europa occidental—, en detrimento de la segunda.

De hecho, esta ha sido la tendencia general del capitalismo, y ello se ha llevado a cabo a partir del manejo de una de las armas más importantes que tienen los países centrales: el monopolio sobre cinco sectores clave. En efecto, los países centrales tienen en sus manos el monopolio sobre cinco sectores, los cuales definen en gran medida la jerarquización de la distribución de los ingresos a escala mundial: el tecnológico, el de los mercados financieros mundiales, de acceso y explotación de los recursos naturales, de las armas de destrucción masiva y de los medios de comunicación —que “no sólo conducen a una uniformidad de la cultura, sino que también inauguran nuevos medios de manipulación política”— (Amin, 1996; 9-10).

Este control les otorga tal poder al situarlos en una posición en la cual pueden “darse el lujo” de orientar el rumbo del capitalismo prácticamente como a ellos les parezca. Lo anterior debido a que la superioridad que presentan en estos rubros son los que tienden a anular los impactos de la industrialización en las periferias, al devaluar su trabajo productivo y sobrevalorar el supuesto valor agregado a las actividades de los monopolios, que son la fuente de riqueza directa de los países avanzados. A partir de esta dinámica, la distribución de los ingresos siempre resultará desigual, en detrimento de los sectores más pobres de las periferias.

En este sentido, el control sobre la reestructuración del sistema financiero, jugó un papel muy importante en esta lucha por implantar el neoliberalismo en las regiones dependientes, y lo anterior a través del pago de la deuda externa. Como dijimos anteriormente, los principales países capitalistas, en particular Estados Unidos e Inglaterra —dos de los banqueros más importantes del mundo—, aumentaron sus tasas de interés y convirtieron los préstamos y financiamientos que durante los años setenta operaron a largo plazo con tasas de interés muy bajas o prácticamente nulas, en préstamos y financiamientos a corto plazo. El encarecimiento del crédito produjo en la mayoría de los países del Tercer Mundo, específicamente en aquellos que habían contraído grandes deudas bancarias a tasas flotantes con los países centrales —como México, Brasil, Argentina, Filipinas o Indonesia—, el aumento de sus deudas a cifras prácticamente impagables y

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

una consecuente falta de liquidez para hacer frente tanto a sus compromisos internos¹⁷ como externos.

La conjunción del aumento de sus deudas, con otros indicadores como devaluaciones monetarias, aumento en sus tasas de inflación, desempleo, estancamiento –muchos de los cuales ya estaban presentes desde tiempo atrás-, la falta de liquidez y la consecuente fuga de capitales, dejaron a estos países en una situación de impotencia, obligándolos a aceptar una serie de compromisos que fueron pactados al momento de negociar sus deudas.

El deterioro del saldo de la cuenta corriente de los países deudores, representó una sangría tremenda para sus pueblos, ya que las medidas pactadas estuvieron desde un principio orientadas prácticamente al único fin del pago de su deuda, en detrimento de las necesidades sociales. La constante transferencia de recursos financieros, comerciales y productivos, que se inició desde entonces, representó y sigue representando hasta la fecha, la inhibición de su adecuado desarrollo, exponiendo sus economías al estrangulamiento estructural, ya que no se ha podido superar la tendencia al estancamiento, de hecho se acentúa –como tendremos la oportunidad de demostrar con el caso mexicano-.

¿Y cómo se va a superar si prácticamente todos los recursos generados en estos países se van al extranjero? En el caso concreto de México: “En el periodo 1983-1987, México acumuló un superávit de 47 900 millones de dólares. En el mismo lapso, la transferencia neta de recursos al exterior ascendió a 62 300 millones, *cifra que representa más del 7% del PIB*” (Guillén, 2001; 59. Las cursivas con mías).

Los recursos necesarios para reactivar la economía se destinan al pago de una deuda que parece jamás podrá ser saldada: “En el caso concreto de América Latina, en 1987 se debía 426 mil millones de dólares, y a pesar de haberse pagado hasta 1996, 648 mil millones de dólares, la deuda externa regional subió a 611 mil millones de dólares” (*La Jornada*, 18 de agosto de 1996; 48).

¹⁷ La mayor parte de los recursos provenientes de la deuda externa contraída por los países dependientes latinoamericanos, habían sido utilizados para ampliar la demanda via el gasto público, con lo cual pudieron postergar por algún tiempo las reformas estructurales que se hacían necesarias ante las contradicciones de su patrón de acumulación.

Detrás de la adopción del neoliberalismo, como podemos ver, se encuentra una tremenda lucha que se ha dado en todos los aspectos y en todos los niveles. Su avance ha tendido a fincar nuevas bases, para que en un nuevo contexto, los grandes capitales y los nuevos grupos hegemónicos puedan mantener su poder y su posición. Ha tendido a ensanchar las relaciones centro-periferia y a dismantelar las instituciones sociales que garantizaban los mínimos de bienestar de una relativa mayoría. Pero como vemos, es una lucha que no empezó hace dos décadas, es una lucha que viene de tiempo atrás y que se ha dado en todos los frentes. Si hay algo que reconocerles es precisamente su empeño y capacidad política.

Capítulo 3

El régimen posrevolucionario (1917-1982)

Para México, al igual que para el resto del mundo, las décadas de 1960 y 1970 significaron un periodo en el cual diferentes procesos tanto internos como externos habrían de conjugarse para estallar en una gran crisis –política, social y económica- y, al final, abrir paso a un proceso de reestructuración, que derivaría en una nueva etapa histórica. Igualmente se vivió un importante ambiente de efervescencia social y política, que en gran medida giraba en torno a la búsqueda de la redefinición de las relaciones Estado-sociedad. Y, de la misma manera, se vivieron varias crisis económicas que pudieron ser superadas por medio de la aplicación constante de medidas de corte keynesiano –la intervención estatal en la economía jugó un papel de vital importancia-, hasta que su relativa eficacia se agotó. El proceso, como es de esperarse, estuvo signado por las especificidades propias del país que, a grandes rasgos, se encontraban enmarcadas en tres situaciones: el ser un país dependiente, el seguir una modalidad de acumulación basada en la industrialización sustitutiva de importaciones, y el vivir bajo un régimen político-social muy *sui géneris*, que llamaremos posrevolucionario. Empezaremos nuestro capítulo por este último punto.

El régimen político-social mexicano

La conformación del moderno sistema político-social mexicano –contra el cual habría de luchar el neoliberalismo- fue producto de la “institucionalización” de las demandas e intereses que habrían de llevar a diferentes sectores de la sociedad, a embarcarse en una lucha armada: la Revolución Mexicana –1910-1917-. Esta lucha, como es bien sabido, derivó en la conformación de un nuevo pacto social basado en la conciliación de las clases y en la realización de un modelo de desarrollo capitalista nacional liderado por el Estado. A grandes rasgos contaba con las siguientes características:

- a) *Enarbolarse una ideología que apelaba a la inclusión de todas las clases sociales en un proyecto común: el proyecto de la Revolución Mexicana.* Este proyecto supo rescatar los reclamos e intereses de los diferentes sectores que lucharon en el conflicto, en especial de dos: por un lado las capas medias ilustradas¹ y, por otro, de las capas campesinas, obreras y populares², para integrarlos en un programa -expresado en la Constitución de 1917- que serviría de base al Estado mexicano en el ejercicio de su dominación, como fuente de legitimidad en su acción y como arma político-ideológica³.
- b) *Estar liderado -y monopolizado- por la alianza de las varias fuerzas⁴ que triunfaron en, o sobrevivieron a la revolución, y que más tarde se instituiría en un partido político* -el hoy conocido Partido Revolucionario Institucional-, tomando las riendas definitivas del proceso de formación de la sociedad, a la vez que desarrollando una relación de simbiosis con el Estado y el gobierno.
- c) *Seguir una línea de masas.* Con el objeto de "conjurar la revolución social", se llevó a cabo un proceso en el cual los sectores campesino, obrero y popular, fueron agrupados en organizaciones⁵, reconocidas jurídicamente por el Estado, y asimiladas -corporativizadas- en la estructura de poder como bases. Su lucha fue retomada como bandera del nuevo régimen político, encausándola por medio de concesiones tanto económicas como políticas, a cambio de una total sumisión⁶.
- d) *Conformarse en un sistema presidencialista y paternalista.* La figura presidencial en este régimen jugó un papel fundamental al convertirse en toda fuente de poder. En ella tendió a concentrarse prácticamente toda la capacidad de tomar decisiones en cuanto al rumbo del país

¹ Que buscaban la defensa a ultranza del principio de propiedad privada, el desarrollo de un capitalismo nacional, la institución de un Estado de derecho independiente de los intereses privados y un sistema jurídico de libertades públicas (Córdova, 1974: 31).

² Que comenzaron su lucha a favor de una reforma agraria, del mejoramiento de las clases trabajadoras urbanas, y de la instauración de un Estado fuerte capaz de garantizar sus derechos (*Idem*).

³ En palabras de Córdova: "El Estado mexicano se constituyó sobre la base de una integración dirigida políticamente, llegando a abarcar la mayor parte de los sectores organizados de la población y adoptando los intereses de estos sectores como programa, modificable según las circunstancias y según la correlación de fuerzas existentes, y como motivo inmediato de su acción" (*Ibid.*: 45).

⁴ Dispersas, la mayoría de carácter local y dependientes ya fuera de caudillos militares o bien de caciques (*Ibid.*: 38).

⁵ En este régimen, la negociación colectiva se impuso como modelo de concertación social y como mecanismo de resolución de los conflictos. Las clases o grupos sociales jugaban su papel no a través de individuos aislados, sino a través de sus organizaciones, las cuales estaban constituidas en entes sumamente verticales, jerárquicos y burocráticos.

⁶ "La alianza, desde la época de Cárdenas, se concibe como unión y compromiso entre el Estado y las organizaciones, mediante los cuales ciertos puestos públicos, curules, subsidios, prestaciones para obreros, tierras o créditos para los campesinos, se otorgan a cambio de actos de adhesión al Estado o de fidelidad para el régimen" (*Idem*).

y en cuanto a la conciliación de las diferencias entre los sectores sociales –al respecto, el presidente aparece como el “árbitro supremo a cuya representatividad todos los grupos someten sus diferencias y por cuyo conducto legitiman sus intereses” (*Ibid*; 57)-. Su poder emanaba directamente de su capacidad de manejar a las masas invocando una imagen de omnipresencia y omnipotencia, lo cual fomentaba en ellas un sentimiento en el que se mezclaba la admiración y el temor.⁷ Y

- e) *Dejar en manos del Estado la dirección del país en todos sus aspectos*, buscando crear las condiciones más favorables para el desarrollo de un sistema capitalista *nacional*, productivo y redistribuidor. En un país caracterizado por la enorme dispersión de los factores productivos y la debilidad, poca integración e inmadurez de las clases sociales⁸, el Estado tuvo que convertirse en el principal promotor –“si no es que el único” (*Ibid*; 9)- del desarrollo social.

El creciente malestar social ante un sistema autoritario

En una primera etapa, justo cuando comenzó a “institucionalizarse” el proyecto revolucionario –alrededor de 1930-, el sistema pudo funcionar relativamente bien, debido a que la persecución conjunta de los objetivos e intereses de los diferentes sectores no causaban gran problema: la capacidad de promover a las masas con movilidad y beneficios sociales, mediante una hábil administración en materia educativa, agraria, laboral y electoral, no chocaba con la necesidad de propiciar, para las “capas burguesas”, las condiciones necesarias para su adecuada capitalización, inversión y ahorro. Sin embargo, con el paso del tiempo esta situación comenzó a mostrar sus límites y contradicciones. El poder tendió a concentrarse cada día más en las cúpulas. El sistema se volvió cada vez más autoritario y jerárquico, ahogando toda iniciativa por parte de los sectores a los cuales debía representar directamente: el campesino, el obrero y el popular, dándole prioridad al impulso, desarrollo y defensa de las garantías capitalistas:

[...] a partir de 1940 el Estado desplaza a ritmo veloz su relación con las clases populares y estrecha sus vínculos con la burguesía que, en gran parte, contribuyó a crear. Una alianza con el bloque social dominante sustituyó, sin romperla, la alianza anterior con las clases populares. Todo se movió con rapidez: contrarreforma agraria, reducción

⁷ “Aterrorizadas y acobardadas por la posibilidad de perder cuanto se les ha concedido o de sufrir las más terribles represiones, y escépticas frente a un poder leviatánico [...] en ellas sigue dándose el culto más empedernido y más desenfrenado a la autoridad del poder” (*Ibid*; 60).

⁸ En tanto ninguna gozaba de la suficiente fuerza para adoptar un papel hegemónico y guiar el proceso histórico del país.

de los salarios reales, abandono relativo de la ideología popular, sometimiento a la política de guerra fría (Percyra, 1980; 292).

Así, mientras que las capas populares iban quedando enclavadas en el sistema *partido-Estado-gobierno* únicamente como bases de control –puesto que toda iniciativa de organización independiente o de promoción de cambio por su parte era cuestionada y apagada, ya fuera por medio de concesiones económicas o políticas, o por medio de la represión física directa-, los sectores capitalistas tendieron a mantener y fortalecer su independencia del partido oficial, constituyéndose en una contraparte a la cual había que pedir opinión. Mientras que a las primeras se les destruyó toda capacidad de decisión –a excepción de sus líderes-, a los segundos se les reconoció todo derecho de participar de manera decisiva en la formulación de las políticas públicas que les pudieran afectar, reservándose al mismo tiempo la capacidad de ejercer su influencia en la designación de los más altos funcionarios.

Con el tiempo, el plan de desarrollo nacional se fue alejando de lo que se suponía iba a ser su principal objetivo: atender las necesidades sociales, “hacer justicia” a los sectores participantes de la Revolución. Y, en cambio, se definió a partir de lo que era necesario para apoyar la acumulación privada. El crecimiento económico pasó a ser el principal motivo y justificación de la acción estatal, en cuanto se suponía –y se sigue suponiendo-, era condición suficiente para garantizar el bienestar social.

Al mismo tiempo, el grupo gobernante fue convirtiendo las aspiraciones de reforma social en armas de control político mediante las cuales pudo, por un lado, mantener en orden a las clases subordinadas –prometiendo que la Revolución tarde o temprano les haría justicia- y, por otro, legítimar su dominación –ubicándose como los verdaderos representantes de sus intereses-. Pero no sólo eso, a partir de la subordinación al Estado de los sectores mencionados, como entes organizados, tuvo la posibilidad de manejarlos/utilizarlos, con holgura, como contrapeso político en contra de los grupos opositores –como los disidentes, la izquierda o el sector empresarial privado-. El cumplimiento de los compromisos por parte de las elites gobernantes, a excepción del periodo presidencial del General Lázaro Cárdenas, fue convirtiéndose a largo plazo en mera retórica, derivando en su alejamiento de las bases y principios fundantes: los líderes cada día representaban menos lo que pregonaban. Debido a lo anterior, diversos sectores comenzaron a levantarse y a buscar vías de representación alternativas.

El malestar social que fue provocando el alejamiento de los líderes respecto de sus bases, el proceso de centralización de las decisiones en la cúspide del poder, la falta de medios de

expresión por parte de las clases subordinadas y su incapacidad de incidir de alguna manera en la toma de decisiones, la falta de atención de los supuestos representantes del pueblo a sus necesidades, en fin, el incumplimiento de los compromisos pactados en el proyecto de la revolución, fueron derivando en la formación de diferentes movimientos sociales y en la expresión del malestar social a través de diferentes acciones –como el abstencionismo en las elecciones, o ya más tarde (década de los setenta), el voto en contra del régimen-. Los movimientos, gracias a la capacidad del Estado de controlar a las masas y de ejercer un dominio pleno sobre los cuerpos policíacos y militares, pudieron ser aplastados, desintegrados. Mientras que el malestar de la sociedad en general, pudo ser canalizada a través del otorgamiento de importantes concesiones económicas y políticas –elevando el gasto público en cuestiones de salud, educación, obras públicas, vivienda, subsidios, así como propiciando el ascenso social y llevando a cabo ciertas reformas-.

Durante un buen tiempo, el malestar y los conflictos sociales pudieron ser contenidos sin mayor problema, sin embargo, ya para la década de 1970, el régimen sufría de una grave crisis de legitimidad que planteaba la necesidad de implementar algunos cambios: se tenía que abrir el sistema y demostrar que no se habían abandonado las bases, se tenía que recuperar la legitimidad perdida. Esta década constituyó un importante momento de coyuntura, ya que es aquí donde notamos la exacerbación del malestar social producto de un gradual proceso de concientización y el resurgimiento y desarrollo de importantes movimientos sociales, hechos que a su vez, se encontraban enmarcados en un nuevo contexto nacional. En efecto, el México que presenciamos en la década de los setenta, ya no era el mismo que el de la década de 1940: se encontraba más urbanizado, había pasado de ser netamente agrario, a uno de nueva industrialización; las capas empresariales ya tenían un mayor desarrollo, las capas medias comenzaban a ser el sector más importante del país y los niveles de vida y de educación eran mucho mayores. Las necesidades y, por lo tanto, las posibilidades de control eran ya otras – como lo veremos más adelante-.

El movimiento estudiantil de 1968, no obstante su corta duración, constituye el punto de partida para entender el carácter de las luchas de esta década, que girarían, en gran parte, en torno al reclamo de la redefinición de las relaciones Estado-sociedad, al haberse constituido aquél en un ente sumamente autoritario, jerárquico, coercitivo y “cooptador”, que sofocaba cualquier iniciativa de independencia y cambio. Este movimiento, en palabras de Arturo Guillén, había evidenciado que la estabilidad mexicana, ejemplo frente a una América Latina

convulsionada, "era una ficción sustentada en un sistema político que operaba con eficacia, pero fíncado en el autoritarismo, la falta de democracia, el centralismo, el presidencialismo y un partido de Estado –el PRI- que controlaba y dominaba a su arbitrio la vida política del país" (2001; 20). El carácter del movimiento y su consiguiente represión, abrieron un canal que dejaría profundas huellas en la conciencia de la sociedad mexicana, la cual, desde diferentes ámbitos y enarbolando diferentes objetivos, iniciaría un proceso de lucha por hacerse escuchar y por mostrar que ya no se podía seguir gobernando así, que era necesario llevar a cabo importantes cambios.

Las voces de descontento surgieron de diferentes sectores: desde el campesino, el obrero y el popular –cooptados y corporativizados por el sistema-, hasta las mismas clases medias, los sectores intelectuales, los empresarios, la Iglesia católica, los partidos políticos y demás organizaciones que buscaban un ámbito de participación alternativa y más independiente. Ante esta situación, el gobierno decidió "ceder" un poco y cambiar de táctica.

En efecto, con el inicio de un nuevo sexenio, presidido por Luis Echeverría Álvarez, se pusieron en marcha varias medidas y reformas tendientes a crear un clima más favorable, tratando de recuperar la confianza de la población –una vez que el movimiento estudiantil fuera salvajemente sofocado- y de evitar o prevenir el surgimiento de conflictos y protestas sociales difíciles de controlar. Las medidas, que abarcaban tanto el terreno de lo económico como de lo político, comenzaron por manejar un discurso en el cual se prometía el regreso a las raíces populares de la Revolución y del cardenismo. En este sentido, se reforzaron y reivindicaron sus valores, en especial el referente a la procuración de la justicia social y del papel que jugaba el Estado como rector de la economía y de un proyecto de desarrollo de nación independiente. Se hizo referencia a la implementación de reformas económicas con sentido social –se hizo una promesa formal de redistribuir la riqueza- reconociendo la necesidad de lograr una mayor eficiencia y racionalidad en el aparato económico y productivo. Se inició una renovación de los cuadros de la burocracia política, así como de los aparatos institucionales e ideológicos del Estado, incorporando a varios sectores que participaron en el movimiento del 68 –ello con el objeto de reconciliarse con las capas medias, el sector intelectual y el sector estudiantil-.

Asimismo, se prometió hacer mayor énfasis en la solución de los problemas del campo, combinando la utilización óptima de la fuerza de trabajo campesina y la tierra con el reparto agrario, ello con el objeto de aumentar la productividad de ese sector. El presidente

Echeverría, además retomó un discurso "populista" en el cual aparentemente se enfrentaba a los capitalistas mexicanos "reprochándoles su desmedido afán de lucro, la pérdida de nacionalismo y su falta de visión para atender el pacto con los trabajadores, la sociedad y el Estado" (Saldívar, 1982; 158). Se refirió a las inversiones extranjeras como "bienvenidas", siempre y cuando colaborasen "con los objetivos del desarrollo nacional y [cumpliesen] con lo que se fijaba como prioridad para el capital nacional: modernizarse y producir para exportar", mientras que les prometió, al mismo tiempo, no manejar una "mentalidad expropiatoria" (*Idem*).

Para demostrar que estaba a favor de la "apertura democrática" emprendió tres reformas electorales y habló de la necesidad/conveniencia de democratizar la vida interna de los sindicatos, "removiendo la vieja dirección burocrática corrupta", buscando "en apariencia, la sustitución de aquella por otro liderazgo obrero más afín al proyecto modernizante y reformista del régimen" (*Ibid*; 159). En fin, se buscó la manera de renovar los mecanismos de cooptación que permitieran atraer a aquellos elementos que pudiesen coincidir en sus afanes de apertura política, y llevar a cabo la formación de un movimiento más difícil de manejar.

Y es que en realidad la situación político-social del país era adversa para el gobierno. En todos lados se estaban percibiendo brotes de descontento, algunos de los cuales se pudieron concretar en la formación de organizaciones o movimientos más o menos estructurados. Entre los sectores que mejor se pudieron organizar estuvieron: el obrero, el campesino, el popular y el empresarial. Alrededor de ellos, gradualmente, se fueron ubicando otros con menor organicidad. Asimismo, la formación de estos movimientos y organizaciones, se conjugó con una serie de acciones de la más diversa índole, como los atentados terroristas —que se realizaban, en su mayoría, en contra de eminentes empresarios—, lo cual puso en evidencia el malestar social en cuanto al rumbo que el país estaba tomando. Tanto las acciones aisladas y mal organizadas como los movimientos un poco más estructurados, tendieron a corroer las bases de legitimidad del sistema y a crear en las demás capas una mayor conciencia. Aunque, cabe mencionar, ello se dio gradualmente. Todavía hasta la década de 1980, una proporción importante de la sociedad, aún le era fiel. Éste, a pesar de todo, durante prácticamente todo su periodo pudo mantener grados de legitimidad bastante aceptables, hasta que las condiciones que le permitieron mantenerse en la posición hegemónica se vieron fuertemente afectadas, en especial cuando devino una tremenda crisis económica.

Los problemas con el sector obrero surgieron a raíz de la terrible subordinación de los trabajadores a las organizaciones que supuestamente deberían defenderlos y representarlos: los sindicatos. Los sindicatos oficiales obreros habían sido una de las principales bases de poder del gobierno posrevolucionario –en especial la CTM, la CROC, la CROM, la FSTSE, la CNOP y la CNC-. De hecho, desde los tiempos del General Lázaro Cárdenas, fueron utilizados con holgura y gran éxito como agentes de presión ante cualquier sector que le hiciera mella –el sector privado, los grupos de izquierda o los sindicalistas independientes- o como agentes de movilización y apoyo para llevar a cabo sus políticas. Su apoyo se demostraba, por lo general, a través de la organización de grandes manifestaciones masivas, que tenían como objeto, por un lado, demostrar el gran poder de convocatoria que poseía el gobierno y por lo tanto legitimidad, mientras que por otro, reavivar la adhesión y sentido de pertenencia de los miembros trabajadores al sistema partido-gobierno-Estado⁹. Su organización asimismo, era demasiado jerárquica, autoritaria y burocrática¹⁰. No permitía la participación directa de sus miembros en la toma de decisiones –éstas se tomaban y dictaban desde la cúspide-, ni mucho menos disidencias. En palabras de Américo Saldívar:

Las centrales oficiales y la propia burocracia política sólo aceptaban aquella participación que se sujetaba a las reglas de juego que ellas mismas imponían. En las movilizaciones auspiciadas por las centrales paragubernamentales, las masas obreras no son aceptadas como fuerzas activas de cambio sino solamente como factores pasivos de movilización y manipulación (*Ibid.*, 215).

En la década de 1970, las luchas por tratar de romper con este tipo de prácticas registraron un importante repunte. Tanto desde dentro como desde fuera, comenzaron a reavivarse las voces que clamaban por poner en marcha formas de participación alternativas, que les permitieran a los trabajadores presentar un frente más unido en contra del “charrismo” y todo mecanismo de cooptación y corporativización; a la vez que en defensa, por un lado, de sus intereses económicos y gremiales, y por otro, de la democratización de sus organizaciones.

Varios movimientos empezaron a surgir en regiones como Chihuahua, Puebla, San Luis Potosí, Zacatecas o el Distrito Federal. Las luchas se dieron, en especial, en los sindicatos que estaban bajo el control gubernamental, aunque también se observó la insurgencia de un sindicalismo independiente. Entre los sectores que encabezaban este proceso se encontraban:

⁹ Uno de los principales actos de adhesión al gobierno por parte de los trabajadores lo constituía la tradicional marcha del 1° de mayo.

¹⁰ “[En] el trato con las organizaciones obreras, campesinas y de clases medias: la negociación de demandas se lleva a cabo al nivel de dirigentes y sin saltar por ningún concepto los marcos institucionales establecidos” (Córdova, *op. cit.*; 43).

los trabajadores ferrocarrileros –que decidieron tomar los locales sindicales como protesta frente a los fraudes electorales en su organización-; los electricistas –que, encabezados por la Tendencia Democrática, salieron en defensa de sus contratos colectivos-; los universitarios¹¹, telefonistas; algunas secciones del Sindicato de Mineros y Metalúrgicos; los maestros y los trabajadores pertenecientes a la industria automotriz –cuyo movimiento, en su mayoría (la mitad de sus sindicatos) estaba buscando desentenderse de la CTM-.

Para estas fechas, los movimientos obrero sindicales estaban tomando cinco vertientes: la primera se desarrolló a partir de 1971 y estuvo encabezada y representada por la Tendencia Democrática de los electricistas del STERM –posteriormente SUTERM-. La segunda fue la protagonizada por los sindicatos universitarios, especialmente por los de la UNAM, la UAM y la Universidad de Nuevo León –los cuales más tarde, en 1976, se unieron para formar la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios, “que llega a agrupar veinte organizaciones de trabajadores universitarios por todo el país” (*Ibid.*; 216)-. Una tercera constituida por agrupaciones gremiales más pequeñas, dispersas y heterogéneas, las cuales “confluyen en el torrente del sindicalismo independiente y anticharro” (*Idem*). Una cuarta, ampliamente mayoritaria, que se encontraba representada por las organizaciones paragubernamentales anteriormente mencionadas. Y una quinta que agrupaba los sindicatos blancos, es decir aquellos patrocinados por los mismos dueños del capital¹². Como puede deducirse, de las primeras tres corrientes surgieron los reclamos y descontentos que, a grandes rasgos, giraban en torno a reivindicaciones económicas y a luchar por una participación más autónoma en las decisiones sindicales. Las otras dos vertientes, que constituían la mayoría, sirvieron como contrapeso y grupos de presión.

Como mencionamos anteriormente, el nuevo gobierno con el afán de recuperar legitimidad y parcelas de poder, se dio a la tarea de manejar un discurso tendiente a apoyar la apertura y democratización de los sindicatos. Sin embargo, ante la fuerte presión ejercida por parte de los líderes charros –encabezada por la CTM-, sus promesas fueron olvidadas, y de hecho, la coerción tomó su lugar. En la práctica, se continuó impulsando una política de restringir el derecho a huelga y de reprimir con severidad –haciendo uso de grupos paramilitares, policíacos y militares- las acciones y manifestaciones independientes. Ello, claro está, una vez

¹¹ Durante esta década comenzó, en prácticamente todas las instituciones educativas superiores, la organización de sus trabajadores en sindicatos.

¹² Esta vertiente se encontraba agrupada en torno al Grupo Monterrey y controlaba más de 250 mil trabajadores industriales.

que los métodos de cooptación, control, corrupción o negociación no surtieron efecto. Se reprimieron huelgas, por ejemplo, en empresas como la General Motors, General Electric y Kelvinator, en 1972. En 1971 en Ayotla Textil. En febrero de 1974 se mandó asesinar a E. Calderón, asesor jurídico sindical de los obreros de la construcción y choferes de Yucatán. En 1976 el ejército ocupó las centrales eléctricas de los integrantes de la Tendencia Democrática del SUTERM, liquidando su huelga. Mientras que en 1977 la policía intervino en Ciudad Universitaria para aplastar la huelga del STUNAM.

Las medidas tomadas por el gobierno y secundadas por los empresarios, aunado a que las acciones por parte de los "insurgentes sindicales" se mostraron dispersas y faltas de organicidad —a pesar de ser importantes en cuestión de números¹³—, derivaron en el debilitamiento del movimiento para finales de la década. Y los avances que se registraron fueron pocos en comparación con los sectores que siguieron viviendo bajo el "yugo" de los principales líderes sindicales.

Otro de los focos donde surgieron conatos de movilización y descontento, fue el campo, pilar fundamental del sistema. Al igual que el movimiento obrero, el campesino sufrió en la década de 1970 una especie de "despertar" que lo llevó a desplegar una verdadera lucha de clases en la cual no sólo se organizó a partir del reparto de tierras, sino a partir de nuevas reivindicaciones que contemplaban: la democracia política, la organización cooperativista y la sindicalización. La crisis de producción en el agro propiciada por el mismo despliegue del modelo de acumulación y la inoperancia de la política agraria, habrían de ser los detonantes de esta lucha en la cual participaron más de un millón de campesinos, comuneros y jornaleros, de *prácticamente todas las regiones del país*. Porque, en efecto, hubo un desplazamiento geográfico a partir del cual las luchas campesinas se propagaron de las zonas más marginadas y menos desarrolladas, hacia zonas de agricultura capitalista intensiva y sumamente tecnificada como Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit y Baja California (*Ibid.*; 222). Entre algunas de las acciones que desplegaron como formas de presión estuvieron: marchas, invasiones de tierras, ocupación de delegaciones agrarias, destitución de presidentes municipales y el desconocimiento de asambleas ejidales.

¹³ De 1973 a 1974, por ejemplo, se realizaron más de 2 mil huelgas, ello por conceptos que iban desde demandas por aumentos salariales hasta el desconocimiento de las direcciones corruptas, en tanto que de 1975 a 1980 se realizaron 4 mil. Al mismo tiempo, el número de los emplazamientos a huelga se incrementaron de 1 600 en 1971, a 2 215 en 1974 y de 4 013 en 1975 a 5 mil en 1976 (*Ibid.*; 215).

Ante esta situación el gobierno decidió llevar a cabo varias reformas. La primera acción que emprendió fue el decretar en 1971, la Nueva Ley Federal de Reforma Agraria, mediante la cual pretendía acabar con los problemas de propiedad; fortalecer el ejido, la pequeña propiedad y la propiedad comunal; continuar con la dotación de tierras; elevar la productividad, impulsar la colectivización ejidal, a la vez que reforzar el control vertical del sector a través de las asambleas. También decretó la Ley Federal de Aguas, con el propósito de corregir el acaparamiento de tierras de riego. Creó la Secretaría de la Reforma Agraria -antes Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización- y fusionó dos bancos: el Banco Nacional Agropecuario y el Banco Nacional de Crédito Ejidal, para crear el Banco Nacional de Fomento Ejidal, el cual se encargaría de dar impulso a las unidades de carácter colectivo mediante la dotación de créditos. Igualmente se elevaron los precios de garantía, aumentó la intervención estatal en los mecanismos de distribución y comercialización de los productos agropecuarios; aumentó la protección y fomento a la producción artesanal; y, en 1973, se diseñó el Plan Maestro de Organización y Capacitación Campesina, a través del cual se pretendía capacitar al campesino, al ejidatario y al comunero en la producción colectiva. A su vez, como parte de una estrategia de recuperar la legitimidad perdida, de perfeccionar los mecanismos de control gubernamental y encauzar las protestas campesinas a través de las organizaciones oficiales, se creó el Congreso Permanente Agrario y después el Pacto Ocampo.

Todas estas medidas, sin embargo, no dieron resultado. El sector siguió el camino de la crisis -que aún hoy, 2003, no supera-, y de hecho a partir de 1973 comenzamos a importar cada vez más productos, aún aquellos de los cuales éramos autosuficientes. Para 1977 no existían más de un millar de unidades agrícolas funcionando de manera colectiva, y de las seiscientas empresas ejidales creadas y patrocinadas por las entidades gubernamentales, 450 fueron declaradas en quiebra, "con varios de miles de millones de pesos perdidos" (*Idem*). En gran parte el fracaso de las medidas gubernamentales se puede explicar por su falta de organicidad, coherencia, seguimiento y su alta tendencia a caer en la corrupción y funcionar como mecanismos de control, cooptación y chantaje. Aún así, logró contener por un buen tiempo los descontentos de este sector, haciendo uso de su capacidad de mover y repartir recursos, de corromper y cooptar a los líderes de los movimientos, o simplemente de ejercer la fuerza física -desapareciendo a los disidentes- sin mayores repercusiones políticas o sociales.

A la par, surgieron diferentes movilizaciones más pequeñas y aisladas, en estados, por ejemplo, como Chihuahua, Oaxaca, Nuevo León, Guerrero y Puebla. El gobierno, por su parte,

entre más intolerancia mostraba, más violencia desataba. Lo anterior se demostró en el surgimiento de varios grupos armados, guerrilleros y terroristas, que cobraron especial auge entre 1970 y 1972. Los cuales, sin embargo, sería eficazmente exterminados para 1976, con la ayuda de grupos paramilitares como las boinas rojas de Netzahualcóyotl, los halcones, las guardias blancas, etcétera.

La proliferación de intelectuales y universidades independientes, de orientación democrática y revolucionaria, también se observó. Se empezaron a editar un sin fin de libros, artículos y ensayos desde los cuales se buscaba dar una interpretación a la realidad mexicana desde una postura no oficialista; entre otras destacaban obras como: *La ideología de la revolución mexicana*, y *La formación del poder político en México* de Arnaldo Córdova; *México, riqueza y miseria*, y *La oligarquía, burguesía y Estado*, de A. Aguilar y F. Carmona; *México en la órbita imperial*, de José Luis Ceceña; *Historia del capitalismo* de Enrique Semo; *El socialismo en México, siglo XIX*, de García Cantú; *Caciquismo y poder político en el México rural*; *Desarrollo del capitalismo en México*, de S. de la Peña; *México hoy*; o *La democracia en México* de González Casanova. Y desde universidades como la de Puebla, Sinaloa o Guerrero, se llevó a cabo toda una lucha por sacar adelante las reformas universitarias que buscarían orientar la educación con un sentido popular y democrático.

Por otra parte, entre otro de los efectos de la crisis y el vacío de legitimidad en que se había caído a finales de la década de 1960, destacaba el abstencionismo electoral: para las elecciones de 1970 superaba el 40% del total. Según Saldívar, “este porcentaje era superior en puntos al número de abstenciones registradas en las elecciones presidenciales de 1958 y 1964, que fue del 34 y 30.6%, respectivamente. Ello no obstante que para estas elecciones por vez primera votaban los jóvenes de 18 años” (*Ibid*), 176). De la misma manera se observó el incremento de la formación de partidos alternos —aunque, claro está, en su mayoría fuera de la legalidad—. Para contrarrestar esto, a principios de 1973 el gobierno emitió una nueva reforma a la Ley Federal Electoral, a partir de la cual pretendía flexibilizar las reglas para el acceso de otros partidos a la contienda política oficial.

Hasta 1978, sin embargo, ningún partido logró obtener su registro. Incluso a partir del año de la publicación de la nueva reforma electoral, se observó un declive de los partidos tradicionales registrados; el aumento del llamado de acciones de protesta por parte de partidos “disidentes” —desde 1969, por ejemplo, el Partido Comunista hacía llamados a la abstención activa “ante el fraude electoral, la inoperancia del sistema vigente de partidos y la ausencia de

garantías políticas para la oposición real no registrada" (*Idem*); así como el surgimiento de nuevas organizaciones políticas y varios intentos por parte de la izquierda de organizarse y armar un movimiento más unido y coherente.

Los magros resultados registrados frente a la reforma electoral de 1973, la crisis que sufrían los partidos oficiales, y el ininterrumpido ascenso y desarrollo de agrupaciones y partidos alternos, hizo que el gobierno de López Portillo, llevara a cabo otra reforma en 1977, mediante la cual se creó "un sistema mixto de representación mayoritaria y proporcional, con 300 diputados de mayoría y cien electos por representación proporcional de aquellos partidos de voto minoritario" (*Ibid*; 180). Así como la modalidad de registro condicionado –a la obtención de 1.5% de la votación total de la elección en la que se participe-, por medio de la cual los ciudadanos sin partido pudieron participar en la contienda electoral. Para 1978, además de los cuatro partidos oficiales tradicionales: el PRI, PAN, PPS y PARM, otros tres lograron su registro: el PCM –Partido Comunista Mexicano-, el PDM –Partido Demócrata Mexicano- y el PST –Partido Socialista de los Trabajadores-. Para finales de la década el número ascendía a once.

Sin embargo, el malestar social no sólo provenía de lo que podemos llamar grupos de izquierda, también se encontraban en grupos más ligados a la derecha como la Iglesia, los empresarios, las capas medias ilustradas y el PAN.

Como resultado del proceso de industrialización, surgió una nueva capa media ilustrada, compuesta por profesionistas, pequeños empresarios y trabajadores por cuenta propia de muy diversa especialización. Esta capa media, con el tiempo fue quedando excluida del sistema de repartición de privilegios característica del régimen posrevolucionario, así como de su discurso, de tal manera que "el acotamiento de las posibilidades de ascenso económico desde abajo generadas por la monopolización y burocratización" (Rivera, 1992: 36), aunada a su poca identificación con el grupo gobernante, condujo a su radicalización y a la búsqueda de otras alternativas como el PAN. El PAN y la Iglesia concordaban con las clases medias en cuanto a que el Estado intervenía de manera "abusiva" en el control de la vida social, y en cuanto a su visión anticomunista. Los empresarios, por su parte, a pesar de ser los beneficiarios directos de la política estatal criticaban, además, su manera de intervenir en la economía. Por parte de la derecha también hubo un gran descontento y a la postre la organización de un movimiento conservador más general capaz de poner en serio peligro la legitimidad y estabilidad del sistema, como lo veremos en el siguiente capítulo.

El descontento social, como hemos observado, se tradujo en la implementación de varias reformas que tuvieron como principal objetivo mantener el control sobre la población y el desarrollo de la vida nacional por parte de la fracción dirigente –que llamaremos a grandes rasgos, *corporativista*-. Conforme iban apareciendo nuevos problemas y contradicciones, se ponían en marcha todos los mecanismos posibles para seguir manteniendo grados aceptables de legitimidad y gobernabilidad; mecanismos que en gran parte se basaban en la mediatización de las reivindicaciones sociales –en el otorgamiento de concesiones políticas o económicas- y en la búsqueda del consenso pasivo –basado en la obediencia jerárquica y burocratizada de las bases, a cambio de tales concesiones-. Estos mecanismos, los cuales se iban reforzando conforme el Estado mostraba cada vez con mayor evidencia su incapacidad de llevar a cabo una verdadera reforma estructural, sin embargo, con el tiempo tendieron a agotarse, en especial a partir del advenimiento de una tremenda crisis económica en 1982. Esta crisis, como veremos, tuvo un importante impacto en el sistema global mexicano, ya que constituyó un momento de coyuntura en el cual pudo jugarse el malestar de toda la sociedad mexicana en contra del Estado, y la incapacidad de éste para hacer frente a un nuevo contexto.

Capítulo 4

La crisis económica de 1982

En 1982 México sorprendió al mundo entero al desatarse una tremenda crisis económica que provocó, en el exterior, una situación de emergencia financiera –al amenazar con suspender el pago de su deuda-, mientras que en el interior, la exacerbación de los descontentos sociales y el reacomodo de las fuerzas políticas. Esta crisis, que sobrevino justo después de experimentar el mayor auge económico que el país hubiera conocido antes –de 1978 a 1982 se registró un crecimiento mayor al 8% anual (Dresser, 1996; 212)-, se conjugó con un ambiente internacional poco propicio, pues como mencionamos anteriormente, las principales economías capitalistas pasaban por momentos de crisis y reestructuración.

Anteriormente, el país había podido sortear las crisis que ya resultaban recurrentes, haciendo uso de una amplia intervención estatal, lo cual se hacía posible gracias a la facilidad de obtener recursos por medio de préstamos en el extranjero –que por lo regular se negociaban con pagos a largo plazo y tasas de interés muy bajas o prácticamente nulas-, y, a partir de la década de 1970, con los abundantes recursos provenientes de la explotación del petróleo. Esta vez, sin embargo, las condiciones tanto en el interior como en el exterior eran muy diferentes: las tasas de interés habían subido, con lo que la deuda externa se multiplicó impresionantemente –hasta llegar a 90 mil millones de dólares-, el déficit presupuestal llegaba a niveles cercanos al 20%, los precios del petróleo se encontraban a la baja; los capitales se fugaban en bandadas al exterior y, por si fuera poco, esta situación impedía seguir utilizando el financiamiento externo como mecanismo corrector de los desequilibrios que ya eran estructurales.

El país se encontraba prácticamente en la quiebra y ante ello, el Estado se vía impotente. Si anteriormente la presencia de problemas en el funcionamiento del patrón de acumulación pudo ser sorteada y su tratamiento postergado, ahora se tomaba casi imposible, por lo que se hizo urgente llevar a cabo cambios a fondo.

Veamos a grandes rasgos, las principales características del patrón de acumulación vigente en el país, ello con el objeto de rastrear las posibles causas de su crisis.

México y el patrón de acumulación basado en la sustitución de importaciones

Hasta ese momento –y desde finales de la década de 1930 aproximadamente– México, al igual que la mayoría de los países de América Latina, había seguido un patrón de acumulación basado en la industrialización sustitutiva de importaciones –PAISI-. A grandes rasgos, la idea principal del PAISI, consistía en desplazar el eje de acumulación del sector primario exportador –herencia de la colonia-, a la industria. El plan consistía en dividir ese proceso en etapas debido al bajo nivel de desarrollo tecnológico y al alto grado de dependencia y fragmentación económica que nos caracterizaba. El desarrollo industrial debía partir de la promoción de actividades relativamente sencillas, fáciles de sustituir, como la producción de bienes de consumo no duraderos, para continuar con actividades más complejas, de difícil sustitución como los bienes de consumo duradero y bienes intermedios, hasta poder alcanzar la producción de bienes de capital¹.

Desde la década de 1930 y durante 1940, México comenzó a erigir las bases institucionales sobre las cuales iba a descansar el futuro proceso de industrialización, decretando leyes pertinentes –por ejemplo la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias en 1930 o la Ley del Trabajo en 1934- así como las instancias necesarias –la Nacional Financiera entre muchas otras-.

Para los años cuarenta y cincuenta, el país atravesaba la primera fase apoyándose principalmente en el empresariado nacional² y en un importante impulso a la producción y expansión agrícola, a través de la inversión pública y la ampliación de la reforma agraria. En

¹ La aplicación de este tipo de patrón de acumulación pudo darse en gran parte gracias al estallido de la Segunda Guerra Mundial, ya que durante el conflicto países como Estados Unidos registraron una baja en la producción –y por lo tanto exportación- de bienes de consumo, para concentrarse en la de armamentos. Ello benefició a los países latinoamericanos en cuanto la demanda internacional de productos primarios se incrementó y el flujo de capitales hacia la región fue lo suficientemente importante como para permitir el financiamiento de inversiones productivas, que satisficieran tanto las necesidades de un creciente mercado interno, como las de un mercado externo.

² Durante la primera etapa, el desarrollo de la industrialización fue impulsado por pequeñas empresas artesanales, por fábricas de cooperación simples y de manufacturas, así como –aunque en menor medida- por unidades de producción que operaban sobre la base de la mecanización y de una división del trabajo más o menos amplia (Rivera, 1986; 22)

esta primera etapa el sector agrícola jugó un papel primordial, al posibilitar el financiamiento del desarrollo industrial ya que de aquí provenían, en su mayoría, las grandes cantidades de excedentes que pudieron ser canalizados tanto al mercado interior como al exterior³. Y, al mismo tiempo, al ayudar a conformar el moderno proletariado industrial, como resultado de la paulatina monetarización de las relaciones económicas del campo y de la expulsión de la población "excedente" de dicho sector.

El proletariado fue constituyéndose, con el tiempo, en uno de los factores dinamizantes más importantes de la economía al convertirse, por su peso numérico, en la base de la expansión de la demanda efectiva. El aumento de la demanda efectiva, asimismo, influyó en el incremento de la inversión, que fue canalizada a desarrollar nuevos sectores productivos orientados principalmente a satisfacer las necesidades de esta creciente población asalariada, tanto urbana como rural. El consumo de autosuficiencia, tan marcado por estas fechas, poco a poco fue dando paso a un consumo mercantil⁴, y poco a poco los procesos productivos fueron adoptando métodos más modernos, aunque este proceso tuvo un papel relativamente secundario. El sector público, en ese momento, concentró sus esfuerzos en proporcionar infraestructura general y financiamiento al desarrollo, obteniendo recursos principalmente de los impuestos provenientes tanto de las exportaciones como de las importaciones.

La implementación de esta primera etapa, que se apoyó principalmente en la producción de bienes de sencilla fabricación, en su mayoría orientados a conformar la canasta salarial básica -textiles, alimentos, implementos para la vivienda, etcétera-, fue del todo exitosa: se entró en un periodo de rápido crecimiento, con un aumento sostenido del empleo asalariado, de los salarios reales y de los niveles de consumo. Asimismo, las tasas de inversión, de acumulación y de ganancia se elevaron impresionantemente (ver Rivera, 1986; 22)⁵, permitiendo, por un

³ En esta etapa el país se articuló exitosamente al mercado internacional, exportando bienes primarios, principalmente agrícolas y minerales, lo cual le permitió financiar las crecientes importaciones de bienes de capital.

⁴ En 1940, por ejemplo, del total de la producción agrícola, el 47% se destinaba al autoconsumo, mientras que para 1950 esa proporción había bajado al 18% (*Ibid*; 21).

⁵ Ello pudo darse gracias a la conjunción de varios factores. Rivera Ríos lo explica de la siguiente manera: "Los bajos salarios que eran la norma en esta fase -recordemos que los salarios industriales cayeron en un 20% entre 1940 y 1950-, más los requerimientos comparativamente bajos de calificación de la fuerza de trabajo, determinaron que la mano de obra de origen campesino fuera una fuente de valoración ampliamente aprovechable para el capital, conjuntamente con el hecho de que la mayor parte de los requerimientos de la industria se satisfacían con materias primas de origen nacional, abastecidas a precios competitivos por el auge agrícola que vivía el país en esos años; lo anterior determinó que la tasa de ganancia se situara, en los años cuarenta, en lo que probablemente es su

lado, la ampliación numérica de las capas burguesas, y la expansión de las relaciones capitalistas de producción como el modelo imperante.

Para la década de 1960, las condiciones materiales que permitieron al país mantenerse a partir de una industrialización liviana y de fácil sustitución de importaciones, ya se habían agotado. En efecto, en primer lugar, la demanda internacional de productos agrícolas disminuyó, lo que afectó negativamente el dinamismo de los ingresos provenientes de las exportaciones; en tanto que el sector primario interno a su vez perdió fuerza ya que se comenzó a dejar a la deriva, y los esfuerzos gubernamentales se concentraron, en cambio, en la industria⁶.

Y en segundo, los sistemas maquinizados se impusieron sobre la producción de tipo artesanal, “de tal manera que la producción semiartesanal y de pequeña empresa [que había sido la base del impulso anterior] fue quedando confinada a las ramas más atrasadas de la industria o pasó a desempeñar un papel secundario al lado de la gran empresa industrial” (*Ibid*; 23). El motor de acumulación, por lo tanto, pasó a depender más del abatimiento de los costos de reproducción del capital, tanto de los medios de producción como de los medios de vida, que de la explotación del trabajo directo. Al contar con una base tan pobre para producir los medios de producción, México tuvo que destinar cada vez más recursos a su importación, con lo cual, si tomamos en cuenta la falta de divisas suficientes provenientes de las exportaciones, se agravó aún más el déficit comercial⁷.

Con el tiempo, nuestro país mostró una incapacidad de crear una base tecnológica fuerte, agravando una situación en la cual: “la sustitución se convirtió en el cambio de unas

máximo nivel histórico” (*Ibid*; 22). A lo que se agrega el importante proteccionismo y apoyo –por ejemplo, a través de subsidios– que el Estado ofreció a las capas burguesas.

⁶ Para la década de 1960 se comenzó a presentar un proceso de descapitalización y estancamiento en el campo debido, entre otras cosas, a que la mayor parte de los subsidios se destinaron a la industria –arguyendo que el agro no era rentable–, y a que varios países centrales –una vez recuperados de la secuela destructiva de la guerra– empezaron a elevar su producción –al aumentar su producción aumentaron los circulantes en el mercado internacional, provocando una baja en los precios– (Rosa María Larroa, “El sector rural, la soberanía alimentaria y los movimientos sociales en América Latina”, conferencia dictada el 10 de abril de 2002). A partir de entonces, el sector dejó de jugar un papel importante en las exportaciones para limitarse a producir para el consumo nacional. Sin embargo, esta producción se enfocó a la elaboración de los insumos que reclamaba la industria de alimentos y a la ganadería, con lo que se desatendió la elaboración de productos básicos. Ello derivó en la necesidad de importar productos que antes podíamos producir, como nuestros propios alimentos.

⁷ “México era un exportador especializado en bienes primarios de escaso grado de elaboración, en tanto que importaba, en proporciones cada vez mayores, productos industriales, principalmente medios de producción. En estas condiciones, el equilibrio comercial tradicional quedó roto, abriéndose una tendencia hacia crecientes déficits, que [...] jugaron un papel en las grandes contradicciones económicas de fines de los años sesenta” (*Ibid*; 22).

importaciones –manufacturas finales- por otras más costosas –bienes intermedios y de capital-, sin que la industria fuera capaz de generar mediante exportaciones, las divisas que exigía su propia reproducción” (*Ibid*; 23). Frente a una situación como la descrita, los encargados de diseñar las políticas que habrían de guiar nuestro rumbo económico respondieron con un mayor intervencionismo estatal (ver cuadro 4.2⁸), *fincado en un mayor endeudamiento externo*. Así, en vez de implementar las reformas estructurales necesarias para la superación de los problemas del PAISI, con ese tipo de medidas, tendieron a profundizar nuestras contradicciones, y a preparar un camino libre y directo hacia una crisis estructural.

Cuadro 4.2

Gasto público total como porcentaje del PIB

Año	%
1945	11
1960	16.7
1970	21.9
1975	36.4
1982	43.6

Fuente: Nacional Financiera, *La economía mexicana en cifras*. Varios números.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

En este modelo, la participación del Estado en la economía resultaba fundamental debido, especialmente, a la enorme dispersión de los factores productivos y a la falta de fuerza, cohesión y capacidad de liderar el proceso por parte de la clase capitalista. En un país dependiente como el nuestro, el Estado tuvo que abocarse a crear las condiciones de capitalización, ahorro e inversión necesarias para el adecuado desarrollo de la industria privada. Se dedicó pues, a proporcionar las garantías e instituciones necesarias para el funcionamiento de las empresas dentro de las leyes, promoviendo créditos, estableciendo incentivos para vigorizarlas, estimulando la inversión y protegiéndolas de cualquier competencia internacional que amenazara con dejarlas fuera de la jugada. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en un sistema caracterizado por:

⁸ Este cuadro se obtuvo de Guillén, 2000; 30.

La protección irrestricta del mercado interno y la creación de un amplio sistema de intervención y regulación estatal de tipo burocrático, fundado en un conjunto de instancias de acción directa, cohesionadas y sostenidas a su vez por un gasto público crecientemente apoyado en el crédito -deficitario- (Rivera, 1992; 25).

Durante la primera etapa, el Estado se dedicó exitosamente a subsidiar a las empresas por medio de la venta de materias primas e insumos a precios por debajo de su precio de costo o de su precio de producción; también por medio de la construcción de grandes obras de infraestructura, irrigación y comunicación; por medio de la creación de instituciones dedicadas a proporcionar educación y bienestar social a la población; o a través de imponer licencias de importación. Estos mecanismos, sin embargo, pronto comenzaron a mostrar sus límites conforme el modelo avanzaba de la sustitución fácil a la difícil:

Sin embargo, de la misma manera que se agotó el efecto dinámico de la reforma agraria y se manifestó con más fuerza su incidencia negativa en la acumulación de capital, las restantes fuentes de dinamismo propias de esta modalidad o vía capitalista tendieron a agotarse o a mermar su efecto. Este es sobre todo el caso de las actividades tradicionales de la intervención y regulación estatales, preponderantemente generadoras de déficit, que provocaron una crisis crónica, convertida posteriormente en crisis financiera. [Mientras que] El sobreproteccionismo, al hacer permanente la situación de mercado cautivo, retardó el crecimiento de la productividad del trabajo y desalentó la innovación de la industria mexicana (*Ibid*; 27).

Con respecto a la primera etapa, esos mecanismos fueron de vital importancia, pero habiendo ya dado buenos resultados -propiciando procesos esperados⁹-, tenían que sentarse las bases para el advenimiento de la siguiente fase, en lógica y requerimientos, diferente. Lo cual no se dio. Incluso, el sistema mexicano siguió trabajando sobre prácticamente las mismas bases con que inició su proceso de industrialización. Con ello,

La apertura de la nueva fase, hecho plenamente observable en los años sesenta, tendió a verse ulteriormente obstaculizada por la inadecuación entre los requerimientos objetivos de la acumulación de capital y la vigencia de las estrategias de promoción del desarrollo constituida desde los años cuarenta (*Ibid*, 28).

Lo anterior tendió a sentar las bases para una futura crisis, que sin embargo pudo ser postergada gracias al endeudamiento externo y, a partir de la década de los setenta, de la explotación del petróleo (*Idem*).

⁹ Hasta ese momento, había sido exitoso en cuanto comenzó a sentar las bases de la acumulación nacional en la industria; había comenzado a cambiar de manera sustantiva la estructura social y espacial del país al aumentar el peso de los trabajadores asalariados y de las capas medias, al mismo tiempo que estaba dando paso a un acelerado proceso de urbanización; estaba generando un fin de empleos; los ingresos salariales estaban subiendo; se estaba avanzando en la producción de bienes intermedios y una capa capitalista nacional comenzaba a repuntar.

Para principios de la década de 1970, las dificultades para proseguir con nuestro modelo de sustitución de importaciones se hacían más evidentes. La economía comenzó a desacelerarse, el PIB sólo creció 3.1% –es decir, la mitad de lo que creció durante la década previa: 6.5%–; los niveles de empleo y subempleo habían aumentado considerablemente; la inversión privada se contrajo; la inflación se agudizó –alcanzando después de 1973 más de dos dígitos: “el incremento anual de los precios al consumidor pasó de 5.2% en 1971 a 15.8% en 1976” (Guillén, *op. cit.*; 28); el déficit fiscal público ya era grave al igual que el endeudamiento externo –el cual a su vez incidía en el crecimiento del déficit en cuanto se tenían que transferir importantes cantidades a su pago- y las tasas de acumulación, ganancia y rentabilidad del capital habían disminuido –esto en gran parte como consecuencia del crecimiento de la composición orgánica del capital- (ver Rivera, *op. cit.*; 23).

Desde el gobierno se buscó implementar un conjunto de reformas tendientes a enfrentar las contradicciones del sistema. Se pensó en llevar a cabo una reforma fiscal redistributiva y una reforma impositiva; ajustar los precios y tarifas de los bienes y servicios producidos por el sector paraestatal; así como disminuir el endeudamiento externo a través de la promoción de las exportaciones, principalmente manufactureras –ello “con el objeto de atenuar el sesgo antiexportador del modelo y los déficit comercial y presupuestal” (*Idem*)-, limitar la entrada de capitales extranjeros y racionalizar el funcionamiento del aparato económico productivo.

Para impulsar las exportaciones se creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y se reforzaron las tareas de promoción comercial, en tanto que en materia fiscal se ajustaron algunas tarifas y se elevaron los impuestos a algunos productos. Sin embargo, mayores medidas no pudieron ser llevadas a cabo debido, en gran parte, a la resistencia del sector empresarial con el cual el gobierno comenzó a tener conflictos, en especial por su tendencia a tratar de recuperar sus bases sociales por medio de la aplicación de medidas de corte “populista” –aumento del gasto público en cuestiones sociales-.

En efecto, Luis Echeverría, en cambio, a pesar de demostrar una actitud favorable hacia ellos –optando por el endeudamiento masivo como vía de financiamiento del creciente gasto público, en vez de subir las cargas fiscales; y promoviendo leyes que habrían de beneficiar su proceso de acumulación, como lo vimos anteriormente-, comenzó a generar desconfianza y un alejamiento de las capas empresariales, aún desde su campaña, ya que desde aquí tendió a asumir una actitud que los empresarios calificaban de demasiado radical y populista, en especial por considerar que toleraba demasiado los conatos de sindicalismo independiente; por

apoyar las demandas obreras de incrementar los salarios, el proyecto de control de precios y la ley de protección al consumidor, así como por incluir en su gobierno a varios líderes e intelectuales del movimiento del 68.

Hasta antes de 1973, no había ocurrido ninguna confrontación directa entre los sectores privado y estatal, empero, la promulgación de la Ley de regulación de nuevas inversiones extranjeras y de transferencia de tecnología habría de alterar la tolerancia que existía entre ellos. Empezó principalmente por parte del gobierno de Estados Unidos quien, a través de su embajador Robert McBride, cuestionó dicha ley por considerar que vulneraba sus intereses. El embajador, aprovechando su descontento, se puso en contacto con la iniciativa privada nacional para iniciar una campaña que denunciaría estos hechos, preparando un boicot en defensa de la "libre empresa" (Basáñez, 1991; 54).

Los empresarios nacionales y extranjeros comenzaron así a organizarse y a unificar sus fuerzas, las cuales girarían en torno a la realización de tres acciones. La primera consistió en organizar a nivel nacional una huelga para detener la acción de las autoridades agrarias en Sinaloa y Sonora, las cuales estaban por nacionalizar los ingenios azucareros y expropiar varias tierras privadas como producto de la implementación de la nueva reforma agraria. Ello era considerado como un verdadero "ataque a la libre empresa y una desviación hacia el comunismo" (*Idem*). Este llamado, sin embargo, resultó ser todo un fracaso y un hecho esclarecedor en cuanto demostró que su fuerza política y su capacidad de convocatoria eran muy pobres. Los empresarios sólo pudieron detener las acciones agrarias por un año más: fue hasta 1976 que varias propiedades privadas fueron invadidas por ejidatarios, quienes tuvieron el respaldo del gobierno.

La segunda acción consistió en contraer las inversiones extranjeras en México, arguyendo que el país no representaba un lugar atractivo y seguro -con ello se sucederían las fugas de capital-. Y la tercera, en llevar a cabo una campaña para incrementar la afiliación a las organizaciones empresariales, y así reforzar la unidad entre los diversos segmentos del empresariado.

Debido a la fuerte reacción del grupo empresarial, por tanto, a mitad del sexenio se abandonaron los empeños reformistas, y se decidió seguir con el rumbo hasta ese momento tomado: aumentar el gasto público para amortiguar los desequilibrios descritos -de tal manera que como proporción del PIB se incrementó del 26% en 1970 al 35.2% en 1976-; y pedir más préstamos al exterior. El aumento del gasto público, aunado a la imposibilidad de elevar los

ingresos —gracias a la renuencia del capital de pagar más impuestos—, produjo el aumento del déficit presupuestal: en el mismo periodo del 5.6% pasó al 10.3% del PIB. Mientras que la deuda externa se triplicó: de deber 6 090 millones de dólares al inicio del sexenio, se debían 25 900 millones para 1976 (Guillén, *op. cit.*; 27).

Este tipo de política económica no cambió mucho con el advenimiento de un nuevo sexenio, esta vez presidido por José López Portillo —1976—, aun y cuando la situación de crisis era ya muy grave. En efecto, en el marco de la sucesión presidencial, debido al advenimiento de una nueva recesión económica, se llevó a cabo la firma del primer acuerdo de contingencia con el Fondo Monetario Internacional, en el cual México se comprometía a limitar su endeudamiento público, reducir el circulante, restringir el gasto público, fijar topes a los aumentos salariales, liberar el comercio exterior así como limitar el crecimiento y la intervención del aparato estatal en la economía. El descubrimiento de unos pozos petroleros en el sureste del país, sin embargo, permitió postergar el cumplimiento de estos acuerdos, y en cambio iniciar una nueva etapa de expansión estatal, apoyada igualmente por el endeudamiento externo.

De manera tal que la participación del gasto público con respecto al PIB, de representar el 35.2% en 1976, llegó a representar el 43.6% en 1982 —el nivel más alto desde el comienzo de la aplicación del PAISF—. La inversión pública como porcentaje del PIB, creció del 7.9% en 1975, al 12.9% en 1981. Mientras que la deuda externa, se triplicó: “en materia de deuda externa, durante el periodo 1976-1982 se contrataron recursos netos por más de 61 700 millones de dólares, 3.3 veces más de lo contratado por todas las administraciones anteriores” (*Ibid.*; 30. Las cursivas son mías).

Los abundantes recursos provenientes de los préstamos externos y de la explotación del petróleo¹⁰, permitieron que México experimentara uno de los periodos de bonanza más intenso de su historia: de 1978 a 1981, el crecimiento anual del PIB fue superior al 8%; para 1981 la inversión privada, que siempre se había mantenido a la saga, ya había rebasando a la estatal, de tal manera que la primera representó el 54.6% y la segunda el 45.5% del total de la inversión nacional; mientras que la ocupación también experimentó un aumento sustantivo, lo que contribuyó a paliar el deterioro de los ingresos reales de la población (*Ibid.*; 31).

¹⁰ Al respecto, “La economía mexicana se petrolizó con rapidez. La participación de la extracción y refinación de petróleo en el PIB pasó del 4% en 1975 al 7.2% en 1980. El petróleo crudo se convirtió en el principal rubro de exportación. [...] Como proporción de las exportaciones totales de mercancías, las ventas externas de hidrocarburos se incrementaron de un insignificante 0.8% del total en 1974 a 71.3% en 1981” (*Ibid.*; 31. Las cursivas son mías).

Este auge sin precedentes y la relativa distribución de los beneficios –tanto entre las capas empresariales como entre las capas populares-, tendieron a resanar, hasta cierto punto y por un periodo muy corto, las rupturas registradas años atrás. No obstante, por todo lo anotado anteriormente, el abusar de esa manera de los recursos sin llevar a cabo mayores reformas, habría de derivar en un fuerte deterioro de nuestras cuentas.

En gran parte, como se había dicho, el tipo de medidas que se aplicaron respondieron a necesidades/problemas políticos: el gobierno enfrentaba fuertes problemas de pérdida de legitimidad entre sus bases, al mismo tiempo que entre sus propias contrapartes dentro del bloque de poder: los empresarios privados.

El alejamiento de las bases populares durante un largo tiempo –dándole preferencia a la acumulación capitalista-, y la tendencia del Estado a convertirse en una instancia demasiado autoritaria y cerrada, la cual sólo vela en ellas elementos de control –que utilizaba contra sus contrincantes, contra sus propias bases y sus contrapartes en el bloque de poder, dependiendo de la correlación de fuerzas en turno- incentivó un descontento social generalizado que habría de estallar en varios movimientos y acciones disidentes, como lo vimos en el presente capítulo.

Mientras que la aplicación de medidas de corte “populista” –redistribución de la riqueza, reparto de tierras, mejoramiento en los niveles de bienestar social, intervención del Estado en la planeación del rumbo económico, etcétera- eran vistos por la capa empresarial como acciones que atacaban directamente sus intereses y niveles de lucro, por lo que igualmente reaccionaban con campañas de movilización social que tenían como fin desprestigiar la figura estatal y desestabilizar el sistema. El Estado se encontraba así entre la espada y la pared: si daba a unos le tenía que quitar a otros, en tanto que el funcionamiento del régimen suponía la ganancia de todos.

En el capítulo anterior tocamos el tema referente a los problemas que el sistema tuvo que enfrentar con la sociedad en general, así como las formas en las cuales trató de canalizarlos. Ahora vamos a ver cómo los tuvo que sortear con sus contrapartes: el empresariado privado nacional y el internacional. Para ello describiremos brevemente cómo estaba articulado el bloque de poder y sus disputas generales, para más tarde analizar sus diferencias en el contexto previo a la implementación de las reformas neoliberales.

La conformación del bloque de poder en el periodo posrevolucionario

El bloque de poder durante el periodo posrevolucionario, estuvo conformado por los siguientes sectores: la burocracia estatal; la burguesía privada monopólica nacional, dividida, por un lado, en agrícola e industrial y, por otro, en financiero comercial; y el capital extranjero. La burocracia estatal, en este régimen constituía la fracción hegemónica, y se caracterizaba a grandes rasgos por: estar organizada en un partido; operar sobre amplias bases populares; basar su control en concesiones como repartos de tierras, políticas salariales y de asistencia social, esquemas de protección y subsidios a sectores de la burguesía media y tradicional – cuando la coerción, la negociación o la corrupción no eran necesarias–; esgrimir un proyecto de desarrollo nacional más o menos autónomo; suponer el monopolio del Estado; utilizar su posición privilegiada para apropiarse de recursos que se utilizaban con fines patrimoniales; y contar con una estructura sumamente jerarquizada y autoritaria, en donde las decisiones importantes se tomaban desde las cúpulas.

Por otra parte, sus bases de poder, es decir, aquellas clases y demás fracciones sociales en las cuales se apoyaba eran: los campesinos medios y pobres, el proletariado, las clases medias, así como la burocracia baja y la mediana y pequeña burguesía. Mientras que sus ejes, es decir, los mecanismos que utilizaba para reproducir y mantener su dominio eran: la cooptación –tanto de organizaciones y movimientos sociales como de intelectuales–, el clientelismo, la ideología revolucionaria, el control directo sobre los medios de comunicación, la manipulación y movilización de “sus masas”, una política económica redistributiva, la educación y, en última instancia, la coerción o represión directa de aquellos que “osaban” cuestionar el sistema (Valenzuela, 1991).

La burocracia estatal se encontraba dividida a su vez, en tres sectores: la tecnoburocracia y la intelectualidad alta del sistema; la burocracia administrativa; y la burocracia corporativa (Rivera, 1992; 23-24). La primera estaba encargada de definir la acción económica del Estado, intentando establecer el rumbo general de la acumulación del capital. La segunda, establecía “las relaciones con el capital y maneja el complejo aparato de intervención estatal en el campo directo de los negocios –permisos de importación, créditos, aduanas, etcétera–” (*Ibid*; 24).

Y la tercera era la encargada de manejar el aparato de control de masas y ocupar los puestos clave en la jerarquía del partido oficial, y por lo tanto del gobierno y del Estado. Se podría decir que, al contrario de la tecnoburocracia que se encargaba de “lo económico”, ésta se

encargaba de "lo político". Dentro de este sector, la burocracia corporativa era la que "tenía la última palabra", es decir, era la fracción hegemónica.

Las mismas características del régimen político-social posibilitaron que de esta burocracia surgiera una capa capitalista/burguesa, la cual, a largo plazo terminó siendo la más beneficiada por esta modalidad de acumulación. En efecto, el manejo directo del aparato estatal-gubernamental-partidario permitió "el establecimiento de canales privilegiados para la conversión de los caudillos revolucionarios –y subsecuentemente de los altos funcionarios públicos- en empresarios capitalistas a través del control de actividades económicas altamente rentables, junto con el uso de fondos públicos para la acumulación capitalista" (*Ibid*: 30).

Lo anterior debido a que una vez "institucionalizado" el conflicto de la Revolución Mexicana, el Estado tendió a asumir y a concentrar en sus manos un amplio número de funciones, atribuciones y derechos, reservándose la capacidad de manejar –prácticamente a su antojo-, el rumbo tanto del aparato productivo nacional como de la formación de la sociedad mexicana. Los integrantes del Estado supieron sacar provecho de esta situación y pronto utilizaron cualquier mecanismo: expropiaciones, subsidios, créditos estatales, restricciones de importación, acceso directo a las arcas públicas, etcétera, para hacerse de negocios y enriquecerse:

Como lo señala Nora Hamilton, "[...] el conflicto revolucionario mismo proporcionó numerosas oportunidades para el rápido enriquecimiento de los generales victoriosos, además de fácil acceso a las tierras expropiadas a los anteriores terratenientes" (Hamilton, 1983: 87). Junto al acaparamiento de tierras, caen en manos de altos oficiales del ejército y funcionarios civiles minas e ingenios azucareros [...]. Posteriormente acaparan la propiedad inmobiliaria de las grandes ciudades y la explotación de los servicios de transporte y comunicación que constituye la fuente natural de monopolios, a algunos de los cuales renuncia el Estado en beneficio de los intereses privados. Posteriormente, a partir de los años sesenta, participan de manera privilegiada en actividades cuyo desarrollo depende directamente de la gestión e inversión estatales: la construcción, el turismo y la pesca. El otorgamiento por canales privilegiados de licencias de importación garantiza a numerosos empresarios bien relacionados con el poder enriquecerse rápidamente (*Ibid*: 30).

Es así que desde el Estado se formó una enorme base de poder económica subordinada a la burocracia que dirigía este sistema, permitiendo el surgimiento de una "clase privilegiada de capitalistas" la cual más tarde se dio en llamar la burguesía burocrática. Por su ubicación en el aparato estatal, y gracias a la falta de instancias reguladoras autónomas, esta burguesía pudo influir en la orientación de la política económica permitiendo el desarrollo de ciertos sectores, los que más le convenía, en detrimento de otros.

Por lo anterior, la burocracia quedó en posibilidad de normar y fiscalizar directamente el desarrollo de la clase empresarial privada, con la cual desarrolló toda una red de intereses que tendía a favorecer directamente la reproducción y el mantenimiento del orden establecido. Esta red, cabe mencionar, sería la que más tarde se opondría a la implementación de los cambios estructurales que requería la adecuada continuación de nuestro patrón de acumulación.

Con el tiempo, entre el empresariado privado y la burocracia estatal se desarrolló una relación de subordinación, alianza, asociación y conflicto a la vez. Subordinación, porque las decisiones últimas emanaban no tanto de las cámaras empresariales o de instancias que decidieran de manera conjunta –gobierno y empresarios-, sino de las instancias gubernamentales encargadas de dirigir el rumbo económico de la nación. Por ejemplo:

Las solicitudes para obtener licencias, muy abundantes dadas las carencias de la oferta interna asociada a limitaciones estructurales y coyunturales, eran estudiadas por comités compuestos por funcionarios públicos de diversas dependencias abiertos a la participación de representantes de la iniciativa privada. Sin embargo, la función de estos comités, dependientes de la Secretaría de Comercio, era puramente consultiva o de asesoría en tanto que las decisiones eran tomadas por funcionarios de alto rango, siendo mayor la jerarquía cuanto mayor fuera el valor monetario de la licencia de importación solicitada (*Ibid.*: 3-4).

Ello por supuesto tendió a causar varios conflictos, en especial dada la terrible corrupción y el autoritarismo burocrático del sistema. Las decisiones gubernamentales nunca se justificaban ni eran anunciadas públicamente. Se tomaban de acuerdo a criterios como el monto de “las mordidas” o el peso de las influencias, más que en base a reglas claras y generalizadas. Ante tal situación, algunos sectores empresariales privados tendieron a organizarse con el objeto de pedir reglas más claras y equitativas, petición que nunca fue atendida; la negociación directa con los funcionarios públicos siguió siendo el mecanismo, por excelencia, que le permitiera a la iniciativa privada, tanto influir en las decisiones finales, como obtener recursos, subsidios, créditos, etcétera

La debilidad, falta de un proyecto y poca organización de la capa empresarial privada, le impidió, por un tiempo, jugar un papel más dinámico en el contexto nacional, por lo que tuvo que conformarse con entablar una relación de alianza y asociación con el Estado –relación que no era “entre iguales”-, en la cual se le garantizaba un desarrollo relativamente libre de

injerencias externas, y lleno de facilidades tanto económicas¹¹ como sociales –cooptación y corporativización de los sectores obrero y campesino, y en sí de prácticamente todas las luchas y movimientos sociales, garantizando un ambiente de “gobernabilidad”-.

Esta situación en la cual cada parte obtenía ciertos beneficios a cambio de ciertas concesiones, garantizó una relativa estabilidad en cuanto a la relación de las diferentes fuerzas dentro del bloque de poder. Lo cual, tendió a cambiar conforme el proceso de industrialización fue avanzando, permitiendo el surgimiento de nuevas fracciones y el agotamiento de otras.

La desestabilización del bloque de poder

Para la década de 1960 la correlación tradicional de fuerzas dentro del bloque de poder comenzó a cambiar. En efecto, a partir de la implementación de la primera fase del PAISI, una capa del empresariado privado nacional pudo hacerse de una base de acumulación propia que potencialmente le independizaba del paternalismo estatal y le posibilitaba tener una mayor capacidad de injerencia en la toma de decisiones sobre el futuro rumbo del país. Se trataba de la moderna fracción monopólico-financiera¹², en cuyas filas se encontraba la vieja burguesía de origen porfirista, y cuya lógica de operación era distinta a la de la burguesía tradicional –privada y estatal- dependiente directa del proteccionismo y del paternalismo.

Sin dejar de sacar provecho de la protección y del subsidio estatales, la nueva fracción fijó su eje de acumulación en el desarrollo de nuevas áreas de inversión, más dinámicas, con una composición orgánica más compleja y periodos de rotación y maduración más prolongados, permitiéndoles obtener una mayor rentabilidad en comparación con las empresas tradicionales, ocupadas en la fabricación de artículos sencillos previamente importados, en el acaparamiento de áreas que naturalmente eran rentables –los denominados “monopolios naturales”-, y en la obtención de fondos públicos como forma principal de capitalización.

¹¹ A través de subsidios, la creación de un mercado interno así como su protección irrestricta; la creación de instituciones de crédito y fomento económico; la promulgación de leyes acordes; la construcción de infraestructura, obras públicas, de transporte y comunicación, etcétera

¹² Por capital monopólico financiero nos referimos a aquel “que posee la propiedad y/o el control de empresas o conglomerados de empresas situados en diversos sectores de la producción social, a las que manejan como una entidad en la búsqueda de objetivos de valorización. Esto último es lo que lo distingue más claramente del capital empresarial típico, ya que éste depende de una fuente única de valorización, la empresa individual” (*Ibid*, 36). Dentro de esta nueva capa sobresalía una fracción: la bancaria, la cual con el tiempo tendió a expandirse gracias a su gran capacidad de manejar recursos y otorgar créditos, adquiriendo empresas industriales o administrando empresas ajenas.

Lo anterior le garantizó formar un capital propio, que pudo acrecentar gracias a que tendieron a ubicarse en la rama bancaria, y a que pudieron monopolizar el crédito privado, justo en una etapa en la cual el acceso al crédito se convirtió en el determinante de prácticamente todas las posibilidades de expansión económica. Me refiero a nuestra entrada a una segunda fase en el proceso de industrialización, en la cual, como lo habíamos mencionado anteriormente, el motor de acumulación pasó a depender más del abatimiento de los costos de reproducción del capital, lo cual exigía capitales de préstamo en una escala muy grande. En una situación tan privilegiada, esta fracción pudo subordinar a muchas empresas individuales y obligarlas a extenderse a las ramas que a ella le convenía.

La superioridad financiera y tecnológica de estos grupos, su capacidad de ubicarse en las ramas más productivas y rentables del país, su relativa independencia, aunado a las características propias de nuestra modalidad de acumulación —protección de mercados, etcétera— tendieron a consolidar su monopolio sobre nuestro sistema productivo, a la vez que a acelerar los procesos de concentración de la riqueza. Pronto se encontraron generando prácticamente la totalidad de nuestra producción, dejando a las pequeñas y medianas empresas un papel secundario, de subordinación. Así, por ejemplo, para 1970 “el 1% de los establecimientos producían en México dos terceras partes de la producción industrial total. La mayoría de dichos establecimientos eran parte de grupos de capital —o sea, la forma habitual de organización monopólica financiera— o eran minoritariamente empresas monopólicas individuales, no pertenecientes a grupos” (*Ibid*; 37)¹³.

En los años setenta es cuando se observa la consolidación del capital monopólico financiero, especialmente de las fracciones ligadas a la rama industrial y bancaria. Esta consolidación, sin embargo, no sólo se dio en el aspecto económico, creando una base de capital sumamente amplia, sino también en el aspecto político, organizándose y constituyendo poco a poco un

¹³ Cabe mencionar que su superioridad financiera, tecnológica y demás, sin embargo, no garantizó que en la práctica se constituyeran en empresas que verdaderamente tuvieran niveles de calidad aceptables. Su capacidad de permanencia en el mercado estaba garantizada por la combinación de una serie de factores como: los subsidios, el mantenimiento de un mercado cerrado, la inducción de la demanda por medio del gasto público, etcétera, dados por la misma estrategia de desarrollo. Este proceso favorecía la explotación de los sectores más débiles de la sociedad —los consumidores: campesinos, obreros, clases medias, etcétera— en cuanto se veían obligados a adquirir productos de baja calidad, a precios aún más altos que en el extranjero. Nuestra estrategia de industrialización tendió a derivar en un parasitismo empresarial que habríamos de pagar muy caro tiempo después.

bloque opositor que, al conjugarse con otras fuerzas, irían socavando los cimientos de dominación del régimen posrevolucionario.

El empresariado privado, ya de hecho constituía un actor político de primer orden en la vida nacional. Directamente influyó en la designación de los más altos funcionarios, participaba de la formulación de las políticas públicas, y conforme fue pasando el tiempo y el gobierno posrevolucionario tendió a inclinarse cada vez más hacia la derecha, obtuvo el pleno derecho de vetar cualquier decisión que le fuera adversa. Sin embargo, su participación era del todo subordinada; no constituía un verdadero bloque organizado con proyecto propio. Y, como vimos anteriormente, mucho menos un bloque con las suficientes bases como para disputarle su lugar al grupo hegemónico¹⁴.

A excepción de ciertos momentos de coyuntura, en los cuales las esporádicas "oleadas de reformismo oficial" pusieron directamente en peligro sus intereses, como sucedió, por ejemplo, durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas, el de López Mateos o el de Luis Echeverría, no intervenía como una fuerza de movilización social. En momentos de coyuntura como esos, reaccionaba conformando grupos de presión, estableciendo alianzas con otras fuerzas inconformes -como la iglesia, el PAN y demás grupos de derecha- y haciendo campañas de desprestigio en contra del gobierno. Pero una vez superado su malestar, regresaba a sus actividades cotidianas, participando junto con la burocracia estatal, del poder.

Los constantes conflictos con el gobierno, sin embargo, propiciarían que con el tiempo cobrara mayor capacidad política, aliándose con otras fuerzas de derecha que igualmente veían en el Estado un "propiciador" del desorden y del comunismo, hasta llegar a la década de 1980, en

¹⁴ Para algunos autores -como Pereyra (1980) o Aguilar (1985)-, la fracción hegemónica en el bloque la constituía el capital monopólico financiero, debido precisamente a que el desarrollo de nuestro patrón de acumulación tendía a beneficiarlo más que a nadie, y a que tenía el pleno derecho de intervenir en la toma de decisiones del poder, vetando en la mayoría de los casos las acciones que le resultaban adversas. Sin embargo, los hechos muestran que en realidad sólo constituía una fuerza subordinada, con poca capacidad de convocatoria, poco coordinada y falta de liderazgo. Lo demuestra, por ejemplo, la acción que emprendieron en contra del gobierno de Echeverría. En palabras de Miguel Basáñez: "El fracaso más notorio del sector privado en sus propósitos de poner en entredicho al régimen fue el escenificado con motivo de la anunciada huelga nacional encabezada por el recién fundado Consejo Coordinador Empresarial [CCE], en apoyo a los agricultores de Sinaloa y Sonora. Semejante huelga, verdadera prueba de fuego de la capacidad de convocatoria del sector privado, fracasó y sólo alcanzó a tener ciertas repercusiones aisladas y locales. En oposición a ello, el Estado demostró que seguía manteniendo más o menos intacta su capacidad de convocar y obtener el apoyo de los grandes contingentes obreros y campesinos a sus decisiones más audaces y más trascendentales. Ni siquiera la novedosa ofensiva de la propagación de rumores catastrofistas pudo vulnerar seriamente la hegemonía del Estado y por tanto la estabilidad política. A pesar de cuanto los empresarios dijeron o hicieron, el sexenio de Luis Echeverría llegó sin mayores contratiempos a su fin" (*op. cit.*; 56).

donde ya observamos un empresariado más independiente ante el cual el Estado tenía la imperiosa necesidad de negociar –como lo veremos en el siguiente capítulo-. El movimiento de lucha emprendido en la década de los 70 en contra del reformismo de Echeverría habría de ser el antecedente más inmediato de este “despertar”.

En efecto, en esta década al interior del empresariado se dio un cambio de líderes: los moderados abandonan las direcciones de sus organizaciones más importantes, y los radicales toman su lugar –como es el caso de Andrés Marcelo Saada-. Si anteriormente se recluían en sus actividades, sin incurrir en mayores movilizaciones sociales, empezaron a organizar a su alrededor campañas de desprestigio en contra del gobierno¹⁵ y a la vez de reclutamiento, llegando a formar grupos de presión gremialistas que más tarde se transformarían en verdaderas organizaciones de clase que durarían a través del tiempo –como es el caso de la CCE-.

También irían elaborando proyectos propios, como aquel postulado a colación de la creación de la CCE en 1975 –y los subsiguientes-, en el cual se hacía un llamado a los líderes empresariales a la acción política y partidaria¹⁶. En ellos, tenía expresión su condena al populismo, a los burócratas “estatistas, demagogos, corruptos e ineficientes, que en su afán de controlar todo destruyen la confianza” (*Ibid.*, 29)¹⁷, así como su apego a los ideales de libertad individual, libre mercado, democracia y demás preceptos que hoy en día engloba la ideología neoliberal.

¹⁵ Que incluían campañas de rumores y llamados a paros.

¹⁶ Recordemos que los empresarios no tenían prácticamente presencia en los partidos políticos hasta ese momento: “En las décadas de los sesenta y setenta los empresarios siguieron fuera de los partidos políticos, salvo en determinadas coyunturas de conflicto en que tendieron a coincidir con otras fuerzas, sectores y grupos, entre ellos, en forma destacada, el PAN. Sin embargo, cuando esos conflictos fueron superados, los empresarios volvieron a su tradicional exclusión política” (Luna *et. al.*, *op. cit.*).

¹⁷ En general, el principal factor de conflicto entre el gobierno y los empresarios se generaba en torno a la forma en la cual el Estado intervenía en la economía. En efecto, en la discusión estaba el hecho de que el creciente manejo de la economía se hacía a partir de medios más políticos, que económicos. Por ejemplo, “el gobierno cheverrista había privilegiado las acciones distribucionistas y populistas –aumentos salariales, reforma impositiva, aumento de los gastos sociales del Estado, nacionalizaciones, etcétera- desapegándose de las normas de rentabilidad y eficiencia capitalista –de allí la crítica empresarial, de que para distribuir es preciso producir primero-” (Rivera, 1992; 40). Aunque el gobierno tendía sin duda a beneficiar al empresariado, éste se encontraba prácticamente a la voluntad de sus decisiones, las cuales a veces tendían a limitar sus posibilidades de lucro, como fue el caso en el cual el Estado decidió elevar radicalmente el encaje legal –proporción de los depósitos bancarios que deben ser retenidos por el banco central-, hasta el 50%, afectando directamente la intermediación bancaria. También se encontraba en el centro de la discusión, la creciente corrupción que tendía a beneficiar más a unos que a otros, como lo mencionamos anteriormente.

Para 1975 y 1976, su lucha poco a poco comenzaría otra vez a converger con otras fuerzas de corte derechista, conformando un movimiento que "aunque desarticulado, inorgánico y sin un liderazgo visible, fue capaz de dividir a la burocracia política y derrotar al reformismo oficial" (Tirado, 1985; 114). Las principales fuerzas con las que habría de aliarse fueron: el PAN, la Iglesia católica y el gobierno/empresas estadounidenses, todas ellas unidas en contra de la política gubernamental.

En el PAN, por ejemplo, igualmente se observó un cambio de élites en el cual las capas más moderadas dieron paso a otras más radicales, dinámicas, pragmáticas, electoreras –enfocadas a luchar en las contiendas políticas contra todo- y anticomunistas; lideradas por José Ángel Conchello, ex funcionario de la CONCAMIN y publicista muy ligado al grupo Monterrey. Por su parte, en la Iglesia el ala más conservadora se impuso sobre el ala más radical de izquierda representada por el movimiento de la teología de la liberación.

Cada uno de estos grupos tenía motivos para estar en contra del gobierno: entre otras cosas, el PAN por los constantes fraudes electorales; la Iglesia por el afán del gobierno de secularizar la vida social. En tanto que los intereses norteamericanos por detectar en la actitud estatal mexicana una tendencia a buscar más independencia y establecer mejores relaciones con el Tercer Mundo y con el Segundo –identificado con los países socialistas–.

Y es que, en efecto, desde 1971 el gobierno inició una amplia acción diplomática tendiente a fortalecer la unión en el Tercer Mundo en defensa de un orden mundial más justo y del ensanchamiento de las relaciones con los países de tendencia comunista o socialista. El 5 de octubre, por ejemplo, el presidente se presentó en la ONU pronunciándose por el fin del proteccionismo de los países centrales, la ayuda de los periféricos y por el desarme completo. En 1972 realizó una visita a Chile como gesto de apoyo al gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. Intervino en la tercera reunión de la UNCTAD, en donde presentó –y fue aprobada– la Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados, que proponía entre otras cosas: un intercambio más justo de tecnología, realizar reformas al sistema monetario con participación no sólo de los diez países capitalistas más fuertes, sino también de los periféricos y más débiles; mayor asistencia financiera, equidad y acceso a los mercados mundiales, así como el fortalecimiento del Sistema Económico Latinoamericano.

Al mismo tiempo, con el objeto de promover la presencia comercial del país en el mundo, y de esa manera reducir las condiciones de bilateralidad con Estados Unidos, Echeverría visitó en

total 36 países, entre ellos: Japón, China, la ex Unión Soviética, Vietnam, la República Democrática Alemana, Albania y Cuba. Por su parte, López Portillo visitó tres países socialistas: la URSS, Bulgaria y China, además de Japón. Un año antes había reanudado los vínculos diplomáticos con España. Más tarde rompió lazos con la Junta Militar chilena, y otorgó asilo a varios perseguidos políticos de diferentes países: Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, en donde las dictaduras militares, respaldadas por Estados Unidos, se daban a la tarea de apagar salvajemente cualquier conato de movilización social izquierdista (Saldívar, *op. cit.*; 227-228). Y por si esto fuera poco, en 1980 México se negó a ingresar al GATT, y elevar su plataforma de exportación petrolera.

La alianza entre los actores antes mencionados, sin embargo fue efímera, en tanto sus proyectos no coincidieron del todo. Tanto el PAN como la Iglesia, por ejemplo, se negaron a dar su respaldo al discurso del CCE. El primero por considerar que sus documentos soslayaban la injusticia de que eran víctimas los trabajadores y los campesinos, en tanto que la Iglesia guardó silencio absoluto, ello en gran parte debido a sus divisiones ideológico-políticas internas, "causadas por los efectos combinados de la concientización que produjeron la represión al movimiento estudiantil de 1968, el Concilio Vaticano II y la conferencia de obispos latinoamericanos de Medellín en 1968 que se pronunció por una 'opción preferencial por los pobres', en un influyente aunque minoritario sector progresista del clero [...]" (Tirado, *op. cit.*; 115). Aunque ello también debió a la actitud conciliatoria que tomó el gobierno hacia ella: otorgó dinero para construir la Basílica de Guadalupe, visitó al papa en 1974 y lo invitó a venir para la inauguración de la basílica en 1976.

Por su parte el PAN también tuvo problemas internos: el ala moderada logró recuperar terreno cuando Efraín Morfín tomó la presidencia del partido en 1975, corriente que a pesar de su clara minoría dentro del partido, logró mantenerse hasta principios de 1980.

Es así que, a pesar de todos los problemas sociales surgidos durante toda esta década, el grupo posrevolucionario siguió manteniendo su fuerza —aunque no intacta—. Tuvo problemas en sus bases y en el bloque de poder, pero la falta de articulación, coherencia y fuerza de los disidentes, aunado a la puesta en marcha de los diferentes medios de cooptación y represión de que disponía el Estado, impidió que éstos llevaran a cabo una lucha más organizada y le quitaran su lugar.

Sin embargo, aunque estos conflictos no destituyeron al grupo hegemónico, sí contribuyeron a socavar gradualmente su fuerza, permitiendo el fortalecimiento de otros sectores que se unirían en su lucha para terminar con un periodo histórico de más de 70 años. El punto de quiebre se encontraría, paradójicamente, en el propio interior de la fracción dominante, como lo veremos a continuación, y se vería posibilitado por la acumulación de las diferentes contradicciones que provocaría el mismo sistema.

Ya para principios de la década de 1980, la situación era bastante complicada: la inflación estaba alcanzando cifras de dos dígitos –para 1981 llegaba a cerca de 30%–; el déficit en cuenta corriente, presupuestal y la deuda externa iban creciendo como la espuma –por ejemplo, para 1981 el déficit financiero del sector público representaba el 14.1% del PIB, el déficit en cuenta corriente alcanzaba los 16 052 millones de dólares (8.4% del PIB), mientras que la deuda externa casi llegaba a los 90 mil millones de dólares (Guillén, *op. cit.*; 32)–, en tanto que el contexto externo marcaba signos de recesión y los precios del petróleo comenzaban a mostrarse a la baja. Nuestras autoridades no supieron ver la gravedad del problema, interpretaron esta situación como pasajera, y reaccionaron de la misma manera que antaño: pidieron más préstamos al extranjero a corto plazo, con el objeto de mantener el tipo de cambio, frenar la fuga de capitales y cubrir el servicio de la deuda externa.

Las medidas de emergencia esta vez no funcionaron: los capitales seguían saliendo en bandadas del país; se produjo una dolarización alarmante de los pasivos bancarios; la moneda se devaluó más de 100% con respecto al dólar; las pugnas con los empresarios resurgieron otra vez y en el interior del gobierno se dieron varias fracturas, en especial entre los “expansionistas a toda costa” –es decir, los que clamaban por seguir aplicando las mismas políticas de expandir el gasto público y pedir préstamos al exterior– y los que pedían tomar otras medidas –entre ellos estaba la tecnocracia identificada con la ideología neoliberal–.

La “gota que habría de derramar el vaso”, el factor que habría de ser el detonante de una de las crisis más severas que haya experimentado el país, fue la elevación de las tasas de interés por parte de los países centrales. Con las arcas prácticamente vacías y una deuda estratosférica, el gobierno se declaró incapaz de seguir haciendo frente a los compromisos pactados con sus acreedores externos, provocando una situación de alarma en la comunidad bancaria y financiera internacional, “dado el alto grado de exposición de los bancos norteamericanos con México y otros países de América Latina” (*Ibid.*, 34). Ante el riesgo de que se desatara una crisis sistémica en el orden financiero internacional, las principales autoridades económicas

-FMI y BM- impusieron a México la firma de un acuerdo en el cual se comprometía a llevar a cabo fuertes medidas estructurales -todas ellas tendientes, claro está, a garantizar el pago de la deuda-

Con la firma de este acuerdo, México iniciaría un proceso de reestructuración, a partir del cual habríamos de iniciar un nuevo periodo histórico. Este proceso, sin embargo, no se llevó a cabo de manera pacífica; tuvo que desatarse toda una lucha entre las diferentes fracciones del poder por sacarlo adelante.

ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA

Capítulo 5

Los primeros pasos hacia la reestructuración neoliberal (1982-1988)

Así, para 1982, en el horizonte del gobierno entrante se perfilaba una situación de recesión, cuellos de botella financieros, falta de acceso a los mercados comerciales y monetarios, alta propensión al desempleo, una tasa de "crecimiento" proyectada entre 0 y -5%, tasas de inflación que alcanzaban los tres dígitos, y, lo más alarmante, una situación de descontento social muy grande, en la que se combinaban las quejas provenientes tanto de los sectores populares, como del propio capital. Ante una situación como esta, el presidente en turno, Miguel de la Madrid Hurtado, decidió tomar el camino de la reconciliación, tanto con los acreedores internacionales, como con los empresarios nacionales.

Primero comenzó por renegociar la deuda externa. Ésta se logró recalendarizar, aunque las condiciones en términos de tasas de interés y comisiones nos resultaron muy gravosas (ver Guillén, 2001; capítulo 2). Y prosiguió aceptando todas las recomendaciones hechas por nuestros acreedores en esta renegociación, lo que a la larga derivó en el gradual desmantelamiento del sistema político-social-económico hasta ese momento vigente, y en nuestro embarque en la construcción de uno completamente diferente, basado en la lógica neoliberal.

Entre los principales compromisos establecidos con el extranjero estaban: controlar la inflación, desregular la economía y el mercado nacional, alentar la inversión extranjera, fortalecer al sector privado –alentándolo a ir más allá de las fronteras nacionales en busca de nuevos mercados, socios y tecnología-, reducir la participación del Estado en cuanto a gastos sociales se refiere, implementar una fuerte disciplina fiscal, reformar el sistema tributario para ampliar la base impositiva, mantener tipos de cambio competitivos, privatizar las entidades estatales y desregular el mercado laboral.

Cabe mencionar que todas estas medidas –que se cristalizaron en un ambicioso programa de ajuste- estuvieron enfocadas prácticamente al único fin de crear un superávit que le permitiera a México hacer frente a su deuda. Lo principal para la banca trasnacional era evitar una crisis sistémica de las finanzas internacionales, “y asegurar no tanto el pago del principal, sino la cobertura de los intereses para seguir valorizando el capital comprometido” (Guillén, *op. cit.*; 38) –premisa fundamental para que los principales países centrales hicieran frente a su propia crisis y reestructuración-. Al mismo tiempo estuvieron dirigidas a refuncionalizar nuestro papel en la división internacional del trabajo, sentando las bases para la desestructuración de nuestro patrón de acumulación vigente, y la implantación de una nueva orientada a la exportación, abierta a la economía internacional, desregulada, menos estatificada, mayormente basada en la lógica del “libre mercado” y donde la inversión privada fuera el motor de la acumulación del capital (*Idem*).

La actitud que tomó el gobierno en cuanto al cumplimiento de nuestros compromisos con el extranjero, en general, atravesó por dos etapas: una que fue de diciembre de 1982 a febrero de 1986, en la cual se adoptó una actitud de “cumplir a toda costa”, con el objeto de granjearse otra vez la simpatía de los acreedores; y una segunda que fue de febrero de 1986 hasta 1988, en la cual se comprendió la necesidad de modificar un tanto esta actitud debido a los diferentes estragos que causó en la composición de las alianzas sociopolíticas del sistema –poniendo aún más en peligro su posición hegemónica-.

La actitud de cumplir a toda costa se debió, en gran parte, al recelo que nuestro vecino del norte y las agencias acreedoras tenían sobre la política mexicana, en cuanto en el pasado se demostró una actitud de “rebeldía” al buscar alianzas con los países socialistas y dar apoyo a países “disidentes” como Cuba, El Salvador o Nicaragua. Se tenía que demostrar que el país no avanzaba hacia el comunismo, ni que mantenía alianzas estratégicas que pusieran en peligro el lugar privilegiado de los Estados Unidos. Para 1983 ya se había cumplido el objetivo a través de la implementación escrupulosa de las medidas pactadas, de tal manera que las opiniones sobre nuestro rumbo, de mostrarse escépticas y adversas, se mostraron completamente favorables, poniendo nuestro proceso de reestructuración como ejemplo ante el mundo entero:

En agosto de 1983 México fue calificado por altos funcionarios de los gobiernos financieros internacionales como país con un programa de recuperación ejemplar que estaba siendo imitado por otros países con dificultades financieras. Esta percepción fue ampliamente argumentada y difundida por revistas y periódicos especializados con gran

penetración internacional quienes señalaban que ningún país en tiempos modernos había aplicado un ajuste tan radical, rápido, decidido y exitoso como México. En junio de 1984, el director ejecutivo del FMI giró un comunicado en el que presenta a México como un ejemplo de ajuste para los países deudores y de negociación para los países acreedores, que fue respaldado por el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Basáñez, *op. cit.*; 82).

Ello, sin duda, le permitió granjearse el beneplácito del norte y seguir contando con recursos del extranjero, pero derivó en su alejamiento del sur. Si anteriormente México había sido líder en cuanto a la organización del Tercer Mundo para defenderse del Primero, ahora no mostraba más que una actitud de completa sumisión, aislamiento y unilateralidad, como lo demostró su negativa de unirse en la conformación del denominado Club de Deudores, en el cual América Latina buscaba juntar sus fuerzas para hacerle frente a la comunidad financiera internacional, y, en cambio, su decisión de pagar su deuda, como fuera y con las condiciones que le impusieran.

Para 1986, la situación económica que vivía el país y el desorden sociopolítico que había causado la primera postura, derivarían en un cambio de actitud por parte del gobierno. En primera instancia, la unidad productiva nacional se encontraba completamente estancada: la mayoría de los recursos excedentes del país se destinaban tanto al pago de la deuda externa, como de la interna. Los precios del petróleo se desplomaron en 1985 y los índices de inflación por lo tanto se dispararon; los índices de desempleo aumentaron debido, entre otras cosas, a los recortes de personal que se dieron en el área privada y estatal, a la quiebra de varias empresas privadas y la desaparición de varias estatales; así como a la imposibilidad de crear más empleos.

Los salarios experimentaron un fuerte deterioro. El malestar social se exacerbó: los diferentes actores estaban cobrando una mayor capacidad organizativa y una mayor conciencia, en especial la derecha. Lo cual se habría de conjugar con un sismo que destruyó la Ciudad de México, y una creciente descapitalización, producto de: a) la fuga constante de capitales; b) de nuestro cumplimiento cabal del pago del servicio de la deuda - que drenaba nuestros recursos prácticamente en su totalidad-; y c) porque nuestros acreedores se habían abocado a cobrar sus intereses, sin otorgar créditos adicionales.

Ante esta situación, el gobierno comenzó a cambiar su postura, declarándose indispuerto a seguir "sacrificando los niveles de vida de las clases mayoritarias, para exportar, por vía del servicio de la deuda externa, recursos generados internamente, mientras que los flujos de

financiamiento externos seguían virtualmente cancelados y los ingresos petroleros se habían reducido a menos de la mitad" (*Ibid*; 83).

Así, amenazó con romper unilateralmente las condiciones antes pactadas, y adoptar otras medidas como reducir los intereses al margen de la aprobación de los acreedores, con el fin de colocar los réditos debidos solamente a dos puntos por encima del promedio de la inflación internacional. Lo anterior dio resultados: para julio del mismo año ya se encontraba renegociando ante el FMI, quien otorgaría más préstamos aunque no cedería en cuanto a modificar sustancialmente los términos de pago y las concesiones respecto a las tasas de interés y de plazos. Para octubre de 1986, los préstamos más un nuevo repunte en los precios del petróleo permitirían generar cierta flexibilidad en el programa de ajuste interno, lo que posibilitó fortalecer la diversificación de nuestras exportaciones y aumentar la captación nacional de divisas, aunque no así la superación de nuestra recesión.

Con la aplicación de las medidas neoliberales, el gobierno buscaba modernizar al país, apoyándose no tanto en el Estado, sino en una burguesía privada más emprendedora y con miras no sólo a explotar el mercado interno, sino expandirse hacia el exterior. Ello implicaba dismantelar las bases a partir de las cuales había girado la estrategia de desarrollo vigente, lo cual implicaba –advertía el gobierno– *soportar varios sacrificios*. Entre las primeras metas que se propuso estuvieron: entablar una lucha frontal contra la inflación, reducir el déficit del sector público, depurar y adelgazar el sector paraestatal, privatizar las áreas que hasta ese momento se encontraban en manos del Estado por considerarse estratégicas; reducir el aparato burocrático buscando su máximo rendimiento y eficiencia; reducir los subsidios al consumo y a los bienes y servicios producidos por el Estado; controlar los salarios y liberar el comercio internacional.

En cuanto a la apertura exterior, como habíamos visto, durante las décadas anteriores había sido casi imposible efectuar una revisión gradual y selectiva del proteccionismo en tanto existía una fuerte resistencia por parte de los grupos internos que se beneficiaban de la estrategia de mantener la economía relativamente cerrada. Ahora, la situación era diferente, los intereses externos de que se abriera la economía pudieron conjugarse con el interés de los grupos internos, en especial del grupo monopólico financiero –que como vimos pudo realizar un importante proceso de acumulación y expansión–, para llevar a cabo tal medida.

El proceso de apertura comenzó por liberar varios productos externos sujetos a permiso de importación. Así, el número de fracciones arancelarias sujetas a permiso previo descendió drásticamente del 83% del total en 1984 al 27.8% en 1986 (Guillén, *op. cit.*; 43). Y continuó con nuestra adhesión al GATT en 1986. Su aplicación se dio, cabe mencionar, de manera unilateral —justo en un momento en el que el proteccionismo en los principales países capitalistas se exacerbaba— y de manera abrupta: en el lapso de unos cuantos meses, ya se habían superado con creces las metas de liberalización impuestas por los organismos internacionales. De manera tal que para 1985, el 89.5% de los productos antes sujetos a permisos de importación se encontraba libre de todo impuesto. Ello tuvo una gran importancia en cuanto esa cantidad representaba el 64.9% del valor total de las importaciones (Ramírez, 1989; 183).

El gobierno reemplazó, el antiguo permiso de importación fijando aranceles bajos —o eliminándolos en algunos casos—, y otorgando amplios márgenes de simplificación en su aplicación. Para 1988, el 96% del valor total de las importaciones se encontraba exento del permiso de importación (Guillén, *op. cit.*; 43). Ello imposibilitó, por supuesto, la captación de importantes recursos que pudieran servir para seguir financiando nuestras crecientes importaciones, en especial las más caras. Se pensó que incentivando nuestra capacidad exportadora se podría enmendar tal situación.

En este sentido, con el objeto de impulsar la competitividad de las exportaciones mexicanas, el gobierno se dio a la tarea de facilitar la caída de los salarios reales, los cuales, según Ramírez, para el final del periodo de Miguel de la Madrid eran aún inferiores que los de países como Singapur o Corea. Sólo por poner un ejemplo de la radicalidad de la caída, para 1982 el salario mensual mexicano oscilaba alrededor de los 327 dólares —y eran superiores a los de esos dos países—; para 1984 sólo dos años después, el salario mexicano representaba 265 dólares —mientras que la cifra de los dos países anteriores era superior—. Para 1988 “un simple cálculo aritmético refleja que los salarios mínimos mensuales en México habían caído a cerca de 100 dólares mensuales” (Ramírez, *op. cit.*; 194).

Los salarios así comenzaron a perder terreno en la participación del ingreso nacional: para 1982 se observaba que el factor trabajo participaba con el 45.4%, mientras que para 1983 se redujo al 37.2%, y para 1985 sólo el 34% (*Idem*). La degradación de los salarios, que se conjugó con la disminución de los subsidios estatales y el alza de los precios, provocó una

considerable pérdida de poder adquisitivo de la población en general, acumulando un deterioro de 44% en el periodo que va de 1982 a 1987.

Se argumentaba que con una mayor apertura y la creación de las condiciones necesarias para alcanzar mejores niveles de competitividad en nuestras exportaciones, el país iría saliendo de su crisis, en cuanto las inversiones fluirían con rapidez, reactivando nuestra economía. Ello sin embargo no se palpó. En efecto, los capitales externos fluyeron a México y poco a poco los internos fueron repatriados, sin embargo, tendieron a ubicarse en el área financiera, provocando una terrible volatilidad en el sistema. Además, tendieron a desbanicar a las empresas nacionales que, carentes de adecuados niveles de calidad y tecnología, se fueron a la ruina.

Por otra parte, también se flexibilizó la política de inversiones extranjeras. Con el objeto de obtener más recursos, ante la imposibilidad de conseguir préstamos internacionales, la contracción de la inversión privada y la paralización de la inversión pública, se permitió, por ejemplo, el ingreso de proyectos de inversión extranjera directa hasta con un 100% de capital en ciertas ramas, en especial aquellas que contribuyeran a incrementar las exportaciones no petroleras. Y se promovieron modificaciones al régimen de maquiladoras para permitirles vender en el mercado interno hasta el 20% de su producción así como para permitirles instalar plantas en zonas distintas a las fronterizas.

La entrada de los capitales externos, en un principio no fluyó en grandes cantidades, antes bien se contrajo. Sin embargo, las suficientes garantías establecidas por el gobierno: caída de los salarios, subvaluación del peso, contracción de su presencia en la regulación del mercado, etcétera propició que para el periodo 1986-1988 el promedio de sus inversiones ascendiera a 2 454.7 millones de dólares, cifra superior al promedio alcanzado durante el auge petrolero, y que representarían el 9% de la formación bruta de capital, más del doble de la representada durante el periodo de auge (Guillén, *op. cit.*; 46).

De hecho, los capitales externos fueron los que impulsaron en mucho nuestro viraje hacia la exportación: "Su intervención en los envíos no petroleros pasó del 22% en 1983 al 53% en 1987" (Guillén, *op. cit.*; 47). En tanto, las maquiladoras "se extendieron como hongos", constituyéndose en el segundo rubro de ingresos de la balanza de pagos, ubicándose debajo del petróleo y por encima del turismo. Según datos del INEGI, "en el periodo 1983-1987 el número de maquiladoras creció de 600 a 1 259 y el de trabajadores ocupados en ellas pasó de

150 900 a 322 700" (*Ibid*; 48). Cabe mencionar que del total de las maquiladoras, para estas fechas, el 53.6% poseía en su totalidad capital norteamericano; el 42% capital mexicano y el 4.4% capitales provenientes de otros países como Japón, Alemania y España (*Idem*).

Uno de los requisitos más importantes que establecía el proceso de reestructuración neoliberal, era el adelgazamiento del Estado –con el objeto de reducir su déficit presupuestal- y la contracción de su intervención en la economía –para controlar los niveles de inflación, entre otras cosas-. Se buscaba racionalizar los recursos del erario, abandonar la política asistencialista, así como lograr una mayor eficiencia y productividad.

Para ello se trazó una política de reducción drástica de los subsidios destinados a los bienes de consumo básico, de los bienes y servicios producidos y comercializados por el Estado, así como de elevación de las tasas de interés de los créditos preferenciales¹. A la par, la CONASUPO disminuyó el número de productos que comercializaba –de 33 en 1983 se quedó con 22 al cierre de 1985-, y aumentó los precios de los bienes básicos que aún conservaba.

Por su parte, los cinco principales bancos y fondos destinados a otorgar crédito al desarrollo y la producción, subieron sus tasas: "entre 1982 y 1986, NAFINSA elevó las tasas de interés del 40% al 85.7%; BANOBRAS del 32.7% al 70.3%; el Banco Nacional de Comercio Exterior, del 44.7% al 91%; y el BANRURAL y el FIRA del 28% al 71.7%" (*Ibid*; 190). Como vemos las tasas se volvieron sumamente gravosas por lo que prácticamente se canceló el papel del Estado como promotor.

Aunado a lo anterior, se llevó a cabo la depuración de la burocracia y el adelgazamiento del aparato estatal. Hasta la década de 1980, el Estado había sido la fuente generadora de empleos por excelencia del país, tanto creando plazas en sus dependencias como salvando y manteniendo las empresas que iba expropiando –por razones estratégicas o por su quiebra económica-. Con motivo de la reestructuración, ello tendría que quedar en el pasado (ver

¹ En un análisis del comportamiento de los precios de los ocho bienes de consumo más importantes, por ejemplo, se destacó que entre 1983 y 1985, cinco de ellos habían subido de precio debido a que se les retiró el subsidio –el frijol en un 31.1%, el pan en un 25.8%, el arroz 11.1%, el huevo 1.4% y la leche un 0.6%; mientras que los otros tres siguieron siendo subsidiados –el aceite de cocina, el azúcar y la tortilla-. Para 1986 todos los productos de consumo básico, a excepción de la tortilla y de la leche, fueron liberados. Sin embargo, estos subsidios fueron focalizados, es decir, se destinaron sólo a ciertos sectores de la población (Ramírez, *op. cit.*; 187).

cuadro 5.1²); para 1985 ya se habían eliminado 15 subsecretarías, 2 oficialías mayores, 8 coordinaciones generales, 121 direcciones generales en el gobierno y 945 áreas organizacionales en el sector parastatal. Con ello se afectó a 51 000 empleados.

Al mismo tiempo se anunció la reducción del 10% de los ingresos a los 18 secretarías de Estado, los procuradores de justicia, el jefe del DDF y otros funcionarios del gabinete (Informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, 1985, citado en *Ibid*; 186). Y si para 1982 el sector público contaba con 1 155 entidades, para 1985 sólo poseía 449. Cabe mencionar que muchas de estas entidades constituían empresas que anteriormente habían sido "salvadas" por el gobierno, y que realmente no funcionaban.

Cuadro 5.1

*Plazas de trabajo remuneradas creadas por sexenio
(miles de ocupaciones)*

Sexenio	Plazas
Luis Echeverría A.	2 687
José López Portillo	5 933
Miguel de la Madrid	433
Carlos Salinas de Gortari	1 404
Ernesto Zedillo*	116

Fuente: NAFIN. *La economía mexicana en cifras*.
* Corresponde al periodo 1995-1996.

Y, por último, la presencia estatal en la industria se replegó a 12 ramas para 1988 —en 1982 se encontraba presente en 28—. Se retiró de las industrias: automotriz, bienes de consumo duradero, bienes de capital, textil, vestido, química básica, parcialmente de la minería, la producción de azúcar, el comercio y los servicios (Guillén, *op. cit.*; 52). El control sobre el déficit del sector público hasta cierto punto dio resultado: si en 1982 era del orden del 16.9%, para 1983 había bajado a 8.6%. Sin embargo, fue variante: en 1985 otra vez subió, a 9.6%; en 1986 casi se duplicó: llegó al 16%, para 1987 bajar un poco, a 15.8% (Ramírez, *op. cit.*; 184).

² El cuadro proviene de: Guillén, 2001; 61.

Lo anterior, en gran parte, debido a que tuvo que hacer frente a serios problemas sociales y políticos, como veremos.

Por otra parte, como mencionamos anteriormente, el gobierno también tendió a reestablecer sus relaciones con el empresariado nacional. En este sentido, el establecimiento de un acuerdo con el sector más poderoso de la burguesía mexicana constituía un paso indispensable para hacer viable la reestructuración, al haberse constituido ésta en un poder económico y político bastante fuerte, capaz de coadyuvar a reactivar el sistema o, por el contrario, de desestabilizarlo por completo, como lo demostró con el "boicot" realizado ante la medida gubernamental de nacionalizar la banca³.

Para reconciliarse con el capital privado, prosiguió a permitir y establecer un poderoso mercado paralelo en torno a las casas de bolsa, arrendadoras, casas de factoraje, compañías de seguros y otros intermediarios financieros, al permitir a los exbanqueros su participación accionaria en las empresas industriales, de servicios y en el sector financiero no bancario con muchas prerrogativas, y restringir seriamente la acción estatal. Al respecto, los bancos comerciales se limitaron a operar como agentes financieros del sector público -con tasas crediticias muy poco competitivas, en principio. Para después, en 1985, congelar virtualmente el crédito bancario-, permitiendo a los intermediarios financieros no bancarios acaparar el resto.

Éstos pudieron emprender, con el apoyo del Estado, agresivas campañas de captación "al ofrecer a los depositantes rendimientos más altos aprovechando su participación destacada en el mercado de dinero y en el mercado bursátil" (Guillén, *op. cit.*; 53).

Si lo anterior le permitió captar una enorme cantidad de recursos, la conversión de la deuda estatal en títulos de deuda para compradores privados, y/o la emisión de certificados de la Tesorería y otros valores gubernamentales de renta fija -CETES: pagafes, petrobonos, etcétera- con condiciones sumamente rentables, le permitió maximizar aún más sus ganancias, recapitalizar y refuncionalizar sus empresas, y por tal motivo, afianzar su poder. Según Rivera:

³ En efecto, ante la nacionalización de la banca, el capital monopolístico financiero reaccionó expatriando sus recursos, lo cual, al conjugarse con la enorme deuda externa, provocó una profunda restricción financiera "que limitaba las posibilidades de modernizar la base industrial y de restablecer el equilibrio fiscal" (Rivera, 1992: 102).

Las casas de bolsa actuaron simultáneamente como intermediarios y compradores directos de CETES –y otros valores-, cuyas tasas de interés se situaron por encima de la inflación en 1985 y nuevamente en 1988 y 1989. Considerando el enorme incremento de la colocación de deuda pública interna en esos dos últimos años, las ganancias financieras de los inversionistas significaron, al decir del Banco de México, una enorme transferencia de poder adquisitivo hacia el sector privado. Así, este estuvo en condiciones de absorber ganancias monopolísticas, recapitalizar a sus empresas productivas más débiles, maximizar las ganancias de sus empresas superavitarias y efectuar posteriormente –a principios de 1989- cuantiosos repartos de dividendos (1992; 112).

Otra de las medidas “conciliatorias” que tomó el gobierno de Miguel de la Madrid, fue el indemnizar a los exbanqueros expropiados, y más tarde, privatizar las empresas que anteriormente les habían pertenecido, otorgándoles preferencia de compra. Además siguió apoyando financieramente las empresas que se encontraban en mal estado o al borde de la banca rota. Todas estas facilidades más la política cambiaria que ofrecía una evolución estable del deslizamiento del peso frente al dólar, alentaron el retorno de una parte considerable de los capitales expatriados; capitales que, sin embargo, no fueron invertidos en el sector productivo, el cual se encontraba en la ruina, sino en el financiero, aprovechando las grandes posibilidades de lucro que ofrecía el mercado bursátil.

Los capitales se volcaron así, en grandes masas hacia el país, provocando un *boom* en 1986 y 1987. No obstante que la economía mexicana sufría una de las más profundas recesiones, la Bolsa Mexicana de Valores iniciaba un ascenso vertiginoso: en 1983, por ejemplo, mientras el PIB había caído 5.3 puntos, el índice de la BMV se había cuadruplicado al crecer a 2 451 puntos. Para finales de 1984 se ubicaba en los 4 038 puntos. En 1985 saltó a 11 197 puntos, para llegar en 1986 a 47 101 puntos (Basáñez, *op. cit.*; 95). En verdad existía una completa falta de correspondencia entre el comportamiento de la economía real y el de la bolsa. Al respecto:

Fue notable que incluso las acciones de empresas con evidentes problemas de producción y ventas –por ejemplo el grupo Pliana en 1986- subieran como si se tratara de valores de corporaciones en pleno auge. Entre el valor real de las acciones y su valor en Bolsa se abrió una brecha que fue ensanchándose más y más merced a la influencia de nuevos contingentes de inversionistas que llegaban a la Bolsa a comprar prácticamente *lo que fuera* (*Ibid.*, 99).

La conjugación de factores como, por un lado, el enorme déficit fiscal del Estado, su imposibilidad de obtener recursos por sí mismo –debido a las trabas que él se impuso-, y la conversión de su deuda en negocio monopolizado por las manos del capital privado; mientras que por otro, la gran capacidad financiera del grupo monopolístico y la creación de condiciones inmejorables para acentuar y garantizar su acumulación; sus enormes recursos ubicados en el

extranjero y el saneamiento de sus empresas –sin grandes costos para él mismo, sino para el Estado que fue el que absorbió la deuda privada-, tuvo como consecuencia la rearticulación de las fuerzas al interior del bloque de poder.

Por su parte, el grupo que hasta ese momento había fungido como el hegemónico ya no era capaz de mantener cierta independencia con respecto a los demás grupos de la sociedad, sorteando sus problemas a partir de la movilización de sus bases y la utilización prácticamente irrestricta de los bastos recursos estatales. Ante su endeudamiento y pobreza, se vio en la necesidad de establecer negociaciones con el grupo que evidentemente tenía mayor fuerza: el grupo financiero, especialmente el bancario, el cual tenía en mente un proyecto de sociedad que lo tendía a excluir; un modelo de sociedad neoliberal.

Por otra parte, en el grupo hegemónico el sector que compartía la misma visión de los empresarios: la tecnoburocracia, comenzó a ganar terreno frente a la vieja fracción hegemónica la cual, a partir de todas las medidas tomadas por el gobierno de De la Madrid, vio socavadas las bases de la reproducción de su dominio –como lo veremos más a fondo en el siguiente capítulo-. Con serios problemas provenientes de sus bases, de sus contrapartes y de su mismo grupo, tuvo que emprender una seria lucha por mantener su lugar, lucha que tarde o temprano perdería.

Al contrario de lo que pasaba en el área financiero-especulativa, los resultados de la primera etapa de reestructuración, causaron serios problemas tanto en el aparato productivo nacional –al hundirlo en una tremenda recesión- como en la misma sociedad, al socavar los niveles de vida de la mayoría de la población. Aunque se argumentaba que era necesario soportar “ciertos sacrificios” a cambio de un futuro mejor, los beneficios no se observaban en lo absoluto, y de hecho cada vez era mayor la carga que se tenía que soportar. Nuestros gobernantes ante las condiciones del país y las circunstancias internacionales, no supieron llevar a cabo un proceso que tendiera a remediar los serios problemas que iban surgiendo conforme pasaba el tiempo. Antes bien, tendieron a ensanchar las desigualdades sociales y a fomentar el establecimiento de un modelo de acumulación bastante volátil y precario, a la cabeza del cual se ubicaría el capital monopólico financiero tanto interno como externo.

El malestar social hacia el Estado se exagera

Con la aplicación de las medidas neoliberales, las presiones y reclamos hacia el gobierno aumentaron por todos lados. A todos se les pedía soportar algunos sacrificios pero, ciertamente, no se ofrecían muchas garantías. Las principales voces de malestar surgieron del sector obrero popular, del campesino, de la izquierda, y por supuesto de los grupos conformados por la derecha, que incluía sectores como el empresarial, la Iglesia, el PAN y los intereses externos –en su mayoría estadounidenses–.

La puesta en marcha del primer programa de ajuste neoliberal –expresado en el PIRE, Programa Inmediato de Recuperación Económica, 1982– afectó, tal vez como a ningún otro, directamente al sector trabajador/popular, ya que sobre sus espaldas descansó el proceso que tenía como objetivo principal generar las condiciones necesarias para abrir un nuevo ciclo de expansión económica.

Los trabajadores “oficiales”, respaldados y liderados por sus sindicatos protestaron. Pronto se observó el aumento de emplazamientos a huelga, huelgas, marchas, y demás acciones que demostraban su malestar y clamaban por la necesidad de implementar propuestas alternativas. La CTM y el CT, por su parte, elaboraron un programa alternativo de política económica y social; a través de sus típicas acciones de presión y por medio de discursos, reprobaban las medidas que implementaba el gobierno, cuestionaban la fidelidad de sus diagnósticos y la viabilidad de sus pronósticos, e incluso la capacidad de algunos funcionarios públicos.

Por parte del sindicalismo independiente igualmente hubo protestas. Este sector, el cual se había venido organizando en grandes agrupaciones como la Mesa de Concertación Sindical, fue el que reaccionó más aguerridamente, el que generó más oposición en contra de la política de austeridad. Realizó diversas movilizaciones, huelgas, etcétera, para emprender una fuerte campaña en defensa del aumento de los salarios y del empleo, así como por el control de precios y el mantenimiento de los subsidios estatales.

La movilización obrera, sin embargo, aunque presentó cierta presión para el gobierno, no constituyó una fuerza que posibilitara un cambio real en el rumbo de las cosas. Por un lado, en su mayoría, los líderes de los sindicatos oficiales estaban más interesados en seguir recibiendo sus tajadas de poder económico y político, y mantener a su disposición la enorme fuerza de “sus masas”, que defender verdaderamente los derechos de los trabajadores. Es más, a partir

de ciertas negociaciones y concesiones, estuvieron dispuestos a poner orden en sus filas para que el proceso de reestructuración siguiera adelante. Mientras que el movimiento sindical independiente mostró problemas de articulación y organicidad, además de que fue fuertemente reprimido.

Los campesinos emprendieron de la misma manera, diversas acciones tendientes a manifestar su descontento y repudio hacia las políticas de austeridad. Las principales razones de descontento por parte de este sector estaban en las alzas de los bienes de consumo básico y de transporte; en la degradación de los precios de garantía, los apoyos, estímulos y subsidios al agro; la ineficiencia y corrupción de los funcionarios públicos; el rezago de los expedientes agrarios; la dotación, tenencia y restitución de tierras; así como la represión y las relaciones de cacicazgo en el campo. Sin embargo, al igual que el movimiento obrero, éste sería controlado por los caciques o seriamente reprimido, cuando no tendería a desarticularse solo debido a su falta de organicidad.

Los movimientos y partidos de izquierda, por su parte, emprendieron una campaña de crítica hacia el PIRE en cuanto consideraban que tendía a cargar todo el peso de la "recuperación" en las clases trabajadoras. Pedían en cambio: impulsar una reforma fiscal que gravara las utilidades del capital; derogar el impuesto al valor agregado; eliminar los subsidios a las empresas privadas; establecer severos controles a la inversión extranjera; romper con el FMI y declarar una moratoria; nacionalizar industrias como la alimentaria, la química farmacéutica y el comercio exterior; incrementar las partidas del gasto público destinadas al bienestar social; reformar la estructura institucional y jurídica del gobierno; sanear y democratizar al poder judicial; desaparecer el presidencialismo; crear una institución electoral independiente del ejecutivo; liberar a los presos políticos; democratizar la vida de los sindicatos; establecer una escala móvil de salarios; la sindicalización de los jornaleros y peones agrícolas; reducir los límites de la pequeña propiedad agrícola y ganadera; fomentar la creación de ejidos colectivos; fijar precios de garantía remuneradores para los campesinos; canalizar los créditos a ejidatarios, comuneros y campesinos organizados; entre muchas otras.

Todos estos reclamos se conjugaban con las luchas por tener una mayor presencia en el sistema partidario nacional, por democratizar la vida del país; por acabar con los fraudes electorales del PRI, etcétera. Entre algunas de las movilizaciones que realizaron los movimientos y partidos de izquierda estuvieron los plantones ante las sedes de las autoridades competentes, manifestaciones masivas, mítines, bloqueos de arterias viales, etcétera. Los

diferentes movimientos que incluían a la izquierda, empero, eran sumamente heterogéneos imposibilitando su unión en un frente más organizado. Igualmente sufrieron de cooptación, cuando no de represión física directa.

Por lo que respecta a los grupos de derecha, se criticó la capacidad político-económica del gobierno para dirigir y sacar al país de la crisis; para realizar las reformas pertinentes y democratizar el sistema político, así como para promover la paz, la seguridad y la libertad. Como resultado de la creciente politización de estos grupos durante la década pasada, su lucha comenzó a ser más estructurada y a ganar más terreno durante la década de los 80. Si antes no jugaron un papel tan fundamental en cuestión de movilización social, a su alrededor fueron aglutinando los sectores que poco a poco se sintieron excluidos del "proyecto revolucionario" —como las capas medias—, así como aquellas fracciones que ya no concordaban con el grupo hegemónico —tanto internas como externas—.

En esta perspectiva, los grupos conservadores mexicanos se homogenizan, articulan y funden dinámica y orgánicamente entre sí y establecen alianzas tácitas con algunos grupos norteamericanos, con asociaciones y agrupaciones del sector privado y con algunas universidades y medios masivos de comunicación (*Ibid.*, 91).

Comenzaron a utilizar sus capitales e influencias para armar campañas de presión y desprestigio en contra del gobierno que incluían paros, amenazas de convocar a la crisis fugando sus capitales, la filtración de una serie de rumores —que efectivamente desestabilizaban al sistema—: plantones y manifestaciones frente a edificios públicos; amenazas de desobediencia cívica —como no pagar impuestos—; huelgas de hambre; ocupación de instancias oficiales y arterias de tránsito importantes, entre muchas otras. Protestaban por la corrupción, los constantes fraudes, el autoritarismo gubernamental, al mismo tiempo que por su tendencia —desde la lógica derechista— a solapar y hasta promover el desorden y los movimientos comunistas —los de izquierda—.

Así, si en un pasado su dispersión, poca madurez política y falta de concordancia en cuanto a intereses, les había impedido formar un bloque más fuerte, ahora estos grupos eran capaces de aliarse y ejercer una presión difícil de contener por parte del gobierno. Esta alianza, en general, pudo darse alrededor de dos ejes. El primero fue su protesta ante los constantes fraudes electorales. En efecto, en varios estados⁴ comenzaron a desatarse enfrentamientos

⁴ En Oaxaca en agosto de 1983, en Sinaloa en septiembre de 1984, en Chiapas en febrero de 1985; y, en 1986, en San Luis Potosí —en enero—, Puebla —en abril—, Chihuahua —en junio—, y Durango —en agosto—.

entre los grupos conservadores encabezados por el PAN³ y el PRI, en cuanto éste no soltaba prácticamente ninguna parcela de poder y no dudaba en poner en marcha todo su aparato institucional para salir victorioso en cada contienda electoral. Y el segundo, el tipo de medidas que el gobierno empezó a implementar con el objeto de enfrentar la crisis. En este sentido, una de las medidas que causó más escozor fue la nacionalización de la banca, que constituiría el punto de quiebre entre el Estado y el empresariado mexicano –en especial aquel ligado al área financiera–.

Entre los diferentes grupos que constituían la derecha, el empresariado fue el que asumió el liderazgo, al haberse constituido en un “sujeto dotado de una nueva voluntad política, un incipiente proyecto de nación y un nuevo discurso de probada eficacia” (Tirado, *op. cit.*; 117)⁴. Un discurso evidentemente identificado con el neoliberalismo, “en el cual el Estado, el gobierno y lo público quedan asociados con el autoritarismo, el presidencialismo y la corrupción gubernamental y contrapuestos a una sociedad civil de la que el empresariado se postula como el actor hegemónico” (*Idem*).

A su alrededor se aglutinaron todos aquellos sectores que creían en la libertad e iniciativa individual –contrapuesta a la imposición estatal–, en la democracia liberal, en los derechos naturales del hombre, en el respeto a la libre empresa y en la efectividad del libre mercado. Uno de estos sectores fueron las capas medias, que tuvieron la oportunidad de alcanzar mejores niveles de vida y educación durante todo el periodo revolucionario. Debido a “su ubicuidad social, el ‘capital educativo y cultural’ que poseen y el prestigio y la relevancia social de que gozan” (*Idem*) llegaron a constituir un receptor y a la vez un transmisor privilegiado de tal ideología, una base perfecta que dará impulso al nuevo modelo, que ante todo supone la desarticulación del sistema priista, y todo lo que ello implica.

Pero, además, a estos grupos de derecha se unió otro sector, un sector proveniente del interior del grupo hegemónico: la tecnoburocracia. Fue gracias a ella, a su posibilidad de acceso al

³ Era notable el incremento de su actividad política y presencia partidista, en especial alrededor del PAN, en donde se conjugaban sin mayor conflicto los intereses de empresarios, Iglesia, varios sectores de las capas medias, de sectores externos, y demás grupos conservadores. Cabe mencionar que fue en el norte del país donde comenzaron a ejercer cada vez mayor influencia.

⁴ Cabe mencionar que fue el empresariado más ligado al sector monopolístico nacional y extranjero, el que adoptó una actitud más intransigente hacia el gobierno. Aquel más ligado al Estado, que de hecho seguía dependiendo directamente de su cobijo para funcionar, adoptó una actitud más moderada o de hecho se negó a los cambios, ya que ello significaba la destrucción de las garantías que le permitían su existencia. Con respecto a las fracciones empresariales, ver cuadro 5.2 (Luna, 1991; 33).

poder, que se comenzaron a dar los primeros pasos hacia una reestructuración, y fue gracias a ella que se lograron socavar con más rapidez y eficiencia las bases de poder de la burocracia corporativa y la administrativa. Ello lo veremos con más detalle en el próximo capítulo.

Cuadro 5.2

Polo de apoyo al gobierno (Facción moderada)				Polo de oposición al gobierno (Facción radical)
I Apoyo incondicional	II Entre I/III	III Crítica moderada	IV Entre III/V	V Fuerte crítica
CNPF CNCFC	Canacinta	Conaco-Mex CNG AMIS CMHN	Concamin CCE Camco	Coparmex Concanaco

Siglas:

CNPF: Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad.

CNCFC: Confederación Nacional de Cámaras de Pequeño Comercio.

Canacinta: Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

Canaco-Mex: Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México.

CNG: Confederación Nacional Ganadera.

AMIS: Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro.

CMHN: Consejo Mexicano de Nombres de Negocios.

Concamin: Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.

CCE: Consejo Coordinador Empresarial.

Camco: Cámara Americana de Comercio.

Coparmex: Confederación Patronal de la República Mexicana.

Concanaco: Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Pues bien, la situación tanto económica como política y social, era completamente adversa al grupo hegemónico. Como vimos, una serie de factores confluyen para que desde diferentes sectores de la sociedad, fuera atacado por ser considerado -él y su proyecto- la causa de todos los males del país. Aunque las posiciones en torno al por qué de la crisis y la mejor alternativa para superarla fueran disímiles, la posición en torno a "quien era el responsable" parecía ser la misma: el Estado.

La falta de articulación y la represión que se estableció en torno a los grupos de izquierda, obrero, campesino y popular, impidieron que desde aquí surgiera una verdadera alternativa de cambio; un bloque popular opositor capaz de encabezar una lucha con un proyecto diferente y más incluyente. Mientras que la articulación más o menos coherente de los grupos de derecha, la gran fortaleza económica y política que adquirieron sus integrantes y las condiciones impuestas por la misma reestructuración nacional e internacional, derivaron en la conformación de un bloque capaz de ir afianzando poco a poco las bases para la completa

entrada del neoliberalismo al país. Ello por supuesto no se dio de manera pacífica o lineal. Tuvo que darse una tremenda pelea.

El desenvolvimiento general del sexenio de Miguel de la Madrid

Para 1984 se comenzó a observar una cierta recuperación lo que alentó a nuestro gobierno a pensar que las condiciones para una nueva etapa de expansión estaban a la vuelta. Sin embargo, para 1985 la presencia de ciertos indicadores señalaron que esa recuperación sólo era pasajera: el repunte de la inflación –que después de dos años de ajuste no había podido bajar menos del 60% anual-, la reanudación del ascenso de las tasas internas de interés, el incremento del déficit presupuestal motivado por el peso de la deuda interna y externa; el deterioro del superávit de la balanza comercial; la reducción del margen de subvaluación del peso y la aceleración de su deslizamiento junto con la continuación de fugas de capitales. La crisis seguía presente, situación que se agravaría con el advenimiento de un sismo que prácticamente destruyó la Ciudad de México en el mes de septiembre, y poco después, con la caída de los precios del petróleo, situación en gran parte propiciada por el mismo gobierno⁷.

Con el nuevo préstamo del FMI –por una cantidad de 52 200 millones de dólares- el gobierno intentó hacer frente a esos problemas. Debido a una precaria situación interna decidió dejar de lado el PIRE y aplicar uno nuevo llamado Programa de Aliento y Crecimiento –PAC-, un poco más moderado. El cual, por cierto, no logró recuperar el crecimiento de la economía –en 1987 sólo se creció 1.6%-, ni incentivar la inversión –se mantuvo estancada- o detener la inflación –la cual aumentó-.

El *crack* de la Bolsa de Valores de Nueva York en octubre de 1987 vendría a empeorar aún más la situación al afectar severamente la bolsa mexicana “que había llegado a las nubes impulsada por los manejos especulativos de los nuevos financieros de la casa de bolsa” (Guillén, *op. cit.*; 58). Inmediatamente se dio una fuga de capitales y de forma precipitada todos

⁷ Al respecto, “la pérdida de ingresos provocada por el nuevo colapso del mercado petrolero internacional –el cual fue motivado por la política anti-OPEP promovida por los países consumidores, dentro de los cuales México jugó un papel destacado elevando la oferta por fuera de esa organización-, fue muy severa. El precio promedio del crudo mexicano de exportación se derrumbó de 25.33 dólares por barril en 1985 a 11.86 dólares en 1986. En total se dejaron de percibir alrededor de 8 500 millones de dólares. Ello representó el 6.5% del PIB, el 40% de las exportaciones y el 26% de los ingresos del sector público” (Guillén, *op. cit.*: 57).

se volcaron al mercado cambiario, provocando el vaciamiento de las arcas nacionales y la abrupta devaluación del peso. Al terminar el año nuestra economía se encontraba completamente estancada, la inflación anual llegaba al 159% y las tasas de interés llegaban a niveles históricos, provocando efectos severos en la situación financiera tanto del gobierno como de las empresas. Empero, si la situación de la economía era un caos, la situación de los banqueros no pudo ser mejor. Los que pudieron vender sus acciones a tiempo realizaron enormes ganancias y los que se quedaron al final del boom no perdieron tanto. Su poder frente al Estado se seguía afianzando.

Todo el sexenio en general se caracterizó por crear una serie de condiciones adversas para el país, mas no así para los grupos capitalistas más poderosos. Nuestra economía seguía estancada al no implementarse medidas que tendieran a resarcir los problemas estructurales de nuestra modalidad de desarrollo anterior y al tratar, en cambio, de impulsar una completamente opuesta, de manera radical y sin contemplaciones.

La sumisión que mostraron nuestros gobernantes ante las presiones externas, impidió crear las bases de una nueva acumulación nacional más sólida y no tan dependiente, en tanto que sentaron las bases para la implantación de un sistema que garantiza la exportación neta de nuestros recursos al exterior⁸, lo cual nos sume en la miseria. Para el término del sexenio de Miguel de la Madrid, la situación era desastrosa en todos los aspectos, tanto en el económico como en el social y el político –estancamiento, desempleo, inflación, pérdida adquisitiva, baja en los niveles salariales, pérdida de legitimidad, conflictos sociales de todo tipo, etcétera-. El costo social del ajuste estaba resultando muy caro, lo cual le habría de cobrar la población al grupo gobernante al votar por la oposición. Sin embargo, haciendo uso de todo el aparato institucional, éste habría de mantener el poder e iniciar así una nueva etapa en la cual el proceso de ajuste se ensancharía.

⁸ En el lapso de 1983-1987 se acumuló un superávit de 47 900 millones de dólares. Pues en el mismo lapso la transferencia neta de recursos al exterior fue de 62 300 millones, "cifra que representaba más del 7% del PIB" (*Ibid*; 59).

Capítulo 6

La consolidación del modelo neoliberal (1988-2000)

La aplicación de las reformas neoliberales continúa

Al llegar el año de 1988, la situación general de la población era bastante precaria. A casi un decenio de haber iniciado el proceso de reestructuración, no había experimentado más que bajas constantes y radicales en sus niveles de vida. Salvo en una pequeña minoría, existía un evidente cansancio y malestar; cansancio y malestar que se manifestó claramente en las elecciones celebradas en ese año, en las cuales por primera vez en cincuenta años el PRI habría de perder ante un candidato de la oposición: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, representante de la Corriente Democrática del PRI, y más tarde, fundador del PRD –Partido de la Revolución Democrática–.

Cuauhtémoc Cárdenas junto con Porfirio Muñoz Ledo y otros conocidos priístas, habían iniciado tiempo atrás un movimiento al interior del PRI –la Corriente Democrática– que apelaba a la democratización y renovación del sistema partido-Estado-gobierno, así como a la recuperación de los fundamentos del proyecto de la Revolución Mexicana. Ante la incapacidad del partido de reformarse y la creciente influencia que ejercía la fracción de la tecnoburocracia en su seno, decidieron separarse e iniciar un movimiento alternativo, en el cual se aglutinarían todas aquellas capas que aún creían en los viejos preceptos revolucionarios, pero estaban decepcionadas frente al rumbo que estaban tomando sus dirigentes.

El triunfo de Cárdenas nunca fue reconocido, antes bien el gobierno saliente, aprovechando el pleno control que ejercía sobre las autoridades electorales, decretó una “caída” en el sistema, e impuso a su candidato: Carlos Salinas de Gortari, otrora secretario de Programación y Presupuesto, como el nuevo presidente. Lo anterior tuvo serias consecuencias: derivó en una

fuerte lucha al interior del propio grupo gobernante, agrupado en el PRI; en el aceleramiento del proceso de recomposición del bloque de poder –en el cual la tecnoburocracia habría de ganar terreno frente a la fracción corporativista-; así como la exacerbación de los descontentos sociales.

La extracción tecnoburocrática de Carlos Salinas de Gortari no era un secreto. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid fue uno de los principales promotores e instrumentadores de las políticas neoliberales, lo cual se reflejó en su participación destacada en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y del PIRE, así como en su desenvolvimiento al frente de la Secretaría de Programación y Presupuesto. A pesar del gran malestar provocado por la implementación de las políticas neoliberales, y su evidente fracaso en cuestión económica, el nuevo presidente elaboró un programa que tendía a profundizar la reestructuración, basándose en el cumplimiento de tres objetivos principalmente: la recuperación del crecimiento sostenido de la economía, la estabilidad de precios y la recuperación de las condiciones de vida de los mexicanos.

El contexto en el cual Salinas tomó el poder –caracterizado por una fuerte crisis económica; una crisis política, expresada en la división de la élite gobernante y en su deslegitimación como presidente; y una social, manifiesta en la proliferación de diversos movimientos-, le imponía una labor de convencimiento a partir de la cual pudiera deslindarse de las acciones anteriormente tomadas –por haber resultado desastrosas para el país-, pero a la vez, que le posibilitara promover el cambio que en su opinión parecía correcto. Cambio que implicaba seguir adelante con el proyecto neoliberal.

Como estrategia, procuró evitar el calificativo de neoliberal para su gobierno, afirmando –en un discurso pronunciado en el 63° aniversario del PRI-, que dicho modelo “no enarbola nuestras luchas ni sintetiza nuestras ideas, ni guía nuestras decisiones”. En cambio habló de “liberalismo social”, calificativo eufemístico a partir del cual comenzó a designar la nueva ideología que habría de suplir al nacionalismo revolucionario.

El nuevo régimen, con este calificativo quería situarse entre dos posiciones radicales definidas por el propio presidente como neoliberalismo posesivo y estatismo absorbente. Pretendía alejarse de modelos aplicados en países como Chile –por su radicalidad y voracidad-, a la vez que de gobiernos identificados con el “populismo” –por su parasitismo y tendencia al autoritarismo-, afirmando que los preceptos liberales clásicos podían ser combinados con una

política bien estructurada tendiente a responder a las necesidades de justicia social. Mediante esta táctica –que pondría en marcha en el Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL– habría de lograr grandes márgenes de legitimidad y el avance del modelo neoliberal, al combinar el proceso de reestructuración con el otorgamiento de importantes beneficios sociales, como veremos posteriormente.

Para Salinas era importante destacar la necesidad y, antes bien, los beneficios que ofrecía el adoptar una política liberal, asegurando que no iba a hacer caso omiso de los errores cometidos en el pasado. Con la adopción de su liberalismo social, tenía la intención de recuperar las bases del sistema –obreros, campesinos y sector popular–, sin las cuales no podía llevar a cabo la transición hacia el neoliberalismo. Pero a la vez, quería sortearse la simpatía de sus contrapartes tanto en el bloque de poder como al interior de su propio grupo. Salinas pronto comprendió que si quería continuar con el proceso de reestructuración, tenía que recuperar, al mismo tiempo, la confianza de los diferentes sectores de la sociedad.

En cuestión económica, implementó un programa de estabilización económica, basado en pactos y en la concertación de los principales agentes sociales. Comenzó por retomar el Pacto de Solidaridad Económica –PSE– firmado anteriormente a raíz de la fuerte crisis financiera que estalló en 1987. El objetivo principal de ese pacto había sido controlar a toda costa un índice de inflación bastante alarmante, de 159%. A partir de su firma, el gobierno federal y los tres sectores clave del sistema: empresarios, obreros y campesinos, acordaron poner coto a la inflación por medio de ajustes planeados a las diferentes variables que pudieran hacerla repuntar. En otras palabras, acordaron mantener anclados los precios clave de la economía, tales como el tipo de cambio, los salarios o las tarifas del sector público, para que la inflación bajara y se mantuviera en niveles controlables.

En principio, el pacto logró avances rápidos en la moderación de la inflación. Así, “la tasa anual de crecimiento de los precios al consumidor se redujo sustancialmente, al pasar de 159% en 1987 a 51.7% en 1988 y a 19.7% en 1989” (Guillén, *op. cit.*; 69). El control de la inflación tuvo efectos positivos en la economía, ya que al bajar los precios fue posible que también bajaran las tasas nominales de interés, lo que a su vez permitió reactivar la producción, que generaba empleos, con lo cual se reactivaba el consumo, y al haber consumo, habría producción.

Como señalaron varios autores, entre ellos Guillén, la implementación de los pactos pudo llevarse a cabo gracias a la existencia de un aparato corporativo sumamente eficaz en cuestión de disciplinamiento de las bases, ya que las decisiones simplemente eran tomadas en las cúpulas y llevadas a cabo sin mayor cuestionamiento. En este sentido, la implementación de medidas de tipo "político" estaba demostrando los límites de la aseveración neoliberal de que la inflación era una cuestión puramente monetaria, por lo que su solución solo podría provenir del manejo de variables puramente monetarias. Hasta este momento se habían seguido al pie de la letra las recomendaciones de un Friedman y, sin embargo, como vimos, no se observaban los resultados prometidos.

Las políticas antiinflacionarias se reforzaron con otras reformas implementadas por la administración salinista. Entre ellas estuvo la aplicación de una estricta disciplina presupuestaria a través de la cual se redujo aún más el gasto social, así como el mejoramiento de los sistemas de recaudación fiscal ampliando el número de contribuyentes y combatiendo la evasión. Al mismo tiempo que la realineación de los precios y tarifas del sector público acercándolos a sus referentes internacionales; y la continuación del proceso de privatización y/o desincorporación. Medidas todas ellas, enfocadas a crear un superávit financiero. Con respecto a este punto, privatizó en 1990 los bancos comerciales, y reformó la clasificación de las áreas estratégicas para que los inversionistas privados pudieran invertir en áreas que antes le correspondían al Estado. Con ello pudo vender TELMEX, por ejemplo.

De estas operaciones sacó recursos para continuar financiando el cuantioso desequilibrio de la balanza comercial, y así seguir manteniendo un ambiente de confianza ante los capitales externos y nuestros acreedores. Las operaciones de venta durante esta administración, representaron 64 815 millones de pesos, en otras palabras, el 7.6% del PIB, el 75% del gasto total del sector paraestatal y el 17% de la deuda externa total del país (*Ibid.*, 104). Para 1994 el sector paraestatal sólo contaba con 209 entidades y quedaban 50 operaciones de desincorporación pendientes. Cabe mencionar que las ventas del sector estatal tendieron en todo momento a beneficiar al grupo monopolístico financiero, en cuanto ellos contaban con los suficientes recursos para adquirirlas y, además, con la suficiente capacidad de presión y negociación como para obtener las mejores condiciones en su compra.

Salinas igualmente comprendió la importancia de renegociar la deuda en condiciones que permitieran al país quedarse con parte del superávit creado, ya que hasta ese momento la constante exportación de capitales había fomentado el estancamiento. La existencia de un

ambiente internacional favorable, caracterizado por contar con amplias reservas monetarias; el cambio de actitud del FMI, en cuanto su política de "pago a toda costa" estaba causando serios estragos en los países deudores tercermundistas –lo que era grave porque a éstos les impedía seguir cubriendo sus compromisos–; y la plena disponibilidad mostrada por parte de nuestro presidente de seguir adelante con la reestructuración, fueron factores que alentaron a nuestros acreedores a acordar un nuevo paquete a partir del cual, efectivamente, se redujo la transferencia de capitales al exterior y se arregló un nuevo préstamo, esta vez por 4 135 millones de dólares.

Los términos bajo los cuales se arregló la renegociación –englobados en el llamado Plan Brady¹–, en general, tuvieron consecuencias positivas ya que provocaron en los agentes económicos internos la intención de repatriar sus capitales y/o, en el caso de los extranjeros, invertir en el país. Junto con la puesta en marcha de los pactos, tendieron a crear un ambiente de estabilidad, lo cual habría de sentar las bases –un tanto volátiles– para la recuperación económica futura:

No obstante ello, la principal virtud de la renegociación efectuada en el marco del Plan Brady, fue el impacto favorable que provocó en las expectativas de los agentes económicos. Combinada con el éxito inicial del Pacto como instrumento de estabilización de precios y con la "venta" afortunada de las reformas económicas futuras –privatización futura, TLCAN, etcétera–, el acuerdo reforzó la estabilización y apuntaló la recuperación económica, al alentar la repatriación de capitales y al favorecer el ingreso de capitales externos, lo que, a su vez, eliminó la transferencia neta de capital al exterior (*Ibid.*, 81).

Con el objeto de garantizar un futuro crecimiento y financiar el déficit en cuenta corriente, se planteó como prerrogativa establecer un ambiente adecuado para la captación de inversión extranjera, es decir, se procedió a continuar con la liberación/apertura indiscriminada y unilateral de nuestra economía.

De acuerdo con la lógica salinista, "la inversión extranjera directa, complementaria de la nacional, es benéfica por cuatro razones principales: genera empleos, directos e indirectos, permanentes y bien remunerados; provee al país de recursos frescos para el sano financiamiento de las empresas; aporta tecnologías modernas a la planta industrial y alienta el esfuerzo exportador del país" (Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994; 88). Se planteó, además, que la entrada de inversiones directas extranjeras sería un buen aliciente para controlar los precios internos y así contribuir al abatimiento del proceso inflacionario, por lo

¹ Para mayor información sobre el Plan Brady, ver Guillén, *op. cit.*; 77.

que se continuó reduciendo el número de categorías arancelarias –de once que existían en 1986 a cinco- y el número de fracciones sujetas a permisos previos se redujo al mínimo, de tal manera que para 1993 sólo 101 fracciones arancelarias estaban sujetas a permisos, “lo que representaba el 5% de las importaciones” (Guillén, *op. cit.*; 82).

Al mismo tiempo, con el objeto de atraer las inversiones en condiciones ventajosas, en especial frente a un contexto internacional crecientemente competitivo, se revisó y modificó sustancialmente el Reglamento de Inversión Extranjera. Ya Miguel de la Madrid lo había revisado y lo había cambiado. Ahora Salinas continuaba con el proceso permitiendo que la inversión extranjera directa participara sin ninguna restricción en actividades que representaran el 66% del producto interno bruto, controlando hasta el 100% del capital.

De la misma manera, se le permitió participar en el mercado bursátil, garantizándole el mismo trato que a los inversionistas nacionales, así como la libre convertibilidad de las monedas para la remisión de utilidades y dividendos, pago de intereses en el exterior y regalías por asistencia técnica (*Ibid*; 93). Se abrieron los bancos, pero se planteó que su acceso al mercado sería a partir de empresas subsidiarias, y siempre y cuando su presencia no rebasara más del 15% del mercado nacional.

Las fabulosas oportunidades de inversión siguieron atrayendo en cantidades bastante considerables a los capitales extranjeros, de tal manera que al poco tiempo México constituía uno de los principales receptores a nivel internacional, compitiendo con países como China, Taiwán, Corea, entre otros. Incluso, a tal grado fluyeron, que ya para 1992, la meta programada para todo el sexenio había sido sobrepasada en mucho: en el periodo 1989-1994 se estimaba recibir en total 24 000 millones de dólares, pero se recibió la nada despreciable cantidad de 101 935 millones de dólares (*Ibid*; 95).

Cabe destacar que durante el sexenio la presencia norteamericana se acentuó –contribuyó con el 64.8% del total- al igual que nuestra dependencia de los capitales externos, ya que llegaron a representar prácticamente la mitad de nuestras exportaciones –el 43.5%. En cuanto a empleos se refiere, sólo contribuyeron a crear el 15.1% del total de los empleos permanentes registrados en el IMSS.

En cuanto a la apertura del sistema financiero, se dio en tres etapas: la primera consistió en reformar –eliminar- el esquema regulatorio anterior, basado en tasas de interés fijadas por las

autoridades, alto encaje legal y la existencia de cajones para la canalización del crédito a las distintas actividades económicas. En la segunda etapa se privatizó la banca comercial, para lo cual se reformó todo el bagaje legal anterior de tal manera que se establecieran las bases para la formación de grupos financieros y se creara una banca universal. Y la tercera se dio a partir de la firma del Tratado, por medio del cual se permitía la entrada gradual de inversionistas extranjeros, y se otorgaba autonomía al Banco de México, "con lo que se pretendía dar mayor independencia al manejo de las políticas monetaria y financiera, así como otorgar confianza a los inversionistas sobre la prioridad que se concedía a la estabilización de la economía" (*Ibid*; 109).

Asimismo, el proceso de apertura al exterior incluía como eje fundamental, la firma de diversos tratados/acuerdos de libre comercio con diferentes países como: Estados Unidos y Canadá –para conformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte–; la Comunidad Europea; Chile; Colombia y Venezuela –con los cuales formaría el Grupo de los Tres–; Costa Rica, Bolivia y otros países de Centroamérica. Para Carlos Salinas, la firma de un tratado con América del Norte llegó a constituir el proyecto más importante de su administración. Según sus promotores, constituiría una de las mejores oportunidades para el país de insertarse en el proceso de la globalización: abriría importantes opciones a la exportación de nuestras mercancías, tendríamos un mejor acceso a lo último en tecnología, así como a medios de producción más modernos. Atraería en mayores cantidades flujos de inversión externa, lo cual derivaría en el mejor financiamiento del creciente déficit de la balanza comercial, y elevaría los niveles de empleo.

La decisión de firmar el tratado coincidía definitivamente con los intereses del grupo financiero monopolístico nacional, con el capital financiero internacional, con las empresas transnacionales embarcadas en el proceso de globalización, con el empresariado mexicano que pudo adaptarse a la apertura comercial, y en sí con aquellos sectores simpatizantes del modelo neoliberal.

Las negociaciones sólo duraron dos años, y al parecer los dirigentes mexicanos no tomaron muy en serio las advertencias de ponderar las asimetrías de las economías participantes, así como tampoco la necesidad de establecer reglas equitativas. Prevalcieron en general, el punto de vista y los intereses de Estados Unidos, en tanto que nuestra inserción fue del todo subordinada y desigual: mientras que México tendió a liberar prácticamente toda su economía, los Estados Unidos se reservaron la aplicación caprichosa de barreras no arancelarias y la

“inversión” de cualquier excusa –como el veto o la entrada a menor costo de nuestro atún a suelo estadounidense por no garantizar que en su pesca no se capturaran accidentalmente delfines- para no dejar pasar nuestros productos a pesar de las condiciones ya pactadas.

Asimismo, nuestro proceso de reestructuración ha implicado prácticamente el abandono de todo fomento a la producción, tanto agropecuaria como industrial –a excepción de algunos rubros donde participa directamente el grupo monopólico financiero-, mientras que en los que se convertirían en nuestros socios se sigue apoyando. Los subsidios, por ejemplo al campo, en vez de bajar han aumentado, en cambio aquí se ha abandonado por completo. Además, el nivel de sus industrias y de su producción, tanto cualitativa como cuantitativamente hablando, no tiene punto de comparación: los niveles tecnológicos y de sofisticación hacen que su producción sea superior. Nuestra planta productiva, en cambio es en su mayoría, de tercera.

El establecimiento de condiciones que tendieran a sobrellevar y antes bien ir solventando tales asimetrías no se hizo presente. No se desarrollaron planes que verdaderamente protegieran a los que iban a resultar afectados por el tratado, que en general fueron las mayorías: las pequeñas, medianas y micro empresas; y en especial el campo: “Este sector se encuentra en una situación de postración desde mediados de los años sesenta, y, por lo tanto, no está en condiciones de competir con los productores de Estados Unidos y Canadá, salvo en el caso de algunos productos donde México tiene ventajas naturales” (*Ibid*; 89). Más que representar una extraordinaria oportunidad de insertarnos y aprovechar todo lo que nos ofrece la globalización –como afirmaron nuestros gobernantes en relación a la firma del tratado-, ha representado:

[...] La culminación de un largo proceso histórico de integración silenciosa de los sistemas productivos de los tres países firmantes, bajo la hegemonía de los Estados Unidos. Para este último país, la firma de un acuerdo con México, obedeció fundamentalmente a razones estratégicas de seguridad nacional. Con su aprobación, se buscaba asegurar, entre otras cosas, la estabilidad política de su frontera sur; lograr que México se mantuviera en el camino de la reforma neoliberal, mediante la aplicación de políticas favorables a los intereses norteamericanos; garantizar una zona segura y cercana de abasto de crudo; y aminorar el flujo de inmigrantes mexicanos (*Ibid*; 86).

Como resultado de estas reformas, se pudo controlar efectivamente la inflación –principal objetivo del gobierno salinista-, permitiendo la reanudación de nuestro crecimiento económico, pero a costa de varias “deformaciones” del sistema, y de un cada vez mayor déficit en la cuenta corriente. Con respecto a los pactos, por ejemplo, en vez de constituir un mecanismo de transición –como lo era-, es decir, un mecanismo que permitiera establecer las condiciones necesarias para la entrada de otra etapa, más sólida, constituyó un mecanismo

permanente de control, de tal manera que "la economía mexicana no logró mantener la estabilidad de precios, al margen de las anclas" (*Ibid*, 74). Así, cada vez que repuntaba –como consecuencia lógica de una gradual recuperación–, en vez de avanzar aplicando medidas convenientes, se procedía aplicando medidas que sólo tendían a aplacar el problema indirecta y artificialmente, provocando el desencadenamiento, a su vez, de otros problemas –como el deterioro directo y aún más rápido de los niveles de vida de la población, debido a la contención de los salarios (los cuales registraron una contracción real del 73.4%)–.

Al mismo tiempo, con el objeto de contener la inflación, se tendió a sobrevaluar el peso, controlando los deslizamientos de la moneda a conveniencia, alejándose de un nivel cercano al de "equilibrio". En el marco de una apertura comercial acelerada y sin el contrapeso de una política industrial, esta sobrevaluación tendió a acentuar el déficit de la balanza de cuenta corriente, entre otras cosas por que se desató una ola importadora. El déficit externo, a su vez, se tendió a financiar por medio del creciente ingreso de capitales externos, sobre todo de capitales especulativos de corto plazo. Una vez que estos flujos dejaron de percibir un ambiente propicio para obtener ganancias fáciles, tendieron a abandonar al país, provocando serios desequilibrios, y, más tarde, en 1994, una grave crisis.

La apertura de nuestra economía y del sistema financiero, igualmente causó graves estragos: atrajo capitales en cantidades nunca antes vistas, pero éstos no contribuyeron a crear una base sólida para iniciar una nueva etapa de crecimiento, todo lo contrario, tendieron a desestabilizar el sistema. Las enormes ventajas ofrecidas a la entrada de capitales extranjeros y los pocos controles que se establecieron en torno a sus operaciones, posibilitaron que en su mayoría se dirigieran al área financiera en detrimento del sector productivo; y los que no se fueron directamente al área financiera se dedicaron, en su mayoría, a la *compra de activos existentes* enfocados a la exportación, y a los sectores comercial y de servicios, por lo que su impacto en el crecimiento económico y en la modernización de la planta productiva fue muy limitado. Ello tendió a sentar las bases de nuestra dinámica de desarrollo, en una base sumamente volátil y precaria.

La reforma salinista, de esta manera, logró cumplir cabalmente los objetivos tanto del grupo financiero monopolístico nacional como del internacional: modernizó, liberalizó y desreguló el sistema financiero mexicano, "con el fin de que éste se preparara para operar en las nuevas condiciones de globalización imperantes en el mundo" (*Ibid*, 110). Su ahorro se elevó, como porcentaje del PIB, de 30% en 1988 a 50% en 1994, y su incidencia en el financiamiento del

sector privado se elevó del 14% al 35% del PIB. Las condiciones bajo las cuales se realizó, sin embargo, no hicieron más que abonar el campo para provocar una mayor fragilidad del sistema ante los capitales "golondrinos", y fortalecer su presencia como una de las fracciones más poderosas del país, capaz de ejercer una efectiva presión en la dirección de las políticas económicas.

Hasta este momento y desde el gobierno de Miguel de la Madrid, todas las medidas de reestructuración tendieron a fortalecer al grupo monopolístico financiero tanto nacional como internacional, pero también a la tecnocracia dentro del gobierno. Tendieron a desgastar las condiciones a partir de las cuales se reproducía la dominación del grupo hegemónico posrevolucionario y a reforzar aquellas sobre las cuales se iba a reproducir la de los nuevos grupos pro-neoliberales. Entre los intereses nacionales y extranjeros, y los de la tecnoburocracia, así, se estableció una red de intereses muy estrecha, la cual guió el proceso de reestructuración por un camino que directamente sentó las bases de su enriquecimiento. El movimiento de derecha al que nos referimos anteriormente habría de constituir una base segura a este proceso.

Salinas tal vez como ningún otro actor, demostró ser todo un maestro para encausar la lucha política por ese sendero. Supo aprovechar las mismas condiciones y los mismos aparatos que le habían servido al grupo hegemónico a garantizar su poder, para quitárselo y afianzar las bases para la configuración de un nuevo bloque. Proceso que continuaría con su sucesor: Ernesto Zedillo, hasta desplazar al grupo hegemónico de su principal fuente de poder: la presidencia.

El gradual desplazamiento del grupo hegemónico en el bloque de poder

La reestructuración económica estaba afectando profundamente las bases sobre las cuales se venía reproduciendo la dominación del grupo hegemónico que, a grandes rasgos, giraba en torno a un corporativismo incluyente y a la formación de coaliciones redistributivas². El régimen posrevolucionario se basaba en una alianza entre los diferentes grupos sociales, a

² Es decir, la inclusión de los diferentes sectores sociales en el aparato oficial a partir de la concesión de recursos económicos o puestos gubernamentales.

partir de la cual todos obtenían ciertas concesiones a cambio de una adhesión más o menos sumisa y fiel al sistema. Como destaca Dresser:

La existencia de estructuras corporativas otorgaba el control al Estado, pero también beneficiaba a los diversos sectores. Gracias a las negociaciones pragmáticas y a la plenitud de recursos, siempre existía la posibilidad de que todos obtuvieran al menos algún beneficio (*op. cit.*; 216).

El proceso de reestructuración, en cambio, imponía una lógica totalmente opuesta. Por tal motivo, al ir disminuyendo las concesiones, la legitimidad del sistema fue decayendo, en cuanto éstas constituían una de las bases fundamentales de su reproducción. Las capas sociales acostumbradas a recibir a cambio de dar, al ser prácticamente obligadas a sólo dar sin poder recibir —y antes bien, soportar que día a día sus niveles de vida se redujeran—, fueron perdiendo fidelidad y se fueron uniendo a las filas de los que ya anteriormente eran “disidentes”. Y es que era lógico, el discurso de la Revolución Mexicana, ni siquiera en la retórica, se acoplaba a las nuevas condiciones de la clase gobernante. A los movimientos de descontento que vimos anteriormente, por lo tanto, se unieron otros que pugnaban por el regreso a los fundamentos del pacto revolucionario.

La reestructuración a la vez que creó serios problemas en las bases, desató serios conflictos al interior del grupo hegemónico, en cuanto obligaba a sus dirigentes —en especial a los de raíces corporativistas— a adecuarse a una lógica que afectaba directamente sus parcelas de poder. En efecto, los líderes de las diferentes fracciones, acostumbrados a designar y obtener puestos públicos o recursos económicos a partir de sus intereses y las diferentes negociaciones que entablaban, lejos de lo que establecieran las leyes, con la reestructuración, se vieron en la necesidad de lidiar con un grupo que pugnaba por el manejo del Estado en una forma más “racional” y austera: la tecnoburocracia.

Se toparon, así, con un grupo que puso en marcha varias reformas que acotaban seriamente su acceso a los recursos y puestos públicos por medio de los canales tradicionales y, en cambio, les imponían el cumplimiento de ciertas reglas. Ejemplo de ello, fue el intento de llevar a cabo un proceso de descentralización, mediante el cual se pretendía crear un nuevo federalismo —delegando funciones, recursos y responsabilidades a los estados e instancias locales—; la obligatoriedad de que los municipios definiesen sus proyectos de desarrollo y gastos anuales para obtener capital, en vez de proporcionarles fondos que serían utilizados a discreción de las autoridades locales; o la disposición de asignar los contratos al sindicato de PEMEX, por

medio de un concurso con el objeto de controlar los costos y permitir la participación del sector privado.

Los conflictos también devinieron en cuanto la fracción corporativista se vio hasta cierto punto desplazada de los puestos que incidían directamente en la toma de decisiones sobre el rumbo del país. Ello se hizo notar en la designación de los personajes que habrían de participar en el gabinete presidencial y en las principales secretarías estatales. En efecto, a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, habrían de prevalecer economistas, administradores o financieros, gente formada a partir de una visión muy diferente a la tradicional fracción corporativista o administrativa. Así, "de los 14 miembros iniciales de su gabinete, 11 habían consolidado sus carreras en cargos administrativos y sólo tres de ellos habían iniciado su vida política en el PRI" (*Ibid*; 222).

Evidentemente el presidente se hizo rodear de gente que compartía con él un diagnóstico semejante sobre la situación y las medidas que habrían de emprenderse en el país, sin importar la erosión que ello causaba a la alianza histórica entre el poder ejecutivo, el partido oficial y las bases obrera, campesina y popular. Se estaba llevando a cabo un paulatino desplazamiento del núcleo de la toma de decisiones, de las instancias políticas del Estado -ubicadas en la Secretaría de Gobernación y en el PRI-, a las instancias de corte económico y de planeación -ubicadas en la Secretaría de Hacienda y de Economía-. Lo anterior debido a que en opinión de la tecnoburocracia, la política y la economía debían ser rescatadas del proteccionismo y del populismo, que no hacían más que moverse a partir de la demagogia y la corrupción, ocasionando serios desperfectos en el sistema, que se traducían en estancamiento.

La superación de la crisis implicaba para ellos, alejarse de las antiguas formas de operar del régimen posrevolucionario, e implementar reformas más "racionales" y funcionales. En palabras de Dresser, "el ascenso del equipo de De la Madrid al poder significaba el desplazamiento de un importante sector de la clase política, es decir, las fracciones dentro del PRI, los sindicatos y la burocracia que se habían opuesto a su candidatura" (*Ibid*; 223) y el ascenso de la fracción tecnoburocrática, formada en su mayoría en el extranjero, poco identificada con la ideología de la Revolución Mexicana y con las formas de operar de la clase corporativista³, a la vez que más acorde con la visión neoliberal.

³ Efectivamente, como se quejaba un funcionario priísta: "Los tecnócratas accedieron a la clase política no a través de la ancha puerta de la lucha política, sino de la reducida puerta de la experiencia técnica; gracias a golpes en las cúpulas y no a la movilización de masas; gracias a cargos administrativos en el

Se desató así, una severa crisis política al interior del grupo dominante, expresada en una creciente ruptura entre las esferas administrativas del gobierno —entre el ejecutivo y su gabinete, y el PRI—; y en la fragmentación del partido en varias corrientes: por un lado la neocardenista, que terminaría por salirse y formar un movimiento de oposición; la de los “renos” —renovadores, entre los cuales se ubicaba la tecnoburocracia—, que desde su interior apelaban precisamente por la renovación del sistema; y, por otro, la de los “dinos” —dinosaurios— que no estaban dispuestos a abandonar la forma tradicional de operar del sistema, en cuanto constituía su *modus vivendi* por excelencia.

Para los “dinos”, las medidas de reestructuración habían constituido “un asalto directo” en cuanto tendieron a atacar frontalmente formas como el patronazgo de la máquina sindical, los compadrazgos, cacicazgos y el clientelismo. Es decir, sus principales canales de poder. Como declarara Dresser, “en nombre de la reestructuración económica y la continuidad, De la Madrid rompió el tradicional equilibrio de fuerzas en el interior de la clase política” revelando la multiplicidad de fuerzas contendientes dentro del grupo hegemónico en el bloque de poder —agrupadas en el PRI— (*Ibid*; 226).

Para 1988 con la sucesión presidencial en puerta, el gobierno y su partido vivían una crisis política en todos sus frentes: la reestructuración habían socavado su capacidad de respuesta frente a las demandas de sus bases; las diferentes fracciones estaban en lucha y su principal árbitro: el presidente, era incapaz de solucionar esos problemas satisfactoriamente; y los movimientos de oposición se encontraban en pleno auge.

Los movimientos de oposición, a grandes rasgos, giraban entorno a dos vertientes: la representada por la derecha —con el PAN a la cabeza—, y la representada por un movimiento que podríamos ubicar en el centro-izquierda. Con respecto a esta segunda vertiente, en ese año se pudo conformar un movimiento social bastante amplio alrededor del Frente Democrático Nacional, presidido por la corriente neocardenista. Cárdenas había expresado en varios discursos su intención de volver “al México que fue”, defendiendo la intervención del Estado en la economía y la promoción de la justicia social, con lo cual se pudo granjear seguidores de “entre grupos que durante los últimos 20 años se habían venido organizando fuera de la máquina corporativista del PRI; y entre los sectores que desde 1982 habían sufrido el impacto de la crisis económica” (*Idem*). Estos sectores provenían, en su mayoría, tanto del campo

gabinete y no a discursos en las plazas y en el campo” (Entrevista realizada por Denise Dresser el 6 de septiembre de 1989. Citada en *Ibid*; 223)

como de la ciudad; de capas como los intelectuales, estudiantes universitarios, trabajadores, residentes de barrios marginados, así como organizaciones que anteriormente se habían rehusado a participar en las elecciones.

Las elecciones de 1988, constituyeron un importante catalizador del sentir social al ganar la coalición encabezada por el movimiento neocardenista. La sociedad mexicana estaba dando la espalda tanto a la política del gobierno como al movimiento de derecha, con lo cual se dejaba en claro que lo que estaba en crisis no era la ideología y el proyecto de la Revolución Mexicana en sí, sino la forma en la cual la élite política se venía manejando desde hacía cincuenta años. Aún se creía en los preceptos de nación, soberanía, justicia social y en la intervención del Estado en la definición del rumbo nacional. Por lo que el proyecto de la derecha no era una alternativa que la gente quisiera, como señalara Juan Castaingts:

El pueblo en general no podía identificarse con el mito del 'mercado' que le ofrecían las clases altas y medias [...] Por el contrario, Cárdenas era la encarnación de los viejos operadores míticos en términos de una esperanza nueva. [En él encontró] el signo reivindicativo que tanto necesitaba. No podía seguir al PAN, que solicitaba la reducción aún más drástica del Estado. No podía seguir al PRI, con el cual había perdido su identidad personal y social. Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del nacionalizador del petróleo constituía la identidad simbólica adecuada; reivindicaba al Estado y reclamaba la salvación de la nación (1994; 122).

Representaba, en pocas palabras, el reclamo de la sociedad por un cambio democrático, cambio que prometía ser llevado a cabo dentro de la continuidad del proyecto revolucionario. Cambio, cabe mencionar, que nunca habría de darse, porque el Estado aún contaba con todo el poder de poner en marcha su aparato institucional para garantizar la continuación del partido en el gobierno.

Al mismo tiempo, el PRI recibió serios reveses en las elecciones para la renovación de la Cámara de Diputados, al perder la mayoría necesaria para realizar cualquier reforma. Salinas de Gortari habría de sufrir por ello en los primeros años de su sexenio porque no pudo llevar a cabo, por sí mismo, las reformas que se le hacían urgentes: reprivatizar la banca, reformar el artículo 27 constitucional y modernizar el sistema electoral. A diferencia de todos sus predecesores, tuvo que establecer alianzas, específicamente con el PAN para continuar con el proceso de reestructuración.

En este sentido, Carlos Salinas fue lo suficientemente inteligente para hacer uso a su favor, del mismo aparato estatal que anteriormente fuera atacado, y comenzar así a construir su

legitimidad. Una de las primeras medidas que tomó fue el restablecer el tradicional equilibrio en su gabinete presidencial e incorporar a los viejos priistas en su gobierno, incluso a funcionarios cercanos a figuras políticas que habían competido por la presidencia. Lo anterior le permitió reconstruir de cierta manera los lazos rotos entre la vieja élite política y el nuevo grupo en ascenso, y ganar así una importante base de apoyo dentro de su partido.

También se dio a la tarea de construir legitimidad entre las bases sociales, haciendo uso de los fuertes lazos corporativistas que aún unían a las organizaciones populares, sindicales y campesinas al partido. Esta alianza le permitió llevar a cabo medidas "antipopulistas" como los pactos antiinflacionarios y las contenciones salariales sin causar el choque que la antigua administración provocó.

A la par, hizo uso de un discurso de modernización y democratización tanto al interior del partido como del Estado. Comenzó por realizar ciertas reformas al sistema electoral, y por presionar a los líderes sectoriales para que crearan canales de participación efectiva entre las bases, "ahora que aparentemente la sociedad civil había despertado" (*Idem*). En este sentido, entre el grupo hegemónico comenzó a crearse conciencia de la necesidad de instituir cambios en el proceso de selección de sus candidatos, líderes y administradores; cambios que promovieran la elección de líderes más representativos e identificados con sus bases.

También comenzó a atacar directamente a ciertos líderes enraizados en algunos de los sindicatos más poderosos y ricos del país —como al líder del poderoso sindicato petrolero Joaquín Hernández Galicia, "La Quina"—, quienes con el tiempo habían desarrollado intereses no siempre acordes con los del ejecutivo. Con esta medida, el nuevo presidente por una parte, ganó reconocimiento y credibilidad al atacar a ciertos "intocables" del sistema, y por otra, reforzó la imagen de un partido plagado de corrupción y podredumbre, del cual él se desentendía.

Existía una creciente conciencia entre varias fracciones del grupo hegemónico, sobre la necesidad de un cambio y una apertura como medios de supervivencia. Los viejos líderes acostumbrados a ejercer un poder directo e incuestionable sobre sus bases de apoyo, se vieron obligados, primero por las reformas económicas y luego por la modernización del partido, a ceder parte de sus prebendas, y a dejar entrar en el juego político a una serie de jóvenes con una mentalidad distinta —los renos—, los cuales se quejaban, no habían entrado por la "ancha puerta de la política".

Las otras fracciones del grupo hegemónico también vieron mermadas varias de las condiciones que anteriormente les permitieron reproducirse sin mayor esfuerzo. La "burguesía estatal" y los empresarios nacionales ligados fuertemente al amparo del gobierno, por ejemplo, tuvieron que enfrentar un proceso de apertura a la par que un retiro de subsidios y apoyos, con lo cual vieron socavados sus monopolios.

Los renos coincidían en una cosa: la forma tradicional de operar del régimen posrevolucionario, era caduca. La vieja estructura corporativista ya era incapaz de movilizar a sus bases y garantizar votos. Se necesitaba reconstruir una nueva base electoral capaz de incluir a una sociedad cada vez más participativa. Como declaraba un miembro del PRI: "ya no necesitamos movilizar a la gente. Se movilizan solos y votan contra nosotros" (entrevista realizada por Dresser el 31 de octubre de 1989, citada en *Idem*). A esta corriente se oponían los "dinos", por supuesto, en tanto atacaban directamente sus canales de poder establecidos hacia más de veinte años:

Estos grupos piensan que están siendo atacados por dos frentes: las reformas económicas del presidente y la modernización del partido. Piensan que están en desventaja, ya que a los líderes obreros se les ofrece mantener tanto la austeridad salarial como la reforma partidaria. A los políticos-empresarios con intereses en todo tipo de empresas se les ofrece la modernización de los aparatos de distribución, producción y comercialización que socavan sus monopolios, y por otra parte, también se les ofrece la reforma partidaria (*Ibid*, 231)

Sin embargo, a pesar del amplio uso que le dio a los mecanismos tradicionales de legitimación del régimen posrevolucionario, Carlos Salinas de Gortari no hizo más que profundizar sus contradicciones y seguir cavando su tumba, al enfatizar su ineficacia, tendencia a la corrupción y a la exclusión de las mayorías. Como habría de declarar:

La mayoría de las reformas instituidas por el Estado que surgió de la Revolución ya no son garantía del nuevo tipo de desarrollo que el país exige [...] El Estado creció mientras disminuía el bienestar del pueblo [...] Hoy el Estado sólo defiende los privilegios de las viejas capas empeñadas en mantener el *status quo* (Excélsior, 02/11/89, citado en *Ibid*, 235).

El plan de desarrollo anterior tenía que ser abandonado, y su garante: el Estado, reformado de tal manera que nos pudiéramos subir "al tren de la modernidad". Al igual que hizo uso de las prácticas corporativas y de cooptación para poner orden en el régimen, cerrar filas en su partido y así crear condiciones favorables para continuar con el proceso de reestructuración,

hizo uso de otro de los principales ejes de poder: el presidencialismo, para ir socavando las bases de dominación de la tradicional fracción hegemónica.

En efecto, poco a poco, se fue separando de su partido y de la fracción corporativista, buscando una imagen más cercana a la gente –más alejada de la imagen acartonada que durante tanto tiempo prevaleciera en los líderes corporativistas⁴; y acercándose a otros sectores sociales –como los empresarios ligados al grupo monopólico financiero nacional, el PAN y/o a los grupos extranjeros– de manera directa para formar sus propias bases de apoyo y llevar a cabo la siguiente generación de medidas de corte neoliberal.

Por su parte, la fracción corporativista y la burguesía estatal, ubicadas en el partido, ya no eran buscadas directamente para formar alianzas, pedir opiniones o apoyo para llevar a cabo las reformas, antes bien, eran simplemente utilizadas e “informadas” de lo que se iba a hacer. De manera tal que poco a poco fueron desplazadas de su posición privilegiada como parte importante en la toma de decisiones, para ser suplantadas por un nuevo grupo poco identificado con el sistema Estado-gobierno-PRI y su forma de manejar la economía y la política. Lo anterior lo podemos palpar con los Pactos, mediante los cuales el presidente y su equipo definían las metas, para luego negociar su instrumentación con los sectores empresariales, y al final sólo utilizar el escenario institucional para informar al movimiento obrero acerca de decisiones previamente acordadas.

Así pues, los golpes asestados a ciertos líderes corporativistas; la nueva imagen, más moderna, que manejó; su alejamiento parcial del PRI, y el disciplinamiento que impuso a su interior; su crítica a la forma tradicional de operar del régimen posrevolucionario –corrupto, sordo a las exigencias sociales, ineficiente, etcétera–; su inteligencia para recuperar bases en el bloque de poder y en la sociedad por sí mismo, desligándose del partido; el supuesto éxito que estaba logrando en cuestión económica; fueron tan sólo algunos de los factores que le permitieron crear un ambiente de legitimidad bastante amplio y así recuperar la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones de 1991. Su partido logró una mayoría absoluta –más del 60% de los votos– en todas las entidades federativas, a excepción del Distrito Federal, otorgándole una independencia legislativa casi irrestricta.

⁴ En este sentido, según Dresser: “Salinas presentó una imagen de presidente ‘informal’; sentado bajo los árboles y hablando con los campesinos, participando en reuniones sin utilizar podiums espectaculares, descendiendo del auto presidencial para platicar con los trabajadores [...] Los grupos populares empezaron a creer que tenían acceso al presidente, que estaba ahí para ellos y que escucharía sus demandas” (*Ibid.*; 237).

Ello se logró en gran parte gracias a que se procedió a ganar el voto de los simpatizantes priistas, antes que ir en busca de votos por otros lados⁵. Se postularon líderes bien conocidos en los ámbitos locales. Incluyeron sectores que antes no eran escuchados por el PRI, en especial de tipo urbano-popular. Se subrayó la militancia individual antes que la corporativa y se “cooptaron” a varios sectores: campesinos, obreros, populares, de clase media, etcétera de bajos ingresos, a cambio de beneficios materiales y promesas de gestoría vía recursos provenientes del PRONASOL –Programa Nacional de Solidaridad⁶-. Según Dresser:

Esta organización se volvió la columna vertebral de una nueva estructura neocorporativista que abordaba las necesidades inmediatas de la clase media baja y de los miembros del sector informal [...] Fue diseñado como fondo discrecional para la construcción de nuevas redes de patronazgo entre los electorados de bajos ingresos, especialmente entre los grupos marginales de los entornos urbanos que tienen fuerza electoral (*Ibid.*, 243).

Por otra parte, ya a punto de salir, siguió arremetiendo contra el régimen posrevolucionario y su partido como el instrumento que garantizaba legitimidad electoral –canalizando beneficios económicos y políticos a los líderes y bases-, al realizar ciertas reformas a nivel electoral. Una vez que el discurso de la democracia comenzó a ser parte fundamental del discurso de los partidos de oposición y de la sociedad en general, el presidente lo retomó poniendo en marcha una serie de reformas de carácter más cualitativo que harían posible una recomposición de las instituciones del poder político. Entre ellas sobresalió aquella mediante la cual se modificaba la cláusula de gobernabilidad que impedía que un partido por sí solo tuviera mayoría calificada en el congreso. Ello reducía notablemente la influencia del presidente en el proceso legislativo ya que su partido no podía reformar la Constitución por sí mismo, sino que necesitaba del apoyo de otras fuerzas políticas, necesitaba negociar y establecer alianzas con la oposición.

Los cambios anteriormente descritos, provocaron un reacomodo en la estructura de poder. En este contexto, los empresarios privados –nacionales, asociados al grupo monopolístico financiero, y extranjeros- comenzaron a tener una mayor injerencia en los asuntos de gobierno, incorporándose algunas veces como candidatos no sólo del PAN, sino también del PRI

⁵ Como declarara un candidato del PRI: “nos decidimos por el voto seguro de los distritos priistas y dejamos de visitar los distritos panistas donde sabíamos que perderíamos de cualquier manera” (entrevista realizada por Denise Dresser el 8 de junio de 1992, citada en *Ibid.*; 242)

⁶ Este programa, cabe mencionar, constituyó uno de los instrumentos más importantes alrededor del cual Salinas creó legitimidad entre las bases populares. Gracias a las grandes cantidades de recursos que destinó a su desarrollo –en 1989 su presupuesto fue de 1 billón 640 mil millones de viejos pesos; en 1990 de 3 billones 667 mil millones; para 1991 de 5 billones 187 mil; para 1992 de 6 billones 8 mil y para 1993, 7 billones 747 mil millones de viejos pesos- pudo granjearse el voto de una gran cantidad de campesinos, obreros y sectores populares.

—durante las elecciones de 1991, por ejemplo, el 17% de los candidatos del PRI provinieron del sector empresarial (*Ibid*; 243)-. Y como funcionarios de alto nivel en puestos clave del gobierno.

Los cambios que produjo la aplicación de las medidas neoliberales en el patrón de acumulación provocaron que la fracción corporativista, la burguesía estatal y el empresariado, pequeño, mediano, micro y en general aquel ligado al mercado interno y dependiente del amparo estatal, con poca capacidad de competir en un ambiente de apertura internacional, se vieran debilitadas, y suplantadas por la tecnoburocracia, una fracción empresarial más vigorosa ligada al sector de las exportaciones y al capital financiero.

Salinas de Gortari tendió a reforzar la autoridad de la institución presidencial a fin de que la transición hacia el neoliberalismo no se saliera del control de la nueva —potencial— fracción hegemónica. Mantuvo un férreo control sobre el partido, el Estado, los poderes legislativo y judicial así como sobre la sociedad, a fin de utilizarlos en contra de sí mismos, justificándose a partir de los discursos de la modernización, de la democracia, del liberalismo social: que acaba con lo viejo pero a cambio otorga ciertas prebendas económicas y políticas. Así, utilizó los mismos mecanismos que garantizaban la dominación del régimen posrevolucionario, para terminar con él mismo. Tendió, como diría Dresser, a “descorporativizar” a la fracción corporativista y a todas aquellas que alguna vez reinaran en este sistema, para sentar las bases de una nueva dominación, más excluyente y poco redistributiva. Tendencia que seguiría hasta nuestros días.

Con lo que respecta a la oposición, pronto, como lo demostrarían las elecciones, pudo recobrar el control y la legitimidad del Estado, en parte gracias a lo dicho anteriormente, pero también a una fuerte campaña de represión y desprestigio. Es bien sabido que durante el salinismo, el movimiento cardenista sufrió una persecución muy seria: varios de sus integrantes fueron secuestrados, desaparecidos, extorsionados, torturados, etcétera; y además, aprovechando el control que se tenía de los medios de comunicación se inició toda una campaña de amedrentación que prevenía a la sociedad de estos “bándalos” identificados con el movimiento comunista. Los demás grupos de izquierda igualmente experimentaron una seria represión, que terminaría por exacerbar su tendencia a la desintegración.

Un balance general del sexenio de Salinas de Gortari

Las reformas aplicadas por el gobierno salinista, ya a partir del segundo año, parecían estar dando buenos resultados. Sin embargo, factores tanto de orden interno como externo, influyeron en un nuevo proceso de recesión, provocando una posterior crisis al final del sexenio. Efectivamente, para principios de la década de 1990, por ejemplo, el dinamismo de la economía mexicana comenzó a descender al desatarse a nivel internacional un periodo de recesión –empezando por los Estados Unidos, para después propagarse a Europa y Japón-, lo cual provocó una baja en nuestras exportaciones, que habría de combinarse con una sensible baja en la cotización de los productos primarios, incluido el petróleo, en el mercado mundial.

En el ámbito interno, el crecimiento excesivo del déficit en la balanza comercial y en cuenta corriente, aunado a la política de sobrevaluar el peso, fueron factores que constituyeron una bomba de tiempo. El crecimiento del déficit externo se daba a partir de la creciente tendencia a importar a un ritmo superior al del producto nacional, dadas las facilidades otorgadas por la indiscriminada apertura externa y por el efecto de los crecientes flujos de capital externos en la demanda agregada. De tal manera que “entre 1989 y 1992, el déficit de la balanza comercial, sin considerar los ingresos de las maquiladoras, se multiplicó por diez, al aumentar de 2 505 millones de dólares –MD- a 20 676 MD. En 1993, debido a la desaceleración de la economía, se redujo ligeramente a 18 891 MD” (*Ibid*; 117).

En vez de contrarrestar tal tendencia a partir del impulso de un crecimiento más sólido, basado en el desarrollo de nuestro sistema productivo, el gobierno decidió hacerlo a partir de la entrada masiva de recursos del exterior, con lo cual no se eliminó sino que se acentuó “la restricción externa y volvió a la economía mexicana más dependiente de los recursos del exterior” (*Idem*).

Con tal de atraer y mantener a los capitales externos en el país, el gobierno de Salinas liberó irresponsablemente nuestra economía y el sistema financiero, de tal manera que creó una base de financiamiento sumamente volátil. Ello aunado a las grandes posibilidades que otorgó al grupo financiero monopolístico nacional de acrecentar sus fortunas y poder de decisión sobre el rumbo del país, preparó el terreno para una crisis bastante fuerte en 1994.

La desaceleración económica, se combinó con un fenómeno de sobreendeudamiento, tanto de las empresas como de los consumidores, producto de la expansión crediticia que se vivió

durante el periodo 1989-1993. Ante un sobreendeudamiento y la desaceleración de la economía, las empresas tuvieron que reestructurar sus planes de acción de tal manera que se redujeran sus costos: recortaron personal; elevaron sus márgenes de capitalización; las más grandes pensaron en la posibilidad de fusionarse; trataron de elevar los niveles de productividad de sus empleados, etcétera. La reacción de los bancos al aumentar su cartera morosa, fue la de restringir los créditos, haciéndolos más selectivos y llevar a cabo, igualmente, un proceso de reestructuración. Ello habría de acentuar la desaceleración productiva y por lo tanto del crecimiento de la economía.

La posibilidad de seguir solventando estos problemas a partir de la constante entrada de flujos externos se vio limitada a partir de 1994, debido a que la liquidez del mercado internacional tendió a disminuir. Esta falta de liquidez, obedecía a factores como: el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos, la recuperación de las economías centrales, lo que incrementaba la demanda de fondos externos; y la contracción de los flujos de capital japoneses, por problemas en su sistema financiero. La entrada de capitales externos al país, de esta manera se vio afectada por lo que se echó mano, como siempre, al endeudamiento.

Cuando los capitales tanto nacionales como externos consideraron que la situación era insostenible, decidieron salir en estampida del país provocando una tremenda crisis financiera y bancaria a finales de 1994. Las reservas internacionales de esa manera, prácticamente se agotaron; el peso registró una devaluación de más del 100% con respecto al dólar; y la entrada de capitales externos se detuvo. Al igual que en 1982, se habría de desatar el pánico en los círculos financieros, al estar a punto de desatar una crisis sistémica internacional, a través del llamado efecto tequila.

Salinas terminó su gobierno en medio de un gran escándalo político y social. El advenimiento de una severa crisis económica había de desinflar los sueños de millones de mexicanos que habían creído en la ilusión de que ya éramos parte del primer mundo, y que por fin íbamos a entrar en otra fase de expansión y crecimiento sostenido, similar o mejor aún que la experimentada durante la aplicación del PAISI. La muerte del candidato priista, Luis Donaldo Colosio, habría de demostrar que el proceso de "modernización" y "democratización" que estaba viviendo el régimen era aparente y el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional justo el mismo día en que entraba en marcha el TLCAN, había de poner en evidencia que los problemas sociales aún no estaban resueltos. Que a pesar de todos los intentos por acabar con la oposición, ésta seguía viva, buscando canales de expresión.

Conforme su sexenio iba terminando y durante los primeros años del siguiente, fueron saliendo a la luz diversos datos que daban cuenta de la corrupción y el autoritarismo que privó en su gobierno. La imagen del presidente ejemplo, del mandatario cercano y conciente de las necesidades de la gente, del que habría de posicionar al país en el primer mundo, se derrumbó súbitamente. Entre ellos estuvo el hecho de que a partir de su gestión, diversos empresarios y personajes cercanos al presidente tuvieron la oportunidad de amasar inmensas fortunas, de tal manera que para 1994 la prensa habría de destacar,

[...] -ante el escándalo de la opinión pública nacional-, que entre la lista de 358 multimillonarios del mundo que publica la revista *Forbes* se encuentran 24 mexicanos, la mayoría de ellos con vínculos indirectos -prestanombres- o de tipo familiar con las altas esferas del poder nacional y que amasaron sus increíbles fortunas en un lapso no mayor de seis años (Oliver *et. al.*, 1995; 126).

Los estrechos vínculos que mantuvo con las mafias del narcotráfico también empezaron a llenar las páginas de la prensa, así como con la Iglesia Católica -incluso realizó reformas con el objeto de darle un mayor reconocimiento en la vida pública nacional-.

Por otra parte, la crisis de 1994 habría de poner en evidencia la ineficiencia del modelo neoliberal para garantizar, ya ni siquiera bienestar social, sino un crecimiento económico capaz de autosustentarse. Como señalara Guillén: "se trata de la primera crisis de la economía mexicana que no puede ser atribuida a las políticas del 'pasado populista', sino que es el resultado de la incapacidad del modelo neoliberal para suplir eficazmente al modelo sustitutivo de importaciones" (*Ibid.*; 132).

Los resultados hasta ese momento alcanzados por el nuevo modelo, no constituyeron, sin embargo, un aliciente para hacer un alto en el camino y plantearse seriamente la necesidad de cambiar el rumbo del país. Nuestro presidente, en cambio, se encargó muy bien de buscar un digno sucesor, que no dudara un solo momento en que el neoliberalismo seguía siendo, no la alternativa más adecuada, sino la única posible. Una vez asesinado Luis Donald Colosio, escogió a Ernesto Zedillo, dos veces secretario durante su administración. Con él continuaría el proceso de consolidación del neoliberalismo.

***Ernesto Zedillo: la consolidación del neoliberalismo
y la caída del grupo hegemónico posrevolucionario***

El sucesor de Carlos Salinas habría de ser Ernesto Zedillo Ponce de León. Dos veces secretario de Estado durante el sexenio de Salinas –en la Secretaría de Programación y Presupuesto y en la de Educación Pública–, Zedillo tuvo poco tiempo para organizar su campaña, pero a pesar de ello, ganó las elecciones de 1994. Con un eslogan que prometía el “bienestar para tu familia”, logró obtener aproximadamente el 40% de las votaciones. La celebración por este hecho, empero, no duró mucho tiempo ya que pocos días después de su toma de posesión, estalló una crisis económica que habría de conjugarse con el levantamiento de un movimiento armado al sur del país, en Chiapas, uno de los estados más pobres. Siguiendo la tradición oficial, la nueva administración responsabilizó a su antecesor.

Según Zedillo, la crisis se había desatado debido a errores cometidos durante la administración anterior. A finales de diciembre, haría una declaración:

El tamaño del déficit de la cuenta corriente y la volatilidad de los flujos de capital con que se financió, hicieron muy vulnerable a nuestra economía [...] El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos llegó a ser tan grande durante los últimos años, que dadas las circunstancias internas y externas, era insostenible. Es preciso reconocer que hubo una subestimación del problema, y esta subestimación fue sumamente grave (Citado en: *Ibid*, 125).

Rompiendo varias de las “reglas no escritas” del sistema y del protocolo de la sucesión presidencial –soportar “resignadamente” que sobre su espalda recayeran todos los males del presente, desaparecer del escenario público al dejar el puesto, ir delegando gradualmente el poder a su sucesor de tal manera que se fueran agrupando todas las secciones alrededor del nuevo presidente, entre otras– Salinas comenzó a hacer declaraciones en torno a que la crisis de 1994 no había sido su responsabilidad. Los fenómenos de los que hablaban –excesivo déficit y dependencia del exterior, así como sobrevaluación del peso– no existían. La crisis había sido producto de factores políticos –el levantamiento del EZLN o la muerte de Francisco Ruiz– y de errores de la nueva administración.

Ante la situación de crisis, Zedillo procedió a negociar un nuevo préstamo externo, poner en marcha medidas tendientes a salvar la economía –más bien a los banqueros–, continuar con el proceso de reestructuración así como alejarse y poner coto al protagonismo de su antecesor.

Para salvar la banca procedió a formar fondos de apoyo ante la quiebra técnica de la mayor parte de los bancos recién privatizados. Como señala Flores Olca, en vez de dejar quebrar a los bancos insolventes, proteger a los depositantes y fortalecer la capitalización de los bancos más solventes, el gobierno tendió a absorber toda la carga de la crisis comprando la cartera vencida –para lo cual se creó el FOBAPROA- y recapitalizándolos –a través del PROCAPTE-, sin el menor sacrificio por parte de los banqueros y en las condiciones más ventajosas para ellos (2000; 542).

La negociación de estos “apoyos”, estuvo plagada de corrupción y malos manejos, lo que les permitió seguir “haciendo leña del árbol caído” e incrementar irrpresionantemente sus cuentas bancarias, que, por supuesto, se encontraban en el exterior. En todo momento, como se vino haciendo desde finales de la década de 1970, se tendió a salvaguardar los intereses de la fracción monopólica financiera nacional y la extranjera, las cuales, en cada crisis veían aumentar sus ganancias y su poder de incidencia sobre la toma de decisiones en cuestión de la política económica interna.

Con el objeto de obtener credibilidad y así mayor independencia, Zedillo procedió al mismo tiempo a cortar nexos con el ex presidente. Realizó una campaña para llamar al partido y a su gabinete a cerrar filas, y encarceló a su hermano Raúl Salinas, por ser el presunto autor intelectual de la muerte de José Ruiz Massieu –secretario general del PRI-. Con ello, el nuevo presidente destruyó lo que quedaba de su relación personal con Salinas –después de una serie de conflictos entablados a partir de la discusión de quien había sido el culpable de la crisis-, acabando con otras dos reglas doradas de la tradición del régimen posrevolucionario: no meterse con la familia y cuidar las espaldas del predecesor. Salinas se exilió en Dublín, pero continuó teniendo gran incidencia sobre el sexenio zedillista.

En cuestión económica, no atacó al modelo neoliberal, todo lo contrario, en su opinión constituía la opción correcta:

Además del esfuerzo de los mexicanos, estos buenos resultados se deben al valor y a la decisión con que a lo largo de más de una década nuestro país ha emprendido grandes reformas para contar con bases económicas sanas y abiertas, modernas y dinámicas. Con unidad, con responsabilidad y con tenacidad los mexicanos hemos trabajado y venimos trabajando para cimentar una genuina economía de mercado; una economía con finanzas públicas sanas, con políticas fiscales y monetarias responsables; una economía abierta, que aliente la productividad con regulaciones cada vez más claras y sencillas que estimulen la inversión; una economía integrada para aprovechar las enormes ventajas que ofrece la globalización; una economía donde la iniciativa individual y la energía social

no son avasalladas por el Estado y donde éste, en vez de gastar en empresas ineficientes, gasta en las personas, las familias y las comunidades (Citado en: Guillén, *op. cit.*; 201).

El problema había consistido en que los postulados neoliberales no se siguieron adecuadamente. Para superar esta crisis y liberar al país de crisis futuras, emprendió una política ortodoxa abiertamente restrictiva. En materia monetaria, estableció tasas de interés muy altas –con lo cual no se resolvió la crisis bancaria o el sobreendeudamiento–; en materia fiscal, se trató de mantener finanzas públicas equilibradas, aceptando incurrir en déficits pequeños. Se incrementó el IVA del 10 al 15%. Se mantuvieron los topes salariales –los ajustes del salario mínimo se establecieron en función de la tasa de inflación esperada–; se adoptó el régimen cambiario de libre flotación de la moneda; se privilegió la atracción de flujos externos –ofreciendo una subvaluación del peso– con el objeto de mantener la inflación en un dígito y manejar el déficit comercial; se dio pleno apoyo a la apertura comercial dictada por el TLCAN; se buscaron otros tratados de libre comercio; los flujos privados continuaron siendo el principal medio de financiamiento del desequilibrio de la balanza en cuenta corriente; se emprendieron nuevas privatizaciones, esta vez de los ferrocarriles, aeropuertos, puertos, comunicación satelital y petroquímica; y se privatizó el sistema de pensiones del IMSS y se crearon las Afores, por medio de las cuales los bancos privados obtuvieron el derecho de financiar estos recursos.

Zedillo en todo momento apeló al mantenimiento de la estabilidad de las variables macroeconómicas, como su eje principal de acción. Si se mantenían estables, al país le iba bien. Claro, al país en abstracto, porque en general, la mayoría de la población mexicana seguía viviendo en la miseria. La aplicación de estas medidas fue un éxito, si se toma en cuenta que el principal objetivo del gobierno era mantener estables las principales variables económicas. Ya para 1996, el déficit externo y presupuestal, el nivel del tipo de cambio, la inflación o la deuda externa, eran más manejables, de tal manera que el advenimiento de la crisis asiática en 1997 no provocó graves desajustes.

Sin embargo, fue todo un fracaso si se toma en cuenta que no logró establecer las bases para la superación de nuestro estancamiento y la desarticulación de nuestro aparato productivo. Así como tampoco para la recuperación de los niveles de vida que los mexicanos alcanzaron durante la aplicación del PAISI. Incluso los niveles de pobreza siguieron aumentando. Un informe divulgado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU por ejemplo, indicaba en 1999 que a tan sólo dos años de haber subido al poder, la pobreza

afectaba ya a 26 millones de mexicanos, contra 17 millones que existían en 1994. El principal aumento se registró en las 36 regiones más pobres del país, que se encuentran casi todas en seis de los 32 estados de la federación: Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Puebla y Veracruz. No es casualidad que estos estados en su mayoría sean rurales. Para el año 2000, según cálculos no oficiales, la pobreza ya alcanzaba a más de la mitad de la población.

Sin embargo, a pesar de no observar ningún avance en cuestión de bienestar social, durante el gobierno de Zedillo sí se obtuvieron bastantes logros en cuanto coadyuvó a establecer reglas un tanto más equitativas para la lucha política. Durante su gestión, por primera vez en la historia del México moderno, se descentralizó la instancia encargada de gestionar las elecciones, al crearse el Instituto Federal Electoral; también se descentralizó el Distrito Federal: a partir de 1997 éste ya tendría un jefe de gobierno propio. Y no se mostró gran resistencia al hecho de que el PRI empezara a perder cada vez con más frecuencia elecciones de todo tipo, tanto estatales como locales. Además mostró una mayor tolerancia a la libertad de expresión.

Durante su gobierno, cabe destacar, se asestaron varios golpes a la antigua fracción hegemónica, ubicada en el partido oficial, lo cual terminaría por quitarle efectivamente el poder tiempo después. En primer lugar, fue guardando una distancia con respecto a su partido. Éste durante todo el régimen posrevolucionario había sido el principal instrumento y base de poder del grupo hegemónico, encabezado por el presidente. Había servido como: a) el instrumento por excelencia de reclutamiento para la mayoría de los cargos políticos del país; b) como el instrumento de control de las organizaciones de masas; c) como la máquina que garantizaba la legitimidad electoral del sistema; y d) como el gran aparato distribuidor de las concesiones corporativistas.

Al alejarse de él renunciaba a asumir el papel de liderazgo que por derecho y por obligación le correspondía; renunciaba a su tarea de utilizarlo como base para asegurar la continuación del sistema. La decisión de Zedillo de guardar su "sana" distancia causó desorientación y comenzó a sentar las condiciones para el desencadenamiento —otra vez— de una lucha por el poder entre los diferentes sectores del partido. Por otra parte, en la recta final de su sexenio, rompió —aunque solo en apariencia— con la tradicional práctica del dedazo, y, en cambio, instó al partido a realizar elecciones internas para designar al que sería el próximo candidato presidencial.

El PRI accedió y organizó una campaña para elegir al próximo candidato. Se escogió a cuatro conocidos militantes: Roberto Madrazo Pintado –ex gobernador de Tabasco-, Manuel Bartlett –ex gobernador de Puebla; a él se atribuye la “caída del sistema” que llevó a Salinas al poder-, Francisco Labastida Ochoa –ex ministro de gobernación- y Humberto Roque Villanueva –ex líder del partido-. Al parecer el ganador resultó ser Roberto Madrazo, digno representante de la fracción corporativa, un asiduo defensor de la corriente de los “dinos”. Sin embargo, el presidente terminó inclinándose por Labastida, que aseguraba la continuidad del neoliberalismo –y no del sistema posrevolucionario- a pesar de contar con poco apoyo popular y tener poco carisma –todo lo contrario de Madrazo-.

Las elecciones del 2000 fueron desastrosas para el régimen posrevolucionario, que a pesar de todo seguía manteniéndose en la presidencia, eje de la vida nacional. Después de más de setenta años de dominación, perdió frente a un digno representante neoliberal: Vicente Fox, un próspero empresario agroindustrial que competía por el PAN. Zedillo, ante tal evento no reaccionó más que felicitando al próximo presidente. Su decisión y poco interés en que el PRI ganara esas elecciones, acrecentó la incertidumbre de sus militantes y las pugnas por el poder. Hablan quedado en una situación de orfandad en la que ya no tenían líder –el presidente-, y en la cual no quedaba nada claro quien marcaría las acciones a seguir después de su fracaso.

Al “arrebatarle” de esta manera, dos de los ejes articuladores que dieron forma, estabilidad y legitimidad al régimen posrevolucionario: presidencialismo y partido de Estado, se terminó por destronar al grupo hegemónico tradicional y abrir paso a la consolidación del nuevo bloque de poder. La tendencia que habría de empezar en la década de los setenta, por fin daba frutos. La derecha se encontraba al frente del país. El PRI ya no tendría que enfrentar la “contradicción existencial” de tener que sostenerse a partir de una ideología que pisaba con cada paso que daba.

La derecha mexicana, encabezada por la tecnocracia y el grupo monopólico financiero nacional, a diferencia del PRI, no cuenta con las ataduras que contaba la antigua fracción dirigente. El régimen posrevolucionario basaba su pacto social en un sistema de concesiones y alianzas incluyentes, buscando la conciliación de los diferentes intereses sociales a partir de la negociación. Basaba gran parte de su legitimidad en el apoyo de bases populares, las cuales constituían un importante instrumento de control y contrapeso. El modelo neoliberal, en cambio, no necesita de la conciliación de intereses con bases populares ni de la concesión de nada –sólo lo necesario para mantener niveles de gobernabilidad aceptables-. Todo lo

contrario: su alianza es con los grandes capitales nacionales y extranjeros; es excluyente y se basa en la explotación de las mayorías para beneficiar a las minorías. La continuación del neoliberalismo, en definitiva, tenía que pasar por el desplazamiento de una clase política desgastada y atada al pasado –por su ideología y por las condiciones a partir de las cuales reproducía su dominación-. Para permitir el ascenso de una nueva, la cual pudo crecer y madurar a partir de su cobijo.

Conclusiones

A lo largo de su historia, el capitalismo se ha enfrentado a la tarea de ir superando las constantes trabas/contradicciones que su propio desarrollo le va imponiendo. Como cualquier forma de organización social que pretenda sobrevivir, depende del cambio constante de "estrategias" que le permita, una vez agotadas las anteriores, seguir dándole vida y dinamismo al eje que articula su sentido y razón de existir –en este caso, la revalorización y acumulación del capital-.

El qué tipo de estrategia habrá de imponerse y seguir garantizando las condiciones de reproducción del sistema, como pudimos constatar a lo largo de nuestro trabajo, no va a depender tanto de la superioridad teórica o empírica de los diferentes proyectos de sociedad contendientes, sino del *desenvolvimiento del juego político –enmarcado en un contexto histórico determinado– en el cual las diferentes fuerzas sociales se enfrentan*. En otras palabras, el potencial hegemónico de un proyecto no hay que buscarlo tanto en el plano de las ideas como en el plano de la lucha política.

El neoliberalismo, no obstante la probada ineficacia de sus condiciones estructurales –en cuanto tiende a sentar la reproducción del sistema en bases muy volátiles y precarias, a la vez que a exacerbar la polarización de la riqueza-, pudo ubicarse y legitimarse como la propuesta hegemónica de sociedad, guiando el proceso de reestructuración del mundo capitalista a finales del siglo XX, gracias a que pudo librar una batalla de manera efectiva y en todos los frentes. En el proceso tuvieron que darse las siguientes condiciones:

- 1) El surgimiento de un bloque pro neoliberalismo lo suficientemente capaz de organizarse para llevar a cabo una lucha tendiente a imponer su modelo de reestructuración como el válido. Este bloque se apoyó y surgió a la par de un movimiento de derecha más extenso que sirvió como base para su impulso posterior.

i) Como pudimos ver, las décadas de 1960 y 1970 constituyeron el escenario de una serie de acontecimientos que coadyuvaron a poner en duda y en peligro la legitimidad y hegemonía del capitalismo, así como el liderazgo indiscutido de los Estados Unidos. La impotencia y fracaso de la socialdemocracia, ante un contexto que demandaba acciones eficaces y rápidas, constituyó un importante caldo de cultivo para el fortalecimiento de la nueva derecha. Para la conformación de una alianza conservadora que clamaba, en los países centrales, por recuperar los espacios perdidos y poner en orden "sus patios traseros". Es entre las propuestas de esta nueva derecha que podemos encontrar al neoliberalismo, asiduo enemigo del socialismo y del movimiento obrero, el cual prometía devolverle al capitalismo su vitalidad y regresar a sus bases y a lo que se consideraba su "naturaleza".

ii) El fortalecimiento de la derecha no fue el resultado de una "reacción improvisada y epidérmica" frente a la crisis de los setenta --aunque ésta haya sido su principal detonante--, ya que constituyó todo un movimiento cuya formación venía gestándose de manera paulatina y meditada, desde décadas atrás. Desde sus comienzos la nueva derecha tomó muy en serio sus ideas así como su papel en el devenir histórico por lo que se dedicó a luchar por él. Así, sus principales seguidores y líderes establecieron una red compuesta por varios núcleos que incluyeron numerosas organizaciones económicas y sociales. En ese aspecto, tuvieron el acierto de irse ubicando en varios --si no en todos-- los puestos clave de la sociedad: crearon organizaciones de cuadros destinadas fundamentalmente al cabildeo, la defensa jurídica y la propaganda --en especial entre aquellos movimientos sociales inconformes tanto con sus gobernantes como con los movimientos surgidos durante las décadas de los 60 y 70-. Se ubicaron en posiciones importantes tanto en el gobierno como en empresas. Se unieron a movimientos religiosos. Buscaron espacios en los principales medios de comunicación. Pronto comenzaron a editar sus propias revistas y periódicos; a escribir sus propios libros y a transmitir sus ideas a través de sus voceros televisivos y radiofónicos; y, a la vez, crearon sus propias escuelas --especialmente los empresarios que quisieron formar cuadros acordes con sus necesidades--, desde las cuales respetados y prestigiados intelectuales dictaban sus ideas.

- 2) La capacidad ideológica del neoliberalismo, que pudo presentar no sólo una explicación a la crisis, sino también toda una vía para "superarla". En este sentido, tuvo el acierto de presentarse como una alternativa viable, tanto ante el malestar social, como ante el del capital.

i) Aprovechando el descrédito del entonces grupo dominante, buscó construir un consenso propio convirtiendo el malestar social en su discurso. Al malestar lo enfrentó como un problema real, interpretándolo y dándole un sentido desde su muy particular visión de las cosas.

ii) Desde diferentes palcos los neoliberales comenzaron a dedicar sus esfuerzos a llevar a cabo una labor ideológica de construcción de sentido común populista, apelando a un sin fin de valores, tradiciones y sentires positivos ya existentes, tales como el de la libertad o la democracia, para entretejerlos con su discurso. Hizo especial uso de aquellos valores que específicamente no parecerían tener relación alguna con cualquier clase social, y que en sí podían constituirse como elementos de discursos muy diferentes y articularse de diversas formas. Con ello pudo, por un lado, realizar una labor de "neutralización", disfrazando su discurso como un llamado a la *sociedad en general* y no a una *clase en particular*, y por otro, ubicarse "del lado del pueblo", en oposición al Estado opresor.

iii) En su mayoría, el discurso –de la nueva derecha en general, y de los neoliberales en particular– estuvo cargado de moralismos que explotaban el conservadurismo y el miedo de la gente. Al mismo tiempo supieron crear una mentalidad de "crisis" que difundió un sentimiento de desaliento y la impresión de que las cosas podían empeorar antes que mejorar. Frente a esta situación pudieron mostrarse como una verdadera alternativa, segura de sí misma, capaz de emprender acciones tendientes a implementar soluciones eficaces –lo cual no se podía decir de la socialdemocracia–.

iv) Además, el neoliberalismo pudo presentarse como un proyecto racional, es decir, como una teoría económica, que no llevaba consigo ningún tipo de prejuicio o cargas valorativas, sino hechos y pruebas de carácter "científico". A la gente en general, le ofrecía el restablecimiento de un orden libre de autoritarismos, y al capital el restablecimiento de sus tasas de ganancia¹.

3) Una intensa lucha política por parte de la alianza derechista –pro neoliberalismo– por ubicarse en la estructura de poder, y por implantar su proyecto de sociedad haciendo uso de todo tipo de mecanismos. Desde los más coercitivos como las invasiones militares y la creación de cuerpos militares tendientes a mantener en orden a aquellos

¹ Como menciona Samir Amin, el neoliberalismo supo darle a sus diferentes auditorios lo que pedían: "Milton Friedman [...] comprendió lo que se quería oír: que los salarios son siempre demasiado elevados –hasta en Bangladesh–, que las ganancias son siempre insuficientes para incitar a los ricos a invertir" (2001: 148).

países que buscaban alternativas diferentes de sociedad –Chile y Nicaragua, por ejemplo–; pasando por aquellos en los cuales la coerción se encuentra implícita, aunque no expresada en el uso de la fuerza física, como el pago de las deudas externas; hasta las ayudas económicas para “alentar el desarrollo” de los países periféricos.

- 4) La pérdida de legitimidad del hasta ese entonces grupo hegemónico, tanto entre sus bases como entre los demás grupos en el bloque de poder. La conjunción de las luchas de estos actores se pudo conjugar con las demás luchas de la sociedad y así formar un frente amplio.
- 5) El gradual agotamiento del patrón de acumulación existente, producto de una serie de cambios objetivos, que derivó en una fuerte crisis global y que se conjugó con la incapacidad del grupo hegemónico del momento de ofrecer una alternativa para superarla.

i) El advenimiento de cambios objetivos en el contexto internacional a partir de finales de la década de 1960, como la presencia de una tercera ola científico-tecnológica, el surgimiento –o resurgimiento– de economías fuertes capaces de contender por la hegemonía hasta ese momento indiscutida de los Estados Unidos, la industrialización de varios países del Tercer Mundo, la “financiarización” de las economías, el debilitamiento de los Estados-nación, el fortalecimiento y cada vez mayor independencia de las compañías transnacionales, sólo por mencionar los más importantes, fueron factores que trastocaron los cimientos que daban estabilidad y fortaleza al patrón de acumulación hasta ese momento vigente. Los cambios trastocaron las condiciones –tanto económicas como políticas y sociales– mediante las cuales el grupo hasta ese momento hegemónico reproducía su dominación y legitimaba su lugar. Y ante ese escenario se vio impotente. Sólo la nueva derecha parecía tener el suficiente potencial como para hacer algo ante la crisis global del capitalismo.

Para el caso de México en particular, parece ser que los factores que influyeron para que el neoliberalismo se ubicara como la alternativa hegemónica de reestructuración, fueron los siguientes:

- 1) El advenimiento de una crisis estructural que, combinada con la registrada en el ámbito internacional, no pudo ser postergada a través de los mecanismos que hasta ese tiempo habían funcionado: intervención deficitaria en la economía, endeudamiento externo

excesivo y explotación del petróleo. El advenimiento de esta crisis tendió a debilitar las condiciones que le habían posibilitado al grupo hegemónico ejercer su dominio.

2) Pérdida de legitimidad del hasta ese momento grupo hegemónico tanto entre sus bases como entre sus contrapartes en el bloque de poder.

i) La crisis de 1982 y la consecuente reestructuración, constituyeron un fuerte golpe al dominio del grupo hegemónico. La primera, porque afectó directamente los niveles de vida de la población en general –especialmente de sus bases-. Y la segunda, porque restó eficacia a los mecanismos clave en el ejercicio de su dominación –por ejemplo, el otorgar concesiones tanto políticas como económicas, así como cooptar y corporativizar a sus bases, contrapartes y “disidentes”, por medio del incremento del gasto público en cuestiones de salud, educación pública, obras públicas, vivienda, subsidios, ascensos sociales y la puesta en marcha de ciertas reformas, entre otros-. Las políticas contraccionistas impedían seguir otorgando esas concesiones, base de la legitimidad del régimen posrevolucionario. Los sectores sociales acostumbrados a dar a cambio de recibir, al ser prácticamente obligados a sólo dar sin recibir, fueron perdiendo fidelidad y se fueron uniendo a las filas de los ya de hecho disidentes.

ii) Al mismo tiempo, también provocaron una fuerte reacción por parte de sus contrapartes en el bloque de poder: los empresarios tanto nacionales como extranjeros, específicamente los pertenecientes al grupo financiero monopolístico, ya que en su opinión la gestión gubernamental de la crisis resultaba mediocre. Ya anteriormente había habido roces entre ellos, pero esta vez era diferente. Sus contrapartes se encontraban más organizadas, contaban con más poder –económico y político- y además eran más independientes.

iii) La crisis de 1982 y la ineficiente gestión por parte del grupo hegemónico, provocó que pudieran combinarse tanto el malestar social de las bases –expresado en varios movimientos de centro-izquierda-, como el de los grupos en el bloque de poder –organizados en una alianza de derecha con otros como la Iglesia y gran parte de las capas medias-. Fue en este momento en el que pudo cuajar un frente de oposición más complejo que después derrocaría al régimen posrevolucionario.

3) Presiones extranjeras como parte de las renegociaciones de la deuda externa y la entrada de capitales transnacionales.

4) Presencia de una serie de grupos nacionales contrarios al gobierno y su forma de gestionar, organizados y acordes con las corporaciones y tendencias internacionales hacia el neoliberalismo. Su lucha se pudo conjugar con las demás luchas de la sociedad y así conformar un frente de oposición al régimen más amplio.

i) La implantación del neoliberalismo en el país no se trató de una simple imposición externa, ya que existían en el interior grupos de derecha inconformes con el autoritarismo gubernamental, y más acordes con la ideología liberal –en tanto aplababa a la eliminación del Estado interventor-. Entre estos grupos encontramos: a una fracción perteneciente al mismo grupo hegemónico: la tecnoburocracia, a los empresarios nacionales, especialmente a los del grupo financiero monopólico, y en sí a aquellos más identificados con el exterior; a los intereses externos –en especial el gobierno y empresas estadounidenses-, la Iglesia, el PAN, y algunos sectores de las capas medias.

5) Una lucha por parte de los grupos pro-neoliberalismo por ubicarse en el bloque de poder como fracción hegemónica, que incluyó mecanismos coercitivos y autoritarios que fueron desde la eliminación física de los grupos disidentes, hasta la utilización del aparato estatal –caracterizado por su organización jerárquica y su tendencia a la cooptación- como forma de eliminar adversarios y atraer simpatizantes.

i) En esta lucha fue determinante la toma del ejecutivo por parte de una fracción pro neoliberalismo: la tecnoburocracia –perteneciente al grupo hegemónico-. Ésta, una vez que ascendió al poder con Miguel de la Madrid, trató de asegurar por todos los medios la continuación de la reestructuración, aprovechando la jerarquización y autoritarismo del sistema. Desde ahí pudo aislar paulatinamente a la fracción hegemónica –la corporativista dentro del grupo hegemónico- de las instancias encargadas de tomar las decisiones más importantes para el país, y al mismo tiempo, ir socavando sus parcelas de poder.

ii) En el avance del proceso, Carlos Salinas de Gortari habría de ser clave, ya que supo rescatar –utilizar- los mecanismos que garantizaron a la todavía fracción hegemónica la reproducción de su dominio, para adjudicarse él mismo legitimidad. Así, hizo uso de la cooptación, la corporativización, el clientelismo, etc., para recuperar las bases del régimen posrevolucionario y otorgar legitimidad a su gobierno.

iii) Poco a poco, se fue separando del partido y de la fracción corporativista, buscando una imagen más cercana a la gente –más alejada de la imagen acartonada que durante tanto tiempo prevaleciera en los líderes corporativistas-; y acercándose a otros sectores sociales –como los empresarios ligados al grupo monopólico financiero nacional, el PAN y a los grupos extranjeros- de manera directa para formar sus propias bases de apoyo y llevar a cabo la siguiente generación de medidas de corte neoliberal. Por su parte, la fracción corporativista y la burguesía estatal, ubicadas en el partido, ya no fueron buscadas directamente para formar alianzas, pedir opiniones o apoyo para llevar a cabo las reformas, antes bien, eran simplemente utilizadas e “informadas” de lo que se iba a hacer. De manera tal que poco a poco fueron desplazadas de su posición privilegiada como parte importante en la toma de decisiones, para ser suplantadas por un nuevo grupo poco identificado con el sistema Estado-gobierno-PRI y su forma de manejar la economía y la política. Lo anterior lo podemos palpar con los Pactos, mediante los cuales el presidente y su equipo definían las metas, para luego negociar su instrumentación con los sectores empresariales, y al final sólo utilizar el escenario institucional para informar al movimiento obrero acerca de decisiones previamente acordadas.

iv) Por parte de Salinas también hubo una campaña de exterminación hacia el movimiento de centro-izquierda que comenzaba a repuntar con fuerza.

6) La capacidad ideológica del neoliberalismo para ubicarse como el discurso que habría de recoger el malestar social y transformarse en una alternativa viable.

i) Aunque cabe mencionar que en el caso de México, el discurso neoliberal no tuvo un impacto tan grande. Se podría decir que sólo el sector de la derecha era afín. La gran mayoría, como lo demostró el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, fue un ejemplo de que no eran tanto los preceptos revolucionarios los que estaban en descrédito, sino la élite gobernante. En el avance del neoliberalismo tuvo que intervenir un proceso de “mezcla” en el que se hizo uso de los mismos mecanismos que anteriormente le habían ayudado al grupo hegemónico revolucionario a legitimar su lugar –programas inclusivos de bienestar social, la cooptación, la corporativización, el clientelismo, etcétera-, que facilitaban el apoyo de la población; el presidencialismo –si el sistema político mexicano no hubiera sido tan jerárquico, tal vez hubiera sido más difícil llevar a cabo la reestructuración-; la apropiación y manipulación del malestar social en contra del grupo hegemónico, especialmente por parte del gobierno de Salinas –es decir, supo ubicarse del lado del pueblo mientras que intentó desligarse de la fracción hegemónica-; y el manejo de un discurso “renovador” y moderno. Todo ello se

concretizó en el famoso discurso del liberalismo social, que buscaba combinar lo mejor del "populismo" y del liberalismo.

II

Al estudiar el modelo neoliberal no se puede más que constatar el siguiente hecho: su adopción ha correspondido a la necesidad de activar al capitalismo, una vez que el patrón de acumulación anterior dejó de ser funcional, es decir, una vez que el desarrollo de los hechos registrados durante las décadas de los 60 y los 70, superaron sus premisas. La forma en la cual se tendió a reactivar, por otra parte, puede ser asumida como una respuesta defensiva y ofensiva por parte de los países centrales, especialmente los Estados Unidos, para recuperar el terreno perdido y así superar el descenso tendencial de la rentabilidad y abrir un nuevo ciclo de expansión a largo plazo, en el cual ellos seguirían gozando del liderazgo internacional —como lo pudimos apreciar en el segundo capítulo—.

Para los países periféricos, hasta la fecha ha significado establecer un patrón de acumulación bastante "defectuoso" e ineficiente, que en vez de generar crecimiento y corregir los problemas estructurales de sus sistemas económicos, los ha acentuado. En el caso específico de México y América Latina, ha sentado las bases de un patrón que garantiza eficientemente nuestro rezago, estancamiento, endeudamiento y pobreza. Como diría acertadamente Arturo Guillén:

La estrategia neoliberal, uno de cuyos ejes fundamentales fueron la apertura comercial y financiera, más que configurar un modelo *secundario-exportador* fundado sobre una base productiva más sólida, dio lugar a una suerte de modelo *terciario-importador*, basado en el predominio de las actividades financieras, comerciales y especulativas y en el ingreso desbordado de productos y capitales provenientes del exterior (2001; 138).

Nuestras economías se han reestructurado de tal manera que la riqueza tiende a concentrarse en unas cuantas manos y a fluir constantemente hacia el amortiguamiento de unas deudas que parece jamás se terminarán de pagar. Los capitales fluyen pero al área financiera en detrimento de la productiva, lo cual nos hace aún más dependientes del exterior. Nuestros tradicionales desequilibrios externos se acentúan debido a que nuestra incapacidad productiva nos orilla a importar cada vez con mayor frecuencia sin que el comportamiento de las exportaciones haga contrapeso. Las crecientes importaciones, de más bajos costos, desplazan constantemente a nuestros productores nacionales. Y ante la falta de suficientes divisas —por la exportación neta de capitales al pago de la deuda, la insuficiente entrada de divisas por exportaciones y nuestro

estancamiento productivo- nuestras autoridades prefieren poner en marcha políticas de corte contraccionista y de endeudamiento. En otras palabras, prefieren establecer condiciones más atractivas para los grandes inversionistas extranjeros y nacionales —elevando las tasas de interés y colocando valores en los mercados financieros que garantizan jugosos dividendos— aunque ello signifique serias trabas para el desarrollo interno.

La aplicación de las políticas económicas de corte neoliberal, en especial aquellas de austeridad y apertura económica, han tenido como consecuencia el desinhibir la recuperación de las inversiones productivas, tanto en actividades que ya tenían cierto grado de desarrollo como en aquellas ramas que pudieran repuntar en un nuevo crecimiento nacional. Como diría Adrián Sotelo, este tipo de economía hasta la fecha no ha sido capaz de contrarrestar la crisis y el declive de sectores productivos importantes pero sensibles a la contracción y la recesión, “en general, de las industrias y ramas de producción social que se encuentran ligadas a la reproducción del consumo popular, de la fuerza de trabajo y a la fijación de los salarios” (1995; 56). Tampoco ha sido capaz de desarrollar otro tipo de industria que pudiera darles a estas economías un lugar más competitivo en el mercado. Los empresarios que quedaron, en general los más poderosos, se volcaron a las actividades más lucrativas: la especulación financiera, la agroexportación y las maquilas, por ser más rentables, de rápida recuperación y que implican poca inversión.

En cuanto a las industrias que podrían ser competitivas en el mercado mundial, como las de punta —la electrónica, por ejemplo—, o las más modernas —como la automotriz—, generalmente son presididas por capitales internacionales, por lo que la mayor parte de las remesas se van al extranjero —“generando procesos internos de desacumulación de capital en detrimento de las economías nacionales” (*Ibid.*; 57)—. Al mismo tiempo se ha dedicado a explotar las ramas de consumo suntuario ligadas a la demanda de las clases medias y altas, lo cual tampoco ha contribuido a contrarrestar la crisis y provocar un nuevo repunte.

En general, el modelo ha funcionado para ciertos sectores como el industrial ligado a la exportación y el financiero, pero no para las grandes mayorías. Siguiendo la lógica de la obtención de la máxima rentabilidad, han basado su desarrollo en la contención y reducción de los salarios, la creación de un ejército de reserva bastante grande y flexible, la superexplotación del trabajo, el impulso de las exportaciones primarias, el abandono de prácticamente todo apoyo a la producción relacionada con el mercado interno, la contención del apoyo a medianas y pequeñas empresas, la poca aplicación de tecnología a los procesos

productivos, y una tremenda especulación financiera. La lógica anterior, ha dejado a los países periféricos en una situación de dependencia aún mayor.

Sin embargo, los problemas que enfrenta hoy en día el mundo entero, al parecer, no pueden ni podrán ser resueltos dentro del tipo de organización social actual, ya que la exclusión, la pobreza y el autoritarismo que caracteriza a la derecha dirigente –el grupo hegemónico del momento-, son las bases a partir de las cuales gira su dominación y garantiza su riqueza. Si hasta la fecha las cosas han ido bien para ellos, ¿por qué habrían de cambiar? ¿Qué importa que más de la mitad de la población mundial se encuentre en la pobreza, si el sistema puede mantenerse a partir de la existencia de un reducido, pero impresionantemente acaudalado grupo de consumidores? En otras palabras, retomando las cifras de Carlos Vilas citadas en la introducción: ¿Quién necesita a esa mitad de la población mundial que sólo percibe 7% del producto mundial, si se cuenta con un 8% que recibe el 80% del producto?

El sistema por sí mismo no va a cambiar. A pesar de todo, como mencioné en la introducción, se observa en el futuro inmediato una continuación. No obstante que las protestas cada día crecen en número y se presentan a escala mundial –se “globalizan”-, el panorama seguirá igual aunque tal vez puedan llevarse a cabo ciertas reformas que garanticen niveles adecuados de gobernabilidad. El problema, siendo realistas, es que hoy en día no existe un verdadero incentivo que fuerce al cambio, como menciona Hobsbawm:

¿Quién hubiera podido pensar que en 1993 algunos asesores económicos exclamarían “después de todo, quizá Marx tenía razón”? Sin embargo, el retorno al realismo tiene que superar dos obstáculos. El primero, que el sistema no tiene ninguna amenaza política creíble, como en su momento parecían ser el comunismo y la existencia de la Unión Soviética o, de un modo distinto, la conquista nazi de Alemania. Estas amenazas [...] proporcionaron al capitalismo el incentivo para reformarse. El hundimiento de la Unión Soviética, el declive y la fragmentación de la clase obrera y sus movimientos, la insignificancia militar del Tercer Mundo en el terreno de la guerra convencional, así como la reducción en los países desarrollados de los verdaderamente pobres a una “subclase” minoritaria, fueron en su conjunto causa de que disminuyese el incentivo a la reforma [...] El segundo obstáculo era el mismo proceso de globalización, reforzado por el desmantelamiento de los mecanismos nacionales para proteger a las víctimas de la economía del libre mercado global frente a los costes sociales de lo que orgullosamente se describía como “el sistema de creación de riqueza... que todo el mundo considera como el más efectivo que la humanidad ha imaginado” (1998: 556).

Hoy en día no existe un verdadero movimiento tendiente a conformar un bloque opositor fuerte, coherente y *realista*, que traspase el discurso “humanista” o “condenatorio”, para convertirse en una alternativa viable, en el sentido que manejamos a lo largo de nuestro

trabajo. La guerra que iniciara la derecha hace más de treinta años, resultó más que efectiva al desmantelar toda oposición, ello por medio de la coerción en la mayor parte de las veces.

La situación se torna aún más preocupante al observar que esta nueva derecha cada día es más intolerante y excluyente, que apoya —directa o indirectamente— acciones intervencionistas bélicas, sin tener más sustento que su propia voluntad y fuerza —en gran parte armamentista—. Su poder crece si tomamos en cuenta que los mecanismos y condiciones que anteriormente garantizaban un relativo control de las prácticas imperialistas, que protegían a la sociedad de los abusos del capital, que otorgaban a las naciones un cierto nivel de independencia, etcétera, se han visto minados.

El mundo entero necesita del surgimiento de un nuevo bloque histórico, capaz de contender por la hegemonía. Un proyecto que sea más incluyente y menos rapaz. Que tome en cuenta los aciertos del pasado, y al mismo tiempo trate de evitar los errores. Afortunadamente, al parecer ya están surgiendo alternativas que bien valen la pena, pero aún tienen que recorrer un largo camino en tanto la alianza hegemónica goza de un gran poder.

Bibliografía

- Aguilar, Alonso (1985). *Estado, capital y clase en el poder en México*. 2ª ed., Editorial Nuestro Tiempo, México.
- Amín, Samir (2001). *Crítica de nuestro tiempo. A los ciento cincuenta años del manifiesto comunista*. Siglo XXI editores, México.
- _____ (1996). "El futuro de la polarización global". En: González Casanova P. Y Saxe-Fernández J. *El mundo actual: situación y alternativas*. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM-Siglo XXI editores, México, pp 7-16.
- Antunes, Ricardo (2001). "Fordismo, taylorismo y acumulación flexible", *¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre la metamorfosis y la centralidad del mundo del trabajo*. Biblioteca de Servicio Social-Cortez Editorial, Brasil, pp 25-169.
- Ayala, José, et. al. (1980). *México hoy*. 4ª ed., Siglo XXI editores, México.
- Basáñez, Miguel (1991). *El pulso de los sexenios*. 2ª ed., Siglo XXI editores, México.
- Berger, Peter y Luckmann, Thomas (2001). *La construcción social de la realidad*. 17ª ed., Amorrortu editores, Buenos Aires.
- Boltvnik, Julio (1996). "Algunas tesis y reflexiones sobre la pobreza en México. Bases para una política para su superación", en Asa Cristina Laurell (coordinadora). *Hacia una política social alternativa*. Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana-Friedrich Ebert Stiftung de México, México, pp 97-128.
- Bourdieu, Pierre (1990). *Sociología y cultura*. CNCA-Grijalbo, México.
- Brenner, Robert (1999). *Turbulencias en la economía mundial*. CENDA-LOM Ediciones-Encuentro XXI, Chile.
- Castaingts Teillery, Juan (1994). *México: economía, mito y poder*. UAM-I, México.
- Córdova, Arnaldo (1974). *La formación del poder político en México*. 3ª ed., Ediciones Era, México (serie popular Era/15).
- _____ (1999). *La ideología de la Revolución Mexicana. La formación del nuevo régimen*. 22ª ed., Ediciones Era, México (colección problemas de México).
- Cueva, Agustín (1994). *El desarrollo del capitalismo en América Latina*. 15ª ed., Siglo XXI editores, México.
- Dos Santos, Theotonio (1982). *Imperialismo y dependencia*. 3ª ed, Ediciones Era, México.

- Dresser, Denise (1996). "Muerte, modernización o metamorfosis del PRI: neoliberalismo y reforma partidaria en México". En Cook, María Elena *et. al.*, *Las dimensiones políticas de la reestructuración económica*. Editorial Cal y Arena-UNAM, México, pp 211-250.
- Flores Olea, Víctor y Mariña Flores, Abelardo (2000). *Crítica de la globalidad*. Fondo de Cultura Económica., México.
- Friedman, Milton (1981). *Libertad de elegir. Hacia un nuevo liberalismo económico*. Ediciones Grijalbo, Barcelona.
- Fujji Gambero, Gerardo (1997). "Ajuste estructural con equidad. La distribución del ingreso en México, 1984-1994", en Valenzuela (coordinador), *El debate nacional. El futuro económico de la nación*. Tomo 3, Universidad Autónoma de Nuevo León-Editorial Diana, México, pp 225-240.
- González Souza, Luis (1998). "La soberanía de México ante los Estados Unidos frente a la globalización". En: Infante, José María (coordinador). *El Debate Nacional. México en el siglo XXI*. Tomo 1, Universidad Autónoma de Nuevo León-Editorial Diana, México, pp 171-187.
- Guillén R., Arturo (2000). *México hacia el siglo XXI. Crisis y modelo alternativo*. UAM-Plaza y Valdés Editores, México.
- Hayek, F. (1990). *La fatal arrogancia: los errores del socialismo*. Centro de Estudios en Economía y Educación, A.C., México.
- _____ (1986). *Camino de servidumbre*. Universidad Autónoma de Centro América, Costa Rica.
- Hobsbawm, Eric (1998). *Historia del siglo XX*. Crítica- Grijalbo Mondadori, Buenos Aires.
- Luna, Matilde, Tirado, Ricardo, y Valdés, Francisco (1991). "Los empresarios y la política en México, 1982-1986". En Pozas, Ricardo y Luna, Matilde (coordinadores). *Las empresas y los empresarios en el México contemporáneo*. Editorial Grijalbo, México, pp 21-88.
- Marini, Ruy Mauro (1994). "Proceso y tendencias de la globalización del capital", en Marini, Ruy Mauro y Millán, Marga (coordinadores). *La teoría social latinoamericana*. Tomo 4, ediciones El Caballito, México.
- Mannheim, Karl (1987). *Ideología y Utopía*. Fondo de Cultura Económica., México.
- _____ (1963). "El pensamiento conservador", en *Ensayos sobre sociología y psicología social*. Fondo de Cultura Económica, México, pp 123-298.
- Marx, Carlos y Engels, Federico (1975). *La ideología alemana*. 5ª ed., Ediciones de Cultura popular, S.A., México.

- Middlebrook, Kevin y Molinar Horcasillas, Juan. "Las dimensiones políticas del ajuste estructural: actores, tiempos y coaliciones". En Cook, María Elena et. al., *Las dimensiones políticas de la reestructuración económica*. Editorial Cal y Arena-UNAM, México, pp 39-106.
- Pereyra, Carlos (1980). "Estado y sociedad". En: Ayala, José, et. al. *México hoy*. 4ª ed., Siglo XXI editores, México, pp 289-305.
- Petras, James (2000). *Globaloney. El lenguaje imperial, los intelectuales y la izquierda*. Colección Herramienta, editorial Antídoto, Buenos Aires.
- Poulantzas, Nicos (1986). *Hegemonía y dominación en el estado moderno*. 7ª ed., Siglo XXI editores, México.
- Rivera Ríos, Miguel Ángel (1986). *Crisis y reorganización del capitalismo mexicano (1960-1985)*. Ediciones Era, México.
- _____ (1992). *El nuevo capitalismo mexicano. El proceso de reestructuración de los años ochenta*. Ediciones Era, México.
- Saldívar, Américo (1982). "Una década de crisis y luchas (1969-1978)", en Enrique Semo (coordinador). *México, un pueblo en la historia*. Volumen 4. Universidad Autónoma de Puebla-Editorial Nueva Imagen, México, pp 155-238.
- Saxe-Fernández, John, coordinador (1999). *Globalización: crítica a un paradigma*. Plaza y Valdés editores, México.
- Schmitt, Care (1985). "El concepto de lo político (texto de 1939)" *El concepto de lo político*. Ediciones, México, pp 15-76.
- Silva, Ludovico (1985). *Teoría y práctica de la ideología*. 15ª ed., Editorial Nuestro Tiempo, México.
- Therborn, Göran (1987). *La ideología del poder y el poder de la ideología*. 5ª ed., Siglo XXI Editores, México.
- Thompson, John (1990). *Ideology and modern culture*. Stanford University Press, California.
- Thurow, Lester (1993). *La guerra del siglo XXI*. Javier Vergara Editor, S.A., Argentina.
- Vachet, Andre (1972). *La ideología liberal*. Tomo 1, Editorial Fundamentos, Madrid.
- Valenzuela Feijoó, Juan Carlos (1991). *Crítica al modelo neoliberal*. UNAM, México.
- _____ (1998). "Opciones de desarrollo", en *El debate nacional. El futuro económico de la nación*. Tomo 3, Universidad Autónoma de Nuevo León-Editorial Diana, México.

- _____ y Vidal, Gragorio, coordinadores (1991). *Cambio estructural y bloque de poder*. Universidad Autónoma Metropolitana, México.
- Vilas, Carlos (1999). "Seis ideas falsas sobre la globalización", en John Saxe-Fernández, *Globalización: crítica a un paradigma*. IIE-UNAM-Plaza y Valdés Editores, México.
- Villareal, René (1986). *La contrarrevolución monetarista*. Fondo de Cultura Económica, México.
- Zemelman, Hugo (1973). "Historia y política en el conocimiento". *Historia y política en el conocimiento*. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, México (serie estudios 71), pp 45-52.
- _____ (2000). *Problemas antropológicos y utópicos del conocimiento*. El Colegio de México, México (jornadas/126).
- _____ (2001). *De la historia a la política. La experiencia de América Latina*. 3ª ed., Siglo XXI editores-Universidad de las Naciones Unidas, México (Biblioteca América Latina: actualidad y perspectivas).

Hemerografía

Almanaque Mundial 2003

- Anderson, Perry (1995-1996). "Balance del Neoliberalismo: lecciones para la izquierda", Revista El Rodaballo, Buenos Aires, año 2, núm. 3, verano, pp 8-13.
- Arzuaga M., Javier (1993). "Apuntes para leer al neoliberalismo". *Revista convergencia*, Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública-UAEM, México, año 1, núm. 3, junio.
- Candia, José Miguel (1999). "América Latina hacia el siglo XXI: globalización económica y reforma laboral". *Estudios Latinoamericanos nueva época*, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Centro de Estudios Latinoamericanos UNAM, México, año VI, núm. 11, enero-junio, pp 67-76.
- Castillo F., Dídimo (1999). "Integración económica y relaciones laborales en América Latina: el caso de Centroamérica". *Estudios Latinoamericanos nueva época*, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Centro de Estudios Latinoamericanos UNAM, México, año VI, núm. 11, enero-junio, pp 47-66.
- Cervantes, Luis (1986). "Lectura política de Keynes: los límites de la acción estatal (para prevenir el neostatismo)". *Revista Sociológica*, UAM-A, México, año 1, núm. 2, otoño, pp 145-155.

- Dos Santos, Theotonio (1999). "América Latina: militarismo, democratización, ajuste estructural y nuevas propuestas estratégicas". Estudios Latinoamericanos nueva época, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Centro de Estudios Latinoamericanos UNAM, México, año VI, núm. 11, enero-junio, pp 35-46.
- Escamilla Cadena, Alberto y Reyes García, Luis (2001). "Las transformaciones del presidencialismo mexicano". Revista Sociológica, UAM-A, México, año 16, núm. 45-46, enero-agosto, pp 233-250.
- Hall, Stuart (1981). "El gran espectáculo hacia la derecha". Revista Mexicana de Sociología, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, México, año XLIII, vol. XLIII, número extraordinario, pp 1723-1743.
- Hunter, Allen. "Entre bastidores: ideología y organización de la nueva derecha". Revista Mexicana de Sociología, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, México, año XLIII, vol. XLIII, número extraordinario, pp 1745-1780.
- La Jornada, 18 de agosto de 1996, p 48.
- Luna, Matilde (1985). "Transformaciones del corporativismo empresarial y la tecnocratización de la política". Revista Mexicana de Sociología, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, México, año XLVII, núm. 1, enero-marzo, pp 125-185.
- _____, Millán, René y Tirado, Ricardo (1985). "Los empresarios en los inicios del gobierno de Miguel de la Madrid". Revista Mexicana de Sociología, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, México, año XLVII, núm. 4, octubre-diciembre, pp 215-257.
- Oliver, Lucio, Ruiz Eduardo, Sánchez Irene y Sosa Raquel. "Neoliberalismo y política: la crisis mexicana". Estudios Latinoamericanos nueva época, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Centro de Estudios Latinoamericanos UNAM, México, año 2, núm. 4, julio-diciembre, pp 115-138.
- Ramírez Rancaño, Mario (1989). "Los saldos de la política económica neoliberal" Revista Mexicana de Sociología, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, México, año LI, núm. 4, octubre-diciembre, pp 171-197.
- Sotelo Valencia, Adrián (1995). "América Latina en la reestructuración económica mundial". Estudios Latinoamericanos nueva época, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Centro de Estudios Latinoamericanos UNAM, México, año 2, núm. 4, julio-diciembre, pp 47-70.
- Tirado, Ricardo (1985). "Los empresarios y la derecha en México". Revista Mexicana de Sociología, Instituto de Investigaciones UNAM, México, año XLVII, num. 1, enero-marzo, pp 105-123.
- Urréa Giraldo, Fernando. "Un modelo de flexibilización laboral bajo el terror del mercado". Biblioteca Virtual. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), www.clacso.edu.ar.